

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Montevideo, Lunes 22 de Julio de 1974

TOMO 276

Dirección
Florida 1178

Teléfonos
83371 - 915925 - 916583

Número 19316

La publicación en el "Diario Oficial" equivale a la comunicación en forma oficial para las oficinas que deban cumplir y hacer cumplir las leyes, actos gubernativos y administrativos. — (Decreto: 12 de agosto de 1907 y 3 de diciembre de 1917)

SUMARIO

Consejo de Ministros

1

Ley N.º 14.219. — Se modifica el régimen vigente en materia de arrendamientos y se dan nuevas normas sobre desalojos y lanzamientos.

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE MINISTROS

1

Ley N.º 14.218. — Se modifica el régimen vigente en materia de arrendamientos y se dan nuevas normas sobre desalojos y lanzamientos.

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente Proyecto de Ley.

CAPITULO I

DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CUALQUIERA FUERE SU DESTINO

Sección 1

Contratos que se celebren con posterioridad a la vigencia de esta ley

Artículo 1.º Los precios, plazos y demás elementos de los contratos de arrendamientos o subarrendamientos de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, comercio, industria o cualesquiera otros destinos de los previstos en esta ley, que se celebren a partir de la vigencia de la misma, se regirán por sus disposiciones y las del Código Civil, en cuanto correspondan.

Art. 2.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 101 de la ley N.º 13.659, de 2 de junio de 1968, en la redacción dada por el artículo 41 de la ley N.º 13.870, de 17 de julio de 1970, el Estado garantiza, por el término de veinte años, a contar de la vigencia de la presente ley, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, el régimen de libre contratación en los arrendamientos para las construcciones cuyo trámite de autorización ante las Intendencias Municipales se hubiere iniciado a partir de la fecha indicada, y en el futuro.

Art. 3.º Las partes fijarán un solo precio en moneda nacional, sin escalonamiento, para todo el plazo del contrato. Dicho precio se actualizará automáticamente cada doce meses, desde la celebración del contrato y hasta la entrega de la finca. Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 76 de esta ley.

La actualización se determinará aumentando el alquiler vigente en el mismo porcentaje de aumento que se ha operado en el valor de la Unidad Reajutable (UR artículos 14 y 15) durante los doce meses inmediatos anteriores al mes en el cual debe operarse la actualización de acuerdo al inciso anterior.

Los contratos de arrendamientos para casa-habitación y otros destinos que no sean industria y comercio, tendrán un

2

Ley N.º 14.220. — Se sustituyen disposiciones de la ley N.º 14.219, sobre arrendamientos de fincas urbanas y sub-urbanas.

plazo mínimo de dos años. En los arrendamientos para industria y comercio el plazo mínimo será de cinco años, aun cuando se pacte uno menor. Si se pactare un plazo menor a cinco años, el término restante hasta completar los cinco años, beneficiará únicamente al arrendatario. Vencidos los plazos a que se refiere este inciso el arrendador podrá solicitar el desalojo de la finca con plazo de un año.

Art. 4.º Al vencimiento del plazo contractual, si las partes no celebraren un nuevo contrato, el arrendatario tendrá derecho a un año de prórroga, salvo casos en que el destino sea industria o comercio.

Dicha prórroga operará automáticamente por el mero hecho de no hacerse entrega del inmueble en la fecha convenida.

Art. 5.º Vencido el plazo de prórroga establecido en el artículo anterior, el arrendador podrá solicitar en cualquier momento el desalojo de la finca con plazo de un año.

Sección 2

Contratos con plazo contractual pendiente

Artículo 6.º Los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley, con plazo contractual pendiente, se regirán, al vencimiento del mismo, por lo dispuesto en los artículos 4.º y 5.º de esta ley.

Art. 7.º Los contratos de arrendamiento para casa-habitación y otros destinos con plazo contractual pendiente del que hayan transcurrido más de dos años a contar de su celebración, se actualizarán automáticamente a partir de la vigencia de esta ley sobre la base del último alquiler y de acuerdo al porcentaje de variación de la UR (Unidad Reajutable artículos 14 y 15) operado desde que se cumplieron los dos años del contrato hasta la fecha, y en lo sucesivo, anualmente, por el mismo procedimiento.

Art. 8.º Hasta la entrega de la finca, el precio así determinado conforme al artículo anterior, se actualizará automáticamente en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 3.º de la presente ley.

Sección 3

Contratos con plazo contractual vencido

Artículo 9.º Los plazos legales acordados por la ley número 13.659, de 2 de junio de 1968 y sus modificativas, cesarán a partir de la vigencia de la presente ley, sin perjuicio de las prórrogas que se establecen.

Art. 10. Prorróganse hasta el 30 de junio de 1978 todos los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, con plazo contractual vencido. Vencido el término de la prórroga, el arrendador podrá solicitar el desalojo con plazo de un año.

Art. 11. Todos los contratos de arrendamiento para casa-habitación y otros destinos con plazo vencido, cuyos precios resulten de revisiones de alquiler, convenios, rebaja de alquiler o alquileres prorrogados vigentes al 17 de diciembre de 1968, se actualizarán automáticamente a partir de la vigencia de esta ley, en forma acumulativa, sobre la base del último alquiler y aumentándose en un porcentaje igual al que se ha operado en la UR (Unidad Reajutable artículos 14 y 15), desde que dicho alquiler estuvo vigente, y en lo sucesivo, anualmente, por el procedimiento general del artículo 3.º de esta ley.

Art. 12. El pago de las retroactividades por diferencias de alquiler, generadas en aplicación del régimen previsto en la ley N.º 13.659, de 2 de junio de 1968 y sus modificativas, se cumplirá de acuerdo a lo dispuesto en dichas normas, acumulándose a todos los efectos al alquiler que resulte de la aplicación de la presente ley.

Art. 13. A los efectos de esta ley, se entenderá por convenio con plazo pendiente, a aquel celebrado al amparo de lo dispuesto por la ley N.º 13.659 y sus modificativas, cualquiera sea el destino de la finca, que hubiera establecido precios del arriendo a regir con posterioridad a la fecha de la presente ley.

CAPITULO II

DE LA APLICACION DE LA UNIDAD REAJUSTABLE

Artículo 14. A los efectos de esta ley la UR prevista por el inciso 2.º del artículo 38 de la ley N.º 13.728, de 17 de diciembre de 1938, se aplicará —en todos los casos— de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

Art. 15. Declárase que los valores de la UR redondeados e interpolados mensuales, por cada mes, hasta junio de 1974 inclusive, son los siguientes:

Meses (Inclusive)	Valor en \$ la UR	Reajuste hasta junio/74 (*) desde el mes indicado en la primera columna	
		Índice	o/o aumento
Hasta diciembre/69	1.000	6,2500	525,00
De enero a diciembre/70	1.100	5,6818	468,18
De enero a diciembre/71	1.350	4,6296	362,96
De enero a setiembre/72	2.000	3,1250	212,50
Octubre/72	2.200	2,8409	184,09
Noviembre/72	2.400	2,604	160,42
Diciembre/72	2.600	2,4038	140,38
Enero/73	2.800	2,2321	123,21
Febrero/73	3.000	2,0833	108,33
Marzo/73	3.200	1,9531	95,31
Abril/73	3.400	1,8382	83,82
Mayo/73	3.600	1,7361	73,61
Junio/73	3.800	1,6447	64,47
Julio/73	4.000		
Agosto/73	4.200		
Setiembre/73	4.400		
Octubre/73	4.600		
Noviembre/73	4.800		
Diciembre/73	5.000		
Enero/74	5.200		
Febrero/74	5.400		
Marzo/74	5.600		
Abril/74	5.800		
Mayo/74	6.000		
Junio/74	6.250		

(*) A partir de esta fecha los cálculos dependerán de los futuros valores de la UR que se fijen por el Poder Ejecutivo. Para períodos de doce meses anteriores, el índice se calculará por el cociente del valor de la UR del mes anterior dividido por el del mismo mes en el año anterior. El aumento porcentual será siempre 100 veces la diferencia entre el Índice y la unidad.

Para los meses siguientes el Poder Ejecutivo deberá fijar los valores de la UR que deberán ser publicados en el mes siguiente a cada uno, en el "Diario Oficial" y en dos diarios de la capital.

Si en la fecha en que deba realizarse un reajuste de acuerdo a lo establecido en los artículos anteriores aún no se hubiera publicado el último valor de la UR, se podrá correr un mes hacia atrás el período de doce meses que determina el aumento de actualización.

Las modificaciones de precios de los arrendamientos que se mantendrán vigentes por períodos anuales, comenzarán siempre a regir desde el primer día del mes siguiente.

CAPITULO III

CASA - HABITACION

Normas generales

Artículo 16. Si el precio resultante de la actualización del alquiler superare el 25 o/o (veinticinco por ciento) de los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional ocupante de la finca, el nuevo alquiler será rebajado hasta el porcentaje referido. Cuando los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional sean inferiores a 25 UR (veinticinco Unidades Reajustables, artículos 14 y 15) el porcentaje máximo de afectación se reducirá al 20 o/o (veinte por ciento).

En ningún caso la rebaja podrá significar disminución de la renta vigente, más los gastos y consumos previstos en el artículo 77 de esta ley.

Cuando se opere la cesión prevista en el artículo 20 de esta ley, se computarán los ingresos del arrendatario cedente en el momento de la cesión y los de los cesionarios.

Esta norma no será de aplicación para los contratos que se celebren con posterioridad a la vigencia de la presente ley.

Art. 17. La acción de rebaja de alquiler se promoverá dentro de los noventa días perentorios siguientes a la vigencia de esta ley, y en lo sucesivo dentro de los sesenta días hábiles y perentorios posteriores a la publicación a que se refiere el artículo 15 de la presente ley.

Art. 18. En el caso previsto por el artículo 7.º el plazo para deducir la acción de rebaja será de cuarenta y cinco días contados desde el momento allí establecido.

Cuando de la acción de rebaja prevista en el artículo anterior resulte que el núcleo habitacional tiene ingresos mensuales inferiores a 25 UR (veinticinco Unidades Reajustables, artículos 14 y 15) la prórroga prevista en el artículo 10 será de dos años. En todo caso que de la acción de rebaja resulte que el núcleo habitacional tiene ingresos mensuales inferiores a 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables, artículos 14 y 15); deberá comunicarse a INVE a fin de que se les otorgue prioridad para la ocupación de las viviendas económicas que se construyan, así como en cualquier plan que se concrete para la adquisición de vivienda.

La acción de rebaja no alcanza al inquilino, aunque tenga ingresos inferiores a los indicados, siempre que sea propietario de bienes inmuebles de cualquier clase, incluso rurales, y cuando la suma de sus valores fiscales supere los \$ 5.000.000 (cinco millones de pesos).

El arrendador o subarrendador podrá deducir acción tendiente a que se modifique el alquiler resultante de la aplicación del 25 o/o (veinticinco por ciento) del núcleo habitacional, cuando a su juicio haya cambiado la situación económica de dicho núcleo. A tales efectos se computarán los ingresos de los doce meses anteriores inmediatos a la fecha de la demanda de revisión. Esta acción podrá deducirse sólo una vez durante cada bienio. La modificación del arrendamiento cuando correspondiere regirá desde la fecha de la demanda. El Juez, en la sentencia determinará si la diferencia de alquiler deberá abonarse al contado o hasta en cinco cuotas iguales y consecutivas.

Art. 19. A los efectos de los artículos anteriores se entenderá por ingresos mensuales líquidos los nominales que por cualquier concepto tenga el núcleo habitacional, menos los descuentos o retenciones legales que correspondan.

El ingreso será el promedio de los ingresos líquidos percibidos en los doce meses anteriores inmediatos a la fecha de la vigencia del nuevo alquiler.

Se entenderá por núcleo habitacional, el integrado por el arrendatario o subarrendatario y todos los demás habitantes de la finca, con excepción del servicio doméstico debidamente afiliado al Banco de Previsión Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo 16 de esta ley.

Art. 20. El contrato de arrendamiento y los derechos que otorgan al arrendatario de casa-habitación las leyes vigentes, benefician por su orden a su cónyuge o ex-cónyuge en caso de divorcio, a los ascendientes o descendientes de primer grado e hijos adoptivos, cuando hayan convivido con el arrendatario desde la celebración del contrato o hayan sido denunciados al contratar o durante todo el año inmediato anterior a la desvinculación del arrendatario. No regirán estas exigencias tratándose del cónyuge.

En los casos de divorcio o de separación de cuerpos el Juez de la causa determinará cual de los cónyuges continuará en el goce del arriendo.

En caso de desvinculación del titular del arriendo, la que deberá comunicarse en forma fehaciente al arrendador en un plazo no mayor de sesenta días hábiles siguientes a la misma, se operará la cesión legal en favor de las personas mencionadas que hayan formulado la comunicación, en el orden establecido en el inciso primero. La cesión prevista en los incisos anteriores podrá operarse por una sola vez, salvo el caso del cónyuge e hijos menores.

CAPITULO IV

LOCALES CON DESTINO A INDUSTRIA O COMERCIO

Normas generales

Artículo 21. Desde la vigencia de la presente ley, todos los contratos de arrendamiento de fincas destinadas a industria o comercio, se actualizarán de acuerdo al porcentaje de variación registrado en el valor de la UR (Unidad Reajutable, artículos 14 y 15) en el plazo de los últimos doce meses aplicado al último alquiler. Se exceptúan los arrendamientos con plazo contractual inferior a tres años, los cuales al cumplimiento de dicho plazo y en base al precio vigente establecido para el tercer año, se actualizarán conforme a lo expresado.

Art. 22. Los contratos a que se refiere el artículo anterior, desde la vigencia de esta ley o del cumplimiento de tres años en caso de plazos contractuales vigentes, se prorrogarán en su plazo por cuatro años, con alquileres que se actualizarán cada doce meses según el mismo procedimiento indicado en el artículo 3.º de esta misma ley, hasta la desocupación de la finca, teniendo el arrendador al vencimiento del plazo de prórroga, la facultad de desalojar con plazo de un año.

CAPITULO V

DEL SUBARRENDAMIENTO

Artículo 23. La facultad de subarrendar total o parcialmente deberá constar por escrito.

Se presumirá que hay subarriendo cuando se trate de ocupantes por más de tres meses que no sean parientes, hasta el cuarto grado, del arrendatario o de su cónyuge, con excepción del servicio doméstico debidamente afiliado al Banco de Previsión Social.

Esta presunción admite prueba en contrario.

CAPITULO VI

DE LAS EXCEPCIONES

Artículo 24. Durante la vigencia de los plazos legales de arrendamiento no podrá deducirse acción de desalojo, excepto las que se promuevan con referencia a:

- 1.º Los inmuebles expropiados.
 - 2.º Las fincas alquiladas de acuerdo con las leyes números 9.624, de 15 de diciembre de 1936, y su decreto reglamentario de 7 de noviembre de 1941; 9.980, de 13 de diciembre de 1940; 10.765, de 26 de agosto de 1946 y el artículo 20 de la ley N.º 11.490, de 13 de setiembre de 1950, cuando de acuerdo con el artículo 15 de la citada en primer término, modificado por el artículo 41 de la presente ley, no se hubiera realizado la sustitución de garantía dentro del plazo y forma en ella previstos.
 - 3.º Los inmuebles arrendados o subarrendados cuyos contratos hubieran sido resueltos por incumplimiento del arrendatario o subarrendatario por sentencia ejecutoriada y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley.
- La acción contra el subarrendatario corresponderá al arrendatario pero el arrendador podrá subrogarlo, o actuar directamente contra aquél o contra ambos, si la falta de cumplimiento del subarrendatario implica también una transgresión del contrato de arrendamiento.

- 4.º A) Cuando el propietario posea una o varias fincas que están arrendadas o hayan sido construidas para habitación en la misma localidad y no ocupe ninguna de ellas, podrá reclamar una para su propia vivienda. Aún cuando habite su propia casa, podrá reclamar una finca para que la habiten sus ascendientes y una para cada uno de

sus hijos que hayan contraído matrimonio, cuando éstos o aquéllos no ocupen ninguna vivienda de la que sean exclusivos propietarios o condóminos. Si el demandante fuera propietario de varias fincas y durante el juicio de desalojo quedara disponible una de ellas de características similares o inferiores —a criterio del Juez— a las de la solicitada en juicio, deberá darle prioridad, como arrendatario, al inquilino demandado, el que podrá pasar a ocuparla en un plazo no mayor de veinte días en las condiciones contractuales o legales en base a las cuales ocupa la finca objeto de desalojo. Si el arrendador no cumple con la obligación establecida, se clausurará sin más trámite el desalojo.

- B) Tratándose de una finca en condominio de origen sucesorio, o derivado de la sociedad conyugal, uno de los condóminos podrá reclamarla, con la ratificación de los demás copropietarios, para su propia vivienda, o para la de sus descendientes en primer grado que hayan contraído matrimonio o para sus ascendientes, cuando éstos o aquéllos no ocupen ninguna vivienda de la que sean exclusivos propietarios o condóminos.

Cuando los condóminos posean varias fincas que estén arrendadas o hayan sido construidas para habitación, el que no ocupe ninguna de ellas podrá reclamar, con la ratificación de los demás una para su propia vivienda. Aún cuando habite su propia casa podrá reclamar, con la ratificación de los demás condóminos, una para sus ascendientes y una para cada uno de sus hijos, que hayan contraído matrimonio, en caso de que éstos o aquéllos no ocupen ninguna vivienda de la que sean exclusivos propietarios o condóminos.

Se considerarán como única propiedad los casos en que los condóminos de varias fincas de origen sucesorio, hayan solicitado una de ellas para vivienda propia.

A los efectos de esta ley se consideran condóminos de origen sucesorio aquellos que hayan adquirido la propiedad en todo o en parte por el modo sucesorio, por causa de muerte. Las otras situaciones, a los efectos de esta ley, se consideran condominio de origen contractual, con excepción de los derivados de la sociedad conyugal.

Podrán, no obstante, dar el desalojo los condóminos que tengan la calidad de cónyuge entre sí en el momento de promoverse la acción referida.

A los efectos dispuestos por esta ley, no se reputará condominio a aquél constituido exclusivamente entre parientes hasta el segundo grado, con anterioridad al 31 de mayo de 1974.

En los casos de los incisos precedentes, el demandante que tenga varias propiedades deberá expresar los motivos que han determinado la selección de la finca y reseñar la situación de los arrendamientos de cada una, indicando el alquiler vigente e inmediato anterior a las fechas desde las cuales rigen los mismos. Si se probare la omisión de una o varias de las fincas arrendadas en la referida reseña, se clausurará el juicio de desalojo, de oficio o a petición de parte, siendo de cargo del actor los tributos y costos causados.

El Juez examinará el mérito de los fundamentos expuestos y no hará lugar a la causal excepcional de desalojo, cuando por las circunstancias del caso la promoción de aquél sirva o haya servido para obtener aumentos de arrendamientos que excedan los autorizados por la ley.

En tales situaciones, los aumentos pactados que excedan los autorizados por la ley serán anulados y se rechazará la demanda, imponiéndose al actor el pago de tributos y costos.

Esta sentencia será notificada a todos los arrendatarios del actor.

- C) Tratándose de condominios de origen contractual constituidos con anterioridad al 31 de mayo de 1974, se requerirán las siguientes condiciones:

- a) Que se haya otorgado la escritura de enajenación o la promesa tenga fecha cierta anterior a la arriba indicada.
- b) Cumplir con los demás requisitos de las letras A) y B) precedentes.

En este caso, si se probare la inexistencia de alguna de las condiciones requeridas, se clausurará el juicio de desalojo, de oficio o a petición de parte, siendo de cargo del actor los tributos y costos causados.

Art. 25. En los casos previstos en el numeral 4.º del artículo anterior, la finca deberá ser ocupada efectivamente dentro del plazo de ciento veinte días de su desocupación por quienes tengan derecho a ello de acuerdo con la demanda de desalojo, y no podrá dársele otro destino que el de la finca-habitación, no podrá ser enajenada ni arrendada total o parcialmente antes de transcurrir un plazo de dos años, a partir de la fecha en que quedó desocupada.

Cuando el estado de conservación de la finca requiera la realización de obras de reparación, el Juez, a solicitud fundada de parte, podrá ampliar el plazo para la ocupación hasta en ciento ochenta días más.

No regirá la prohibición de enajenar o arrendar en los siguientes casos:

1º) Por razones de salud del ocupante de la finca, ya sea el propietario, el ascendiente o descendiente que haya contraído matrimonio, debidamente comprobadas por un tribunal integrado por tres médicos designados por el Juez que entendió en la causa de desalojo.

2º) Por divorcio.

3º) Por razones de trabajo, cuando el ocupante de la finca sea destinado a desempeñar funciones o tareas o inicie una actividad o tarea fuera de la localidad donde está ubicado el inmueble, y deba permanecer fuera de ella por no menos de dos años, circunstancia que deberá ser debidamente probada ante el Juzgado que hubiese entendido en el juicio de desalojo.

4º) Por enajenación forzada.

5º) Cuando circunstancias supervinientes tornen inadecuada la vivienda ya sea por fallecimiento, incapacidad física, desintegración o ampliación del núcleo familiar u otras análogas.

6º) Cualquiera otra causa de entidad similar a las anteriores a criterio del Juez.

Art. 26. Tampoco, durante la vigencia de los plazos legales de arrendamiento podrá deducirse acción de desalojo, excepto las que se promuevan con referencia a:

1º) Los inmuebles de propiedad del Estado, de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Gobiernos Departamentales, de personas públicas no estatales, instituciones cooperativas, sociales, culturales, educacionales, asistenciales, de beneficencia, deportivas, gremiales o políticas, que gocen de personería jurídica y sean reclamados para ocuparlos a los efectos del cumplimiento de sus fines, pudiendo el Juez apreciar la necesidad razonable del desalojo. La ocupación deberá hacerse efectiva dentro de los ciento veinte días a partir de la fecha de entrega del inmueble.

2º) Las fincas para habitación, cuyo desalojo se solicite para reconstrucción parcial o total. En ambos casos, las reconstrucciones deberán duplicar, por lo menos, la capacidad locativa de la unidad habitacional cuyo desalojo se solicita, si no lo impiden las ordenanzas municipales.

Entiéndese por duplicación de la capacidad locativa la del número de ambientes destinados a habitación, siempre que no se disminuya la superficie edificada total y se incluya la ampliación proporcional de los servicios sanitarios.

3º) Los inmuebles arrendados o subarrendados para cualquier destino que no sea habitación, cuyo desalojo se solicite para reconstrucción total o parcial. El costo de las obras proyectadas que importen reconstrucción según resulte de los documentos estimativos que se presenten o de la pericia que se practique en caso de controversia, deberá ser igual o mayor al 50 o/o (cincuenta por ciento) del valor del inmueble determinado de conformidad con las disposiciones legales que rigen en materia de impuestos de herencias.

No obstante, no se tendrá en cuenta el costo de las obras proyectadas, cuando la reconstrucción signifique la transformación del bien, en su totalidad, para casa habitación.

4º) Las fincas destinadas a habitación a las cuales se cambie el destino, siempre que la reconstrucción sea total y se cuadruplique, por lo menos, el valor del inmueble determinado de conformidad con las disposiciones legales que rigen en la materia de impuestos de herencias.

5º) Las fincas ruinosas, cuyo estado apreciará el Juez, previa inspección ocular e informe pericial de la autoridad municipal cuando correspondiere o del Cuerpo Nacional de Bomberos, según las circunstancias.

Estas fincas no podrán volver a ser arrendadas ni ocupadas hasta tanto el Juzgado en que se tramitó el desalojo, resuelva que han perdido aquel carácter,

previo informe de la autoridad municipal cuando correspondiere o del Cuerpo Nacional de Bomberos, según las circunstancias.

6º) Cuando el propietario posea una o más fincas arrendadas para industria, comercio u otros destinos en la localidad, siempre que los arrendatarios tengan una antigüedad mayor de cuatro años, podrá reclamar solamente una de ellas para instalarse él o su hijo en esa misma finca, debiendo ser el giro del nuevo comercio, industria u otros destinos distintos del que estaba funcionando.

El propietario o su hijo deberán ocupar personalmente el inmueble sin admitirse ninguna forma societaria, por un plazo mínimo ininterrumpido de cinco años a partir de la desocupación del local salvo el caso de fallecimiento o incapacidad superviniente declarada judicialmente.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este inciso, le hará pasible de las sanciones establecidas en el artículo 71 de la presente ley.

Las excepciones establecidas en este artículo no podrán ser deducidas mientras exista plazo contractual pendiente.

Art. 27. Los condóminos de origen contractual, los accionistas de sociedades anónimas o en comandita y los promitentes compradores de cuotas de condominio podrán promover todas las acciones que esta ley acuerda a los propietarios. No obstante solamente podrán promover acción de desalojo para su propia vivienda o para sus ascendientes o descendientes, cuando los bienes objeto de la acción reúnan las condiciones de habitabilidad mínima indispensable, comprobada por las oficinas técnicas competentes del Municipio de radicación del bien en los términos previstos en el apartado C) del numeral 4.º del artículo 24 de esta ley.

Art. 28. No estarán comprendidas en las normas de esta ley, con excepción de las contenidas en el Capítulo VII y Sección I del Capítulo VIII, las siguientes situaciones:

A) Las fincas para vivienda que se alquilen por temporada.

Considérase contrato por temporada el arrendamiento de inmuebles en las zonas balnearias, delimitadas por los Gobiernos Departamentales respectivos fuera de los límites del departamento de Montevideo.

a) Cuyo plazo de vivienda no sea superior a cinco meses; o,

b) Que, aún contratado por un plazo mayor, haya sido suscrito con fecha anterior al 7 de octubre de 1964 y la finca no sea domicilio del arrendatario.

El plazo de desalojo será de quince días. El inquilino que retenga la finca arrendada por temporada por más tiempo del acordado en el contrato, será responsable de los daños y perjuicios que esa retención indebida irroge al arrendador.

En los casos en que se compruebe la utilización ilegítima del contrato de arrendamiento por temporada, el arrendador será condenado, preceptivamente, en los tributos y costos y en los daños y perjuicios causados al arrendatario.

B) Fincas arrendadas con destino a organismos o empresas internacionales, oficinas diplomáticas y consulares.

C) Los arrendatarios de casa-habitación que sean propietarios de fincas construidas o adquiridas al amparo de leyes o reglamentaciones especiales.

D) Los arrendatarios que posteriormente a la celebración o renovación de sus contratos hayan incorporado a su patrimonio o arrendado en la misma localidad una vivienda que posea comodidades similares o superiores a las existentes en la finca que arrienda.

E) Los arrendatarios o subarrendatarios que integren un núcleo habitacional cuyos ingresos mensuales líquidos sean superiores al equivalente a 130 UR (ciento treinta Unidades Reajustables, artículos 14 y 15).

Para la determinación de los ingresos mensuales líquidos se tomará en cuenta el promedio de los ingresos percibidos durante los doce meses anteriores a la promoción de la acción de desalojo.

Cuando existan hijos menores, o incapaces a su cargo, los referidos ingresos se incrementarán en el equivalente a 20 UR (veinte Unidades Reajustables, artículos 14 y 15) por cada uno.

F) Los arrendatarios o subarrendatarios de fincas habitación que integren un núcleo habitacional, a cuyos integrantes corresponda el pago del impuesto al patrimonio, con un patrimonio fiscalmente ajustado superior al equivalente a 3.000 UR (tres mil Unidades Reajustables, artículos 14 y 15). A los solos efectos de lo previsto en el

inciso anterior y en el presente, la Dirección General Impositiva informará exclusivamente, a pedido del Juzgado, si el arrendatario o subarrendatario se encuentra comprendido o no en esta situación.

G) A partir de los dos años de la vigencia de la presente ley, el Estado (Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial; Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Municipios) y organismos paraestatales, cuando sean arrendatarios o subarrendatarios.

H) El arrendatario que no habitare la finca en forma efectiva y continuada durante seis meses consecutivos sin causa razonable, o que hubiera satisfecho en otra sus necesidades de vivienda. Cuando el abandono pueda reputarse definitivo, el desalojo podrá promoverse aunque no haya transcurrido dicho plazo. El plazo de desalojo será de sesenta días.

En las situaciones previstas en los literales anteriores, con excepción de los literales A) y H), el arrendador queda facultado para promover el desalojo de la finca con plazo de un año.

Art. 29. En los casos de los numerales 4.º del artículo 24 y 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 6.º del artículo 26 si se efectuara traslación de dominio por acto entre vivos antes de hacerse efectivo el desalojo, se clausurará el juicio cualquiera sea su estado, salvo que el adquirente sea aquél para el cual se solicitó el desalojo.

No se aplicará esta disposición en los casos de los numerales 2.º, 3.º y 4.º del artículo 26 si el adquirente toma a su cargo las obligaciones del enajenante mediante ratificación en el respectivo expediente.

En las situaciones previstas en el numeral 4.º del artículo 24, el Juez podrá ampliar, a solicitud del demandado, el plazo de prueba hasta sesenta días, por razones fundadas.

Art. 30. En los casos comprendidos en los apartados 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del artículo 26 cuando se tratare de fincas de apartamentos o pisos cuyos locales se arrienden separadamente, deberán promoverse los desalojos de todos los locales afectados por las reconstrucción proyectada y no se decretará ningún lanzamiento hasta que haya sentencia ejecutoriada en todos los juicios iniciados contra los arrendatarios comprendidos.

Rechazada que sea una sola demanda, a petición de parte o de oficio, se decretará, sin más trámite, la clausura de todos los restantes desalojos pendientes. Similar clausura se operará si alguno de los inquilinos desalojados renovara contrato o se celebrara nuevo arrendamiento respecto a alguno de los apartamentos o locales motivo de juicio.

En ningún caso podrá hacerse uso de la causal a que se refiere este artículo, cuando existan arrendatarios con plazo contractual pendiente, cuyos locales o apartamentos estén comprendidos en la reconstrucción proyectada.

El acto al promover juicio de desalojo por las causales de los numerales 2.º, 3.º y 4.º del artículo 26, deberá acompañar copia del proyecto y memoria descriptiva de las obras que se proponga realizar, y la constancia de haber iniciado los trámites para la obtención de los permisos oficiales de construcción.

Dentro de los ciento ochenta días de intimado el desalojo deberá agregar la constancia de que se ha aprobado el permiso de construcción. Si así no lo hiciere se clausurarán de oficio los procedimientos, salvo que el actor pruebe fehacientemente que la demora en la obtención del permiso no le es imputable.

Las obras deberán comenzar dentro de los ciento veinte días contados a partir del momento en que el edificio quede totalmente desocupado. Durante ese plazo la finca no podrá ser arrendada.

Tratándose de fincas de apartamentos o pisos cuyos locales se arrienden separadamente, el Juez, de oficio o a petición de parte, agregará por cuerda, cuando estén en estado, los expedientes seguidos respecto de unidades habitacionales integrantes de un mismo edificio.

Art. 31. En los casos de los numerales 4.º del artículo 24 y 2.º, 3.º, 4.º y 6.º del artículo 26, el propietario cuya demanda fuere rechazada, no podrá promover nueva acción por la misma causal, hasta después de un año de haber quedado ejecutoriada la sentencia por la que no se hizo lugar al desalojo.

Art. 32. El plazo para el desalojo, en los casos previstos en el artículo 24, con excepción del numeral 2.º; y 1.º y 5.º del artículo 26, será de un año. En los desalojos promovidos al amparo de los numerales 2.º del artículo 24 y 1.º del artículo 26 serán de aplicación, en lo pertinente, las leyes especiales que correspondan, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rijan para el Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio del Interior. En la situación prevista en el numeral 5.º del artículo 26 el plazo lo establecerá el Juez aten-

diendo las circunstancias del caso, no pudiendo exceder de ciento ochenta días.

Art. 33. Si el arrendatario de una casa de inquilinato o de otro tipo de finca que determine la convivencia entre los inquilinos del mismo edificio, promoviere escándalos u observare una conducta tal que comprometiera gravemente la corrección de costumbres o la vida pacífica de la comunidad de inquilinos, el arrendador, o el coinquilino perjudicado podrá pedir judicialmente su desalojo con el plazo del artículo 36 de esta ley.

Art. 34. Los funcionarios del Estado que se encuentren prestando funciones en el extranjero, o fuera de su residencia habitual en el departamento, podrán deducir acción amparados en la causal prevista por el apartado 4.º del artículo 24 cuando exista resolución que disponga su retorno al lugar de origen. En tal caso el plazo para el desalojo será de un año, contado a partir de la fecha de la intimación respectiva.

Cuando exista plazo contractual pendiente estos funcionarios podrán ampararse en dicha causal, siempre que se haya consignado expresamente en el contrato dicha circunstancia.

Art. 35. Los porteros, cuidadores, limpiadores, jardineros de casas en balnearios, encargados y en general todos los empleados, que están al servicio de conventillos, casas de inquilinatos, apartamentos, escritorios o similares, y a los cuales se les proporcione vivienda en el propio edificio que sirven, con la única compensación que por tal concepto autoricen las leyes, reglamentos, laudos de Consejos de Salarios, o resolución de COPRIN, no tienen la calidad de arrendatarios. Podrán ser desalojados con plazo de treinta días; y no podrán oponer otras excepciones que las que acrediten su calidad de arrendatario, subarrendatario, promitente comprador o propietario, todo debidamente instrumentado.

Art. 36. El comodatario de un bien inmueble, aún si tuviera la calidad de precario, no modifica dicha calidad por el hecho de abonar los consumos de luz, agua corriente, gas u otros que se deriven del uso del mismo o por haberlos registrado a su nombre.

Corresponde al intimado probar que no tiene la calidad de comodatario, en la forma exigida por el artículo anterior. El desalojo será con plazo de quince días.

En todos los casos de desalojos cuyos plazos legales sean de quince días, la sentencia de primera instancia, que haga lugar al desalojo, será inapelable.

Art. 37. A partir de la vigencia de la presente ley, los arrendatarios y subarrendatarios contra quienes se hubiere promovido acción de desalojo, deberán abonar el precio del arriendo que corresponda de acuerdo al régimen establecido en la misma.

CAPITULO VII

DE LAS GARANTIAS

Artículo 38. El locador, sublocador, sus representantes o administradores de propiedades no podrán exigir en garantía del arrendamiento una suma superior al monto de cinco meses de alquiler tratándose de fincas destinadas a habitación y de diez meses cuando tuvieren otros destinos.

Para los contratos que se celebren en el futuro, el arrendatario deberá integrar el depósito en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, los que se considerarán por su valor de cotización en la Bolsa de Comercio, a la fecha de constitución de la garantía. Dichos depósitos deberán realizarse en el Banco Hipotecario del Uruguay, dentro de los quince días de celebrado el contrato de arrendamiento.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente el arrendatario podrá constituir garantía personal.

El Banco Hipotecario del Uruguay centralizará la totalidad de los depósitos en garantía de arrendamientos; las garantías constituidas con anterioridad deberán también depositarse en el mismo Banco.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes, serán pasibles de una multa que el Juez fijará entre una y cinco veces el monto del depósito retenido. La infracción será denunciada ante el Juzgado de Paz de ubicación del inmueble. Comprobada la infracción, el Juez librará mandamiento de embargo por las sumas correspondientes al monto del depósito, intereses de los títulos y multas respectivas, siguiéndose los trámites del juicio ejecutivo. La multa pertenecerá por mitades al denunciante y al Departamento Financiero de la Habitación del Banco Hipotecario del Uruguay.

Cada vez que aumente el precio del arrendamiento, el arrendador o subarrendador podrá exigir al arrendatario o subarrendatario que complete el depósito en garantía de arrendamiento de acuerdo con lo establecido en este artículo, dentro del plazo de sesenta días contados a partir de su fijación siempre y cuando no se trate de depósitos efectuados en Obligaciones Hipotecarias Reajustables.

En la oportunidad prevista en el inciso anterior el arrendatario deberá, en su caso, convertir la totalidad de la garantía depositada en Obligaciones Hipotecarias Reajustables. Los arrendatarios y subarrendatarios podrán realizar la conversión mediante entregas en Obligaciones Hipotecarias Reajustables en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en los dos incisos precedentes, dará lugar a la rescisión del contrato de arrendamiento. La mora operará de pleno derecho.

Art. 39. Cuando se haya constituido fianza personal de un contrato de arrendamiento y el precio del mismo aumente por cualquier motivo en función del contrato, de la ley o de un pronunciamiento judicial, o varíen las condiciones del arriendo, el fiador deberá ratificar la fianza otorgada extendiéndola al nuevo precio. De no proceder a la ratificación, la fianza continuará garantizando el precio anterior y el arrendatario deberá presentar nuevo fiador dentro de los sesenta días de vigencia del nuevo precio o complementar la garantía con depósitos en Obligaciones Hipotecarias, dentro del plazo y condiciones previstos en el artículo anterior, bajo apercibimiento de rescisión. Puesto en mora el arrendatario, los gastos de la intimación serán de cargo del mismo.

Las fianzas personales que se constituyan a partir de la vigencia de la presente ley, se entenderán ratificadas de pleno derecho cuando se incremente el precio del arriendo en función de lo dispuesto en el Capítulo I.

Art. 40. No habiendo acción judicial iniciada por el arrendador o subarrendador, podrá el arrendatario o subarrendatario sustituir la fianza personal por la garantía del alquiler en Obligaciones Hipotecarias Reajustables.

El arrendador o subarrendador no podrá oponerse a la sustitución. En caso de negativa del arrendador o subarrendador, el arrendatario o subarrendatario seguirá los procedimientos de la obligación y consignación, debiendo efectuarse esta última, en el Banco Hipotecario del Uruguay.

Art. 41. Sustitúyese el artículo 15 de la ley N.º 9.624, de 15 de diciembre de 1936, por el siguiente:

"Artículo 15.º

A) En caso de renuncia o exoneración de un funcionario, o de cese en su calidad de tal de un jubilado o pensionista, el o los inquilinos deberán sustituir la garantía de la Contaduría General de la Nación, por otra a satisfacción del propietario o administrador, o por el depósito de cinco meses de arrendamiento en Obligaciones Hipotecarias Reajustables por su valor de cotización en la Bolsa de Comercio al día de la constitución de la garantía. En este último caso, si el arrendador se opusiere, el inquilino podrá hacer directamente el depósito en el Banco Hipotecario del Uruguay, dentro de los noventa días de habersele notificado por la oficina en forma personal o por cedulón, el inquilino deberá probar ante la misma, que ha depositado la garantía de alquileres, o que le ha sido aceptada otra fianza. Si así no lo hiciere, la Contaduría General de la Nación, podrá iniciar acción de desalojo ante el Juzgado de Paz en que esté ubicada la finca arrendada, cualquiera fuere el monto del alquiler. El Juez otorgará un plazo de treinta días al demandado para que desocupe el bien, vencido el cual si no se hubieren opuesto excepciones, se procederá al lanzamiento, a solicitud de la Contaduría General de la Nación. En este último caso y sin que ello implique suspensión de los procedimientos, la Contaduría General de la Nación lo comunicará a los efectos que corresponda a las Intendencias Municipales y al Instituto Nacional de Viviendas Económicas.

Si la finca estuviera desocupada y las llaves no fueran entregadas a la Contaduría General de la Nación, ésta solicitará la entrega judicial, la que se otorgará sin más trámite.

B) En caso de haberse deducido oposición de excepciones, la sentencia de primera instancia que haga lugar al desalojo, no admitirá recurso alguno. De la

acción de desalojo entablada, se notificará al propietario o administrador.

C) En todos los casos en que transitoriamente no pueda descontarse la totalidad de los alquileres contratados, el saldo no retenido deberá ser abonado en la Caja de Servicio de Garantía de Alquileres, en forma mensual y dentro de los diez primeros días de cada mes vencido. La falta de pago determinará que la oficina pueda proceder al desalojo.

D) En los casos de fallecimiento del funcionario o jubilado que no dejen causahabientes con derecho a pensión, se procederá de acuerdo con el apartado A).

Si existieran causahabientes con derecho pensionario podrán abonar los alquileres en la forma especificada en el apartado C) con las consecuencias previstas en el mismo. Una vez decretada la pensión se descontará de la misma el importe del arrendamiento. Si no existiera derecho pensionario se procederá de acuerdo con el apartado A) de este artículo.

E) En los casos de divorcios, separación de cuerpos o de hecho, cuando continúe habitando la finca motivo del arrendamiento, el cónyuge que no firmó el contrato tendrá un plazo de seis meses para sustituir la garantía por Obligaciones Hipotecarias Reajustables o por otra a satisfacción del arrendador. Si se encuentra en condiciones legales podrá optar por ofrecer garantía de la Contaduría General de la Nación quedando en todos estos casos en calidad de inquilino. Vencido dicho término sin que se realice dicha sustitución, se procederá al desalojo por parte de la Contaduría y siempre que medie solicitud escrita del firmante del contrato. El plazo de seis meses comenzará a contarse al día siguiente a la notificación hecha por la oficina, de que se deba sustituir la garantía. En el caso de separación de hecho, esta circunstancia deberá probarse por certificado expedido por el Juzgado de Paz de ubicación del bien, en donde conste la declaración de tres testigos hábiles que atestigüen también que la persona interesada permanece viviendo en la finca objeto del arrendamiento. El plazo de seis meses para sustituir la garantía comenzará a contarse a partir del día siguiente de la notificación del auto que ordene la separación provisional de los cónyuges o de la sentencia de divorcio en su caso o de la situación de hecho prevista.

F) En todo caso, hasta tanto no se haya procedido al lanzamiento el inquilino podrá sustituir la garantía, quedando en tal supuesto, clausurados de oficio los procedimientos. La Contaduría General de la Nación creará un fondo de reserva para atender los quebrantos ocasionados por este servicio el cual estará integrado por un 25 o/o (veinticinco por ciento) de la recaudación anual que se efectúe por concepto de comisión de alquileres."

Art. 42. Ampliase el límite previsto por el artículo 3.º de la ley N.º 9.624, de 15 de diciembre de 1936 y concordantes, en las cantidades suficientes para absorber los aumentos que resulten de la aplicación de la presente ley.

CAPITULO VIII

DE LA COMPETENCIA LA PERSONERIA Y EL PROCEDIMIENTO

Sección 1

Procedimientos generales

Artículo 43. En todas las cuestiones que se susciten referidas a arrendamientos, desalojos y lanzamientos, serán competentes los Juzgados de Paz del lugar de ubicación del inmueble.

Cuando se reclamen daños y perjuicios la competencia se determinará en razón de la cuantía del asunto.

Art. 44. Para iniciar la acción de desalojo no se requiere acreditar el derecho de propiedad sobre la finca arrendada; pero el actor o sucesor, a cualquier título, deberán acompañar el contrato de arrendamiento o subarrendamiento o su certificación por escribano, siempre que la locación o sublocación no se hayan pactado verbalmente.

Art. 45. La acción de desalojo se acuerda:

A) Al arrendador, subarrendador o titular de un derecho real de goce en los bienes inmuebles.

B) Al acreedor anticrédito, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 de la presente ley.

Esta acción procede contra:

- A) El arrendatario o subarrendatario.
- B) Los ex-condueños del inmueble dividido o adjudicado, así como los encargados, guardadores y, en general, los ocupantes de inmuebles a título precario, y los previstos en los artículos 35 y 36 de esta ley.

Art. 46. Todos los juicios de desalojo de inmuebles a que se refiere esta ley, al igual que la solicitud de intimación de pago, se tramitarán por escrito.

Art. 47. Con la intimación de desalojo en que se indicará el plazo, se citará al demandado de excepciones para que las oponga dentro del plazo de diez días hábiles y perentorios. En todos los casos se colocará también una cédula en lugar visible, intimando al demandado a que manifieste si en el bien desalojado existen subarrendatarios, indicando en su caso el nombre y domicilio. Si no diere los nombres y domicilios o éstos estuvieren fuera del radio o sección judicial del inmueble, el juicio seguirá su curso sin la notificación a éstos, siendo responsable el demandado para con los subarrendatarios de acuerdo a la actividad que adopte.

Art. 48. En caso de desalojo por mora en el pago de los arrendamientos, el Juez concederá un plazo de veinte días, citando al demandado de excepciones en la forma preceptuada en el artículo anterior.

En todos los casos, si no se opusieren excepciones, el juicio quedará terminado sin otro trámite, computándose los plazos desde el día siguiente a la intimación respectiva. Si se opusieren excepciones, se procederá conforme a los artículos 889 a 893 del Código de Procedimiento Civil, siendo apelable en estos juicios, solamente el auto a que se refiere el artículo 890 del Código citado, el que no haga lugar a la apertura a prueba, y la sentencia definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 52 de esta ley.

La sentencia definitiva de segunda instancia así como las providencias ulteriores a la misma no admitirán recurso ordinario o extraordinario de especie alguna.

Art. 49. El actor podrá acumular a la acción de desalojo la ejecutiva por cobro de arrendamientos, lo que podrá hacerse conjuntamente con la demanda de desalojo o posteriormente.

Presentada la solicitud, el Juez librará mandamiento de embargo, y tratado el mismo, se seguirá el juicio por cobro de alquileres en pieza separada por vía ejecutiva, conforme a los artículos 887 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, adeudándose alquileres, servicios accesorios o impuestos que sean de cargo del arrendatario, aun antes de la intimación podrá el actor pedir se decrete el embargo preventivo, mediante información sumaria que acredite que el arrendatario intenta extraer los bienes sujetos a privilegio (inciso 4.º del artículo 2.370 del Código Civil).

Art. 50. La acción que acuerda el apartado B) del inciso 1.º del artículo 45 con noticia del arrendador sólo podrá ser ejercida cuando por la mora del arrendatario preexistente se perjudique el derecho del acreedor antiprecario. El arrendatario podrá desinteresarse al acreedor y quedará legalmente subrogado.

Art. 51. Los juicios de desalojo contra malos pagadores quedarán clausurados si dentro del plazo para oponer excepciones, el inquilino consignare la suma adeudada más el 60 o/o (sesenta por ciento) de esa suma como pago de los intereses, tributos y costos devengados. El arrendatario o subarrendatario se beneficiará una sola vez con la clausura del respectivo juicio.

Art. 52. En los juicios de desalojo contra malos pagadores no se admitirá recurso alguno por el demandado contra la sentencia definitiva de primera instancia, si no se acredita simultáneamente por el desalojado que ha consignado en el Banco de la República Oriental del Uruguay (artículo 57) el importe de los alquileres devengados hasta ese momento y comisión del depósito, debiendo el mismo, para poder continuar el trámite, acreditar mes a mes el mismo extremo.

En caso de no mediar las justificaciones mencionadas, los recursos se tendrán por no deducidos y a petición del desalojante se decretará el lanzamiento, que no podrá ser aplazado y contra el cual no habrá recurso alguno.

Procede la reforma de los plazos señalados en la intimación si el arrendatario moroso, dentro del término acordado consignare el importe de los arrendamientos devengados, los intereses legales y las costas del juicio.

La consignación deberá hacerse constar por diligencia en autos.

Con citación del actor, el Juzgado ampliará el plazo hasta completar el que corresponda al buen pagador, computado desde que empezó a correr, de acuerdo con intimación primitiva.

Si acordado el plazo máximo a un locatario por haber pagado el alquiler o arrendamiento, y durante el plazo fijado no lo hiciere previa intimación tendrá igual derecho el actor para pedir la reducción del plazo y en este caso regirá el artículo 48 de esta ley.

En los casos de este artículo, el Juzgado resolverá, por expediente sin otro trámite y del fallo no habrá recurso alguno.

La reforma del plazo señalado se decretará por una sola vez en cada caso.

Art. 53. En todo juicio de desalojo y hasta la entrega del bien desalojado, cualquiera de las partes podrá solicitar la realización de una inspección judicial o inventario del bien, al solo efecto de comprobar el estado de conservación del mismo, de las mejoras en él efectuadas y los desperfectos existentes o comprobar si el uso que se hace de la cosa arrendada cumple con los fines del contrato.

Esta diligencia podrá ser delegada por el Juez al Alguacil, facultándolo a requerir el empleo de la fuerza pública para su cumplimiento.

Art. 54. En los juicios de desalojo cualquiera fuere la causal invocada, cuando el arrendatario hubiere desocupado la finca el Juez podrá acordar al arrendador la tenencia del inmueble a título de medida cautelar, bajo caución. Deberá dejarse constancia del estado de conservación del bien, se practicará el inventario correspondiente y se designará depositario en caso de existir bienes muebles.

Si no se hubiesen opuesto excepciones u opuestas, hubiese recaído sentencia ejecutoriada favorable al locador, si el inquilino desocupare la finca, el Juez la entregará a aquél sin otro trámite.

Art. 55. Considérase incurso en mora al arrendatario que no pague el alquiler o renta dentro de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la intimación. Esta no podrá ser hecha sino diez días después de aquel en que el pago debió efectuarse.

Art. 56. Los tributos y costos de la primera intimación de pago serán de cargo del actor; los de las ulteriores, a cargo del intimado, haya o no caído en mora. Si hubiera contienda, regirá en lo pertinente, el artículo 688 del Código Civil.

No será necesaria la oblación de los alquileres cuando se consigne a consecuencia de una intimación de pago, y en este caso, la comisión del depósito será de cargo del arrendatario.

Cuando los tributos y costos de la intimación correspondan al arrendatario, éste deberá depositar, como pago de los mismos, un 20 o/o (veinte por ciento) de la suma intimada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la omisión contumaz en el pago puntual de los arrendamientos, servicios accesorios, gastos comunes, consumos e impuestos a cargo del arrendatario, será causal de rescisión del contrato de arrendamiento.

Art. 57. Cuando el inquilino obliere el alquiler y éste no fuere aceptado por el arrendador, podrá aquél en lo sucesivo consignarlo sin más trámite y esa consignación surtirá efectos de pago desde la fecha de la misma, siempre que se presentare en el Juzgado dentro de los dos días hábiles de efectuada, el comprobante respectivo.

En este caso será de cargo del arrendador la comisión del depósito.

Cuando el arrendatario o subarrendatario desconociera el nombre y dirección de la persona a quien debe oblar el alquiler, la citación podrá efectuarse en la persona a quien hubiera hecho efectivo el último pago del alquiler, y en el domicilio en que el mismo se hubiera efectuado.

Por esta gestión no se cobrarán tributos judiciales y la comisión del depósito será de cargo del locador.

Las consignaciones que los interesados deben hacer en cumplimiento de las disposiciones ordenadas por la presente ley, serán hechas en cualquier dependencia del lugar del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Art. 58. Las acciones estatuidas en los artículos 38, 68, 69, 71 y 73 inciso 2.º, la relativa a la reclamación de los daños y perjuicios prevista en la última parte del apartado A) del artículo 28 y los juicios de rescisión de contratos de arrendamiento, se seguirán por el procedimiento previsto en los artículos 591 y 594 inclusive del Código de Procedimiento Civil.

En los juicios rescisorios en que se reclamaren, además, daños y perjuicios, el procedimiento será el del juicio ordinario regulándose la competencia en razón de la cuantía del asunto.

En el caso del artículo 58, la sentencia tendrá efecto desde la fecha de presentación de la demanda.

Art. 59. En las situaciones previstas por los artículos 1.253 del Código de Procedimiento Civil y 1.816 del Código Civil, será optativo del arrendador demandar previamente la rescisión del contrato o iniciar de plano el desalojo por mal pagador.

Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, dictadas antes o después de la publicación de la presente ley que declaren rescindido cualquier contrato que haya habilitado a una persona a ocupar un inmueble, darán derecho al actor a solicitar directamente el lanzamiento, sin necesidad de tramitar previamente el juicio de desalojo.

El Juez, apreciando las circunstancias del caso, podrá aplazar el lanzamiento por un plazo de hasta noventa días.

Art. 60. Los administradores de bienes inmuebles, por el solo hecho de serlo, obligarán a los propietarios o arrendadores de los bienes que administren, en los actos y contratos que celebren con los inquilinos u ocupantes.

Aunque no exista mandato expreso, se reputará que representan a los dueños o locadores en todas las gestiones administrativas o judiciales, que deduzcan en su calidad de tales a nombre de aquéllos o que les sean promovidas en esa misma calidad.

Constituirá prueba suficiente de la calidad de administrador a los efectos preindicados el documento público o privado en que se haya hecho entrega a quien invoque tal carácter, de la administración de la finca de que se trate.

En caso de impugnación se presumirá que una persona tiene la calidad de administrador de un bien, cuando haya expedido recibos de pago de renta, consumos, impuestos u otros comprobantes similares.

La exhibición en juicio de recaudos de esa naturaleza en número no inferior a cuatro, configurará plena prueba de la condición alegada.

Las probanzas referidas en los dos incisos anteriores podrán ser presentadas en cualquier etapa del procedimiento.

Cuando el administrador sea actor, será prueba bastante de su legitimación, el certificado notarial que lo acredite como tal.

La actuación personal del propietario o arrendador de un inmueble no supondrá revocación de las facultades del administrador, salvo expresa manifestación de aquél. Aun producida tal manifestación, el dueño o locador no podrá desconocer los actos y hechos consentidos por el administrador hasta ese momento, sin perjuicio de las acciones que le competan frente a él por los excesos en que pueda haber incurrido.

Art. 61. Están comprendidos en los derechos y obligaciones que esta ley atribuye a los propietarios, los promitentes compradores de inmuebles cuya promesa esté inscrita y todos los demás titulares de derechos reales.

Los promitentes compradores con promesa inscrita, podrán invocar la causal del apartado A) del numeral 4.º del artículo 24, cuando acrediten que la promesa está inscrita con una antigüedad de tres años a la fecha de promoción del juicio.

Tratándose de los inmuebles a que se refiere la ley número 10.751, de 25 de junio de 1946, los promitentes compradores sólo podrán promover desalojo si justificaren que se ha realizado la efectiva incorporación del bien al régimen de dicha ley.

Los juicios de desalojo promovidos por promitentes compradores antes del 1.º de junio de 1968, de conformidad con las disposiciones legales entonces vigentes, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones hasta su finalización.

Art. 62. Pasados los plazos señalados para los desalojos se procederá a petición de parte a lanzar al ocupante a su costo, teniendo el Juez la facultad en casos de enfermedad o fuerza mayor justificada, para aplazar el lanzamiento hasta por sesenta días.

Los lanzamientos que se decreten en los juicios de desalojo, no podrán hacerse efectivos hasta transcurridos quince días hábiles a contar del siguiente a la notificación del demandado, y el decreto de lanzamiento no podrá ser objeto de recurso alguno.

Sección II

Procedimientos especiales

Artículo 63. La acción de rebaja de alquiler se promoverá en los plazos previstos en el artículo 17, debiendo los arren-

datarios o subarrendatarios con la demanda, acompañar declaración jurada de cada uno de los integrantes del núcleo habitacional ocupantes del inmueble, de sus ingresos, y la prueba documental correspondiente mediante certificado público o privado.

El Juez al sustanciar la demanda decretará la suspensión del pago del aumento que sobrepase el porcentaje fijado en el inciso primero, confiriendo traslado al demandado por un término de quince días hábiles y perentorios para contestar la demanda, siguiéndose de mediar oposición el procedimiento de los artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil.

El precio del arriendo que resultare regirá desde la fecha de vigencia del nuevo alquiler, fijado conforme a la presente ley.

Cuando se comprobaren declaraciones juradas falsas, el arrendatario o subarrendatario quedará excluido de los beneficios de esta ley, y el Juez al decretarlo, declarará rescindido el contrato de arrendamiento disponiendo a pedido de parte el lanzamiento inmediato con tributos y costos.

El que presentare a los efectos de la demanda a que se refiere este artículo una declaración jurada falsa para obtener la rebaja del nuevo alquiler, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.

Art. 64. La desvinculación del titular del arriendo previsto en el artículo 20, podrá acreditarse por cualquier medio de prueba. En caso de controversia, se seguirá el procedimiento establecido por los artículos 591 a 594 inclusive, del Código de Procedimiento Civil.

En caso de probarse la existencia de una cesión fraudulenta o improcedente, el Juez declarará rescindido el contrato y dispondrá a pedido de parte el lanzamiento, condenando al arrendatario o a quien alegare la cesión, al pago de los tributos y costos.

Art. 65. Tratándose de los contratos de arrendamiento con destino a industria y comercio, el arrendatario tendrá la facultad de cederlos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- A) Que la cesión se realice simultáneamente con la enajenación del establecimiento, debiéndose mantener el mismo giro del negocio en el local.
- B) Que exista contrato con plazo contractual o legal vigente y que el cedente acredite una antigüedad mínima de dos años de permanencia en carácter de arrendatario respecto de la finca en que está instalado el establecimiento.
- C) Que durante ese lapso el cedente haya actuado al frente del establecimiento. No regirán las condiciones establecidas en este inciso ni en el anterior en caso de fallecimiento o imposibilidad física o mental del arrendatario.
- D) Que se mantengan las garantías que se hubieran constituido, o se constituyan en el caso de no existir, pudiéndose en todos ellos sustituir las fianzas personales por el depósito de obligaciones hipotecarias reajustables en las condiciones establecidas en el artículo 38 y siguientes de la presente ley.
- E) Que el cesionario no merezca objeciones morales que puedan exponer al arrendador a la pérdida del prestigio del local. Cuando se tratase de personas jurídicas, las objeciones podrán referirse a la empresa como tal o a los directores o socios con uso de la firma social.
- F) En caso que la enajenación estuviere precedida de la celebración de un compromiso de compraventa con entrega de la tenencia o posesión, se reputará lícita la ocupación del local por el promitente comprador, por el término máximo de doce meses, dentro del cual deberán satisfacerse los intereses fiscales y de previsión social.
- G) En el caso previsto en la letra anterior, el promitente comprador no podrá ceder a terceros sus derechos de promitente comprador, sin que previamente se hayan satisfecho, garantido o consolidado las deudas fiscales y de previsión social por el período correspondiente al primer enajenante, hasta la fecha de toma de posesión por el adquirente.

La omisión de este requisito hará inoponible toda cesión del arriendo ante el arrendador, reputándose ilícita la posesión de ulteriores adquirentes, sin perjuicio del derecho del Registro Público y General de Comercio a rechazar el documento de cesión.

Lo mismo será en caso de sucesivas cesiones, que sólo podrán concretarse previa regularización de adeudos por los períodos precedentes.

Para que la cesión surta efecto respecto del arrendador es indispensable que el proyecto de la misma le sea notificada notarial o judicialmente.

La notificación deberá ser acompañada de una copia firmada del compromiso de enajenación, si existiere.

tratándose de personas jurídicas, de la copia de los Estatutos o del contrato de sociedad, también firmados, y de un certificado notarial en que consten los nombres completos y domicilios de los directores o socios con uso de la firma social y el domicilio de la persona jurídica.

Art. 66. Dentro del plazo perentorio de diez días de la notificación de la cesión prevista en el artículo anterior, deberá formalizarse la oposición que solamente podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones exigidas en este artículo. Deducida la oposición se sustanciará por el procedimiento de los incidentes y se estará a lo que el Juez resuelva.

Contra esa decisión sólo cabrá el recurso de reposición.

Esta cuestión deberá plantearse y sustanciarse ante el Juzgado competente para entender en el juicio de desalojo del local.

Art. 67. Como medida preparatoria podrá solicitarse la inspección ocular de la finca sin previa notificación del arrendatario únicamente cuando esa medida tenga por objeto justificar los hechos que hacen presumir el subarrendamiento.

El Juez podrá decretar el allanamiento de la finca adoptándose en este caso las medidas de seguridad necesarias para resguardar los bienes existentes en la misma.

Podrá hacerse constar en el acta respectiva la información que suministren al respecto las personas que se encuentren en la finca y los vecinos de la misma.

Art. 68. Cuando el inquilino con plazo legal perciba por subarrendamiento un precio mayor que el abonado al arrendador, podrá éste optar por aumentar el precio hasta la cantidad percibida por el inquilino o rescindir el contrato, aunque el subarrendamiento estuviere expresa o tácitamente permitido.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, se operará la cesión legal del arriendo en favor del subarrendatario cuando el arrendador notifique judicialmente al locatario que queda excluido de la relación locativa respecto de lo subarrendado. En caso de mediar oposición se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 591 a 594 inclusive, del Código de Procedimiento Civil.

En la situación prevista en el inciso anterior, a partir de la notificación judicial que reciba el subarrendatario, deberá pagar directamente al arrendador el precio del subarriendo. Este pago no se suspenderá aunque mediere oposición del arrendatario.

Art. 69. Para hacer valer los derechos del artículo 78 los arrendatarios podrán solicitar la inspección ocular del inmueble a los efectos de comprobar su incumplimiento y reclamar al Juez intime dicho restablecimiento, fijando un plazo no inferior a treinta días para la realización de los trabajos pertinentes. A petición de parte, podrá aumentar o prorrogar dicho término por causa justificada. Para el ejercicio de esta acción los arrendatarios deberán estar al día en el pago de las obligaciones que estén a su cargo.

Al resolver lo anteriormente establecido el Juez determinará el porcentaje de rebaja del alquiler que correspondería en caso de incumplimiento del arrendador, entre el 30 o/o (treinta por ciento) y el 50 o/o (cincuenta por ciento). Si éste incumpliera en el plazo fijado, el arrendatario, previo ejercicio de la acción de rebaja correspondiente, pagará en adelante el alquiler con el abatimiento que se estableciere, hasta que se restablezcan los servicios u obligaciones, sin que el arrendador pueda reclamar su devolución.

La aplicación del máximo de rebaja se tendrá por especialmente justificada cuando en la finca vivan niños o ancianos y en todo caso se remitirán los autos a la Justicia de Instrucción a sus efectos.

No se operará la reactualización del arrendamiento prevista por esta ley hasta tanto se restablezcan los servicios accesorios.

Art. 70. Toda contienda que se suscite con motivo de la aplicación de la presente ley, cuando no se haya previsto expresamente el procedimiento, deberá sustanciarse y resolverse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil.

CAPÍTULO IX

DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES

Artículo 71. En caso de incumplimiento de lo establecido en los numerales 4.º del artículo 24; 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del artículo 26 el propietario incurrirá en una multa a favor del inquilino equivalente al importe de diez a cuarenta y ocho meses del alquiler de la finca. Esta multa

es independiente de los daños y perjuicios que pudieren corresponder.

También se considera incumplimiento el desistimiento injustificado por parte del arrendador, de la acción iniciada al amparo de las excepciones establecidas en el inciso anterior, cuando este desistimiento sea posterior a la sentencia dictada por el Juez.

En caso de enajenación del inmueble y habiéndose efectuado la inscripción a que se refiere el artículo siguiente, el adquirente será solidariamente responsable con el propietario de las infracciones a la presente ley.

Con posterioridad a la inscripción en el Registro de una promesa de compraventa de inmuebles, el promitente vendedor no podrá solicitar el desalojo del bien prometido en venta, por las causales referidas en el inciso primero de este artículo.

La acción prescribirá a los cinco años de haber quedado configurada la infracción.

Si el inquilino reclama sólo la multa, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 70 de esta ley.

Si se hubiese arrendado nuevamente la finca y el precio del alquiler fuere superior al que regía con el inquilino demandante, la multa se calculará en base al precio del nuevo arrendamiento. En los demás casos las multas se regularán en base al último alquiler abonado. La acción corresponderá al ex-arrendatario ocupante de la finca o su sucesor.

Declaranse válidas las transacciones celebradas o que se celebren en esta materia.

Art. 72. En la Sección "Desalojo" del Registro General de Arrendamientos y Anticresis, se inscribirán las demandas promovidas de conformidad con lo dispuesto en los numerales 4.º del artículo 24 y 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del artículo 26 de la presente ley, con la constancia de las causales respectivas y los elementos exigidos en el inciso A) del artículo 51 de la ley N.º 10.793, de 25 de setiembre de 1946, en lo que fueren aplicables. Este trámite no devengará tributos ni derechos de inscripción.

El Juez, al decretar el desalojo ordenará la remisión de la comunicación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Arrendamientos, lo que se hará mediante fotocopia, que se entregará en el Registro el cual pondrá la constancia en el original que se devolverá al Juzgado.

No se dará trámite a ninguna petición de la parte actora, hasta que se producta esta agregación.

En caso de entrega voluntaria de la finca, el demandado deberá comunicar al Juzgado la fecha de la misma. Si no lo hiciere, el arrendador podrá pedir la comprobación judicial de ese extremo y en tal situación se tendrá la fecha de la diligencia como la de desocupación a los efectos de este artículo y de lo que disponen los artículos 36 y 32 de esta ley.

El Juzgado comunicará de oficio al Registro la fecha del lanzamiento o de la desocupación del bien.

Art. 73. El arrendador que compeliere o indujere a su arrendatario a pagar de cualquier manera una suma distinta del precio mismo del arriendo como condición para que pueda firmarse el respectivo contrato o durante su vigencia, o que impusiere cualquier obligación adicional ajena a las insertas en el contrato, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión.

La sanción penal será sin perjuicio de imputar el importe de lo indebidamente percibido al pago de alquileres.

En la misma pena incurrirá el arrendatario que compeliere o indujere a su arrendador a pagar de cualquier manera una suma de dinero no debida, como condición para entregar la finca objeto del arriendo o pretendiere obtener compensaciones materiales como precio de cesiones del arrendamiento no permitidas por la ley o el contrato.

Art. 74. El arrendador, subarrendador o sus representantes que cobren al arrendatario o subarrendatario indebidamente gastos judiciales, estarán obligados solidariamente a pagar a los perjudicados una multa equivalente a diez veces lo pagado. Se seguirá para su cobro el procedimiento previsto en el artículo 70 de esta ley.

Art. 75. El que hiciere valer, en juicio de desalojo, una promesa de compraventa como tal o como forma substitutiva de un contrato de arrendamiento o la constitución de un derecho real, simuladas o falsas, será castigado con una pena de seis a veinticuatro meses de prisión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en caso de incumplimiento por el desalojante y siempre que la simulación de la promesa o de la constitución de derechos reales a efectos de invocarlos en juicio de desalojo estuviere probada, ambas partes contratantes serán responsables de las multas y daños y perjuicios que correspondieren.

Si se tratare de un caso de ocultamiento de una relación de arrendamiento el responsable será el promitente vendedor.

En los desalojos promovidos por persona jurídica, serán solidariamente responsable por las multas y daños y perjuicios provocados por incumplimiento del desalojante, los integrantes de sus directorios, que hayan votado afirmativamente la decisión o los funcionarios responsables de la adaptación de la misma.

Art. 76. Decláranse nulas las cláusulas de los contratos que establezcan directa o indirectamente:

- A) La renuncia anticipada de los plazos, derechos y demás disposiciones de esta ley.
- B) La obligación del pago por el arrendatario de gravámenes que las leyes y ordenanzas pongan a cargo del propietario. Esta nulidad no regirá en los casos en que los impuestos y tributos tengan como presupuesto de hecho el uso u ocupación de la finca en cuyo caso su pago corresponderá al arrendatario.
- C) La prohibición de instalar en el edificio antenas receptoras para canales de televisión.
- D) La elevación del alquiler o su pago por adelantado a regir una vez vencido el plazo del contrato o de las opciones si se hubieren convenido.
- E) La fijación del monto del alquiler o su pago en moneda extranjera. Cuando así se hubiere pactado, el precio se convertirá en moneda nacional a la cotización del tipo vendedor del mercado financiero —o su sustitutivo que se establezca en el futuro— del día anterior a la celebración del contrato.

Esta disposición no rige para los arrendamientos por temporada celebrados con turistas extranjeros ni en los casos en que el arrendamiento se celebre con un Estado extranjero, con organismos internacionales, o con funcionarios o diplomáticos de países extranjeros o de funcionarios extranjeros de organismos internacionales o con empresas extranjeras o sus funcionarios, cuando provengan del exterior.

Art. 77. El pago de los consumos, gastos comunes u otros servicios accesorios a la locación será de cargo del arrendatario. Decláranse nulas las cláusulas de los contratos con plazo contractual vencido, que directa o indirectamente hayan puesto a cargo del arrendador dichos pagos.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en esta norma los gastos provenientes de las reparaciones o mejoras realizadas en el inmueble, las que continuarán rigiéndose por el derecho vigente en la materia.

Art. 78. Los servicios accesorios a la locación no podrán suprimirse ni reducirse salvo caso de fuerza mayor judicialmente declarada. Lo mismo se entenderá en lo relativo a las obligaciones de cualquier clase, expresamente pactadas o que hayan estado de cargo del arrendador o subarrendador o durante el período ya cumplido de ejecución del contrato.

El arrendador o subarrendador que suprimiere o redujere los servicios accesorios a la locación será penado con \$ 10.000 (diez mil pesos) a \$ 200.000 (doscientos mil pesos).

Art. 79. Las infracciones previstas en la presente ley para las cuales no se ha establecido sanción, darán lugar a la aplicación de multas hasta el equivalente del importe de treinta meses de arrendamiento. La demanda se deducirá ante el Juez competente para el desalojo, siguiéndose el procedimiento previsto por el artículo 70. La multa, en caso de corresponder, se adjudicará al demandante.

Art. 80. Las instituciones encargadas de cobrar los alquileres por cuenta de terceros, en ningún caso podrán percibir de los inquilinos por concepto de energía eléctrica, agua o impuestos, o cualquier otro rubro que sea de cargo del inquilino, más de lo que fijen las cuentas respectivas.

Quien faltare a lo dispuesto por el inciso anterior, se hará pasible de una multa equivalente a cincuenta veces lo que hubiere cobrado indebidamente, que beneficiará al inquilino.

Art. 81. Sustitúyese el numeral 1.º del artículo 354 del Código Penal por el siguiente:

“1.º El que mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad y con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare parcial o totalmente el inmueble ajeno”.

Art. 82. En los casos del delito previsto por el artículo 354 numeral 1.º del Código Penal, los Jueces tendrán libertad para apreciar la prueba con arreglo a la libre convicción que se formen al respecto, fundamentando expresamente las razones que tengan para ello.

En tales hipótesis, al resolverse el procesamiento, se proveerá de oficio la desocupación del inmueble en un plazo de veinte horas, sin perjuicio de las reclamaciones que en sede civil, pudieren eventualmente corresponder.

CAPITULO X

DE LOS LANZAMIENTOS

Sección 1

Artículo 83. Los lanzamientos que se decreten contra arrendatarios o subarrendatarios, buenos pagadores, de fincas urbanas o suburbanas destinadas a habitación o contra los ocupantes a título precario de fincas de las ciudades características propiedad del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales excepto las de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio del Interior, quedarán sometidos a las disposiciones del presente Capítulo.

Esta disposición sólo se aplicará, en cuanto a los ocupantes precarios, a aquellos que hayan ingresado a las fincas del Estado y organismos citados, en virtud de simple autorización o por contrato de arrendamiento de servicios que se haya celebrado.

Art. 84. No quedarán amparados en lo dispuesto en el presente Capítulo los casos comprendidos en los incisos 1.º, 2.º y 3.º del artículo 24; artículo 28; artículo 33; inciso 2.º del artículo 64; y artículo 98 de esta ley.

Sección 2

Artículo 85. No podrán hacerse efectivos los lanzamientos contra el arrendatario, el subarrendatario, buenos pagadores, o el ocupante precario previsto en el artículo 83, que acrediten encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

A) Poseer algunas de las calidades que se enumeran:

- 1.º Ser ahorrista individual del Departamento Financiero de la Habitación del Banco Hipotecario del Uruguay y haber suscrito compromisos de compra-venta, para la adquisición de su vivienda.
- 2.º Ser socio de una Unidad Cooperativa de Vivienda que haya obtenido préstamo otorgado por el Banco Hipotecario del Uruguay para la construcción de viviendas y haber obtenido el derecho a la adjudicación de una vivienda que estuviere en fase de construcción.
- 3.º Ser integrante de un Fondo Social de Vivienda con personería jurídica otorgada, y adjudicatario de una vivienda en fase de construcción financiada total o parcialmente, con recursos del referido fondo social.
- 4.º Ser adjudicatario de una vivienda que se construya por los Organismos del Sistema Público de Producción de Vivienda.

B) Estar construyendo efectivamente y sin interrupción, desde no más de un año de antelación a la fecha en que le fuera notificado el lanzamiento, su vivienda en la localidad y no ser propietario de otra casa-habitación en ella.

C) Ser actor de un juicio de desalojo promovido al amparo de lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 29 de la ley N.º 13.659 de 2 de junio de 1968 o numeral 4.º del artículo 24 de la presente ley.

Art. 86. Para quedar comprendido en lo dispuesto en el artículo anterior, el arrendatario, subarrendatario u ocupante precario deberán acreditar los extremos allí exigidos dentro de los treinta días hábiles siguientes y penitorios a la notificación del lanzamiento.

Art. 87. Acreditados los extremos necesarios, el Juez dispondrá la suspensión del lanzamiento, la que podrá tener una duración de hasta doce meses a contar de la fecha de presentación del petitorio.

Decretada por el Juez la suspensión, el actor del juicio podrá en cualquier momento solicitar el cese de la misma, fundado en que el demandado no reviste o ha perdido la calidad invocada o ha obtenido la disponibilidad de una vivienda, sea aquella cuyo desalojo hubiera solicitado u otra.

Para ello se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil. La resolución que recaiga será inapelable.

Sección 3

Artículo 88. Los lanzamientos que se decreten no podrán hacerse efectivos cuando el arrendatario y subarrendatario, buenos pagadores, u ocupantes precarios a que se refiere el artículo 83, acrediten en el correspondiente juicio de desalojo, haberse inscrito en el Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia.

No podrán inscribirse en dicho Registro los arrendatarios, subarrendatarios u ocupantes precarios que se hubieren acogido al régimen del artículo 85 de esta ley.

Art. 89. El Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE), llevará el registro a que se refiere el artículo anterior, debiendo los interesados cumplir, bajo declaración jurada, los requisitos y condiciones que le sean requeridos por el Organismo.

En caso de no haber oficina de INVE en la localidad, este Organismo hará saber el lugar o repartición pública donde se verificará la inscripción.

Sólo podrán inscribirse en el registro de aspirantes aquellos arrendatarios que se encuentren comprendidos en lo dispuesto en el inciso 2.º del artículo 18 de esta ley.

Art. 90. Los interesados dispondrán, para verificar la inscripción de quince días hábiles subsiguientes a la notificación del lanzamiento.

Presentada en los autos respectivos, dentro de los cinco días hábiles siguientes, la constancia que INVE expedirá de la inscripción, el Juez decretará sin más trámite la suspensión del lanzamiento, la que en ningún caso podrá exceder de 12 meses.

Decretada la suspensión a que se refiere el inciso precedente, el Juzgado, a pedido de la parte interesada, sin necesidad de escrito, expedirá un certificado a los efectos de su presentación en INVE en donde conste:

- A) Nombre de la parte actora y demandada, libro, folio, número o ficha en su caso.
- B) Especificación de la causal del juicio.
- C) Cualquier otra circunstancia que se estime de interés consignar.

El interesado deberá presentar en INVE el certificado expedido por el Juzgado dentro de los noventa días siguientes a la inscripción en el Registro. En caso contrario INVE dejará sin efecto la inscripción efectuada, y el Juzgado podrá disponer de inmediato el lanzamiento respectivo.

Sin perjuicio de todo lo dispuesto en la presente norma, cuando por cualquier circunstancia se hubiere decretado el cese de la suspensión del lanzamiento, éste no podrá hacerse efectivo sin previa notificación a INVE, en su domicilio, la que podrá realizarse por telegrama colacionado de conformidad al artículo 8.º de la ley N.º 13.355, de 17 de agosto de 1965.

Art. 91. Las adjudicaciones de viviendas de emergencia, que se harán por sorteo entre los inscriptos de acuerdo a los programas, deberán ser publicadas por lo menos en dos diarios de la capital y uno del correspondiente departamento en su caso.

INVE notificará las adjudicaciones, personalmente o por telegrama colacionado en el domicilio constituido por el adjudicatario, y las comunicará al Juzgado respectivo, indicando los autos, el nombre del beneficiario, y la fecha en que le fue notificada la adjudicación.

Art. 92. El arrendatario o subarrendatario u ocupante precario desalojados deberán ocupar la vivienda que les sea adjudicada y dejar libre la que ocupaban dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación.

En caso contrario, quedará sin efecto de pleno derecho la adjudicación realizada y el Juzgado de la causa ordenará, de oficio y sin otro trámite, la diligencia del lanzamiento dispuesto.

Art. 93. Para la adjudicación de viviendas de emergencia a que se refiere esta disposición, no registrarán las prioridades que hayan sido establecidas por otras normas vigentes.

Los arrendatarios y los ocupantes a cualquier título de viviendas construidas por el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, de acuerdo a la ley N.º 13.728, de 17 de diciembre de 1968, no estarán amparados por las disposiciones de las leyes de arrendamientos y desalojos. En todos los casos, para la entrega del bien se seguirá el procedimiento sumario establecido en los artículos 1.309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la ley N.º 9.723, de 19 de noviembre de 1937.

Sección 4

Artículo 94. Los arrendatarios o subarrendatarios cuyos lanzamientos se hubieren suspendido de acuerdo a lo previsto en el decreto N.º 707/973, de 28 de agosto de 1973, continuarán abonando el alquiler que resulte de la aplicación de las disposiciones del Capítulo IV del citado decreto hasta la vigencia de la presente ley a partir de la cual los alquileres a abonar serán los que resulten de la actualización que en ella se establece.

Sección 5

Artículo 95. El lanzamiento de las viviendas cuyo desalojo se haya solicitado en virtud de la causal prevista en el inciso 9.º del artículo 29 de la ley N.º 13.659, de 2 de junio de 1968 (fincas ruinosas) o inciso 5.º del artículo 26 de la presente ley, sólo se podrá hacer efectivo cuando el actor acredite mediante informe pericial realizado por la Dirección Nacional de Bomberos o por sus dependencias en el interior de la República, que existe inminente peligro de derrumbe.

En caso contrario, el arrendatario, subarrendatario u ocupante precario podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Capítulo.

El informe pericial deberá ser ordenado por el Juzgado.

Art. 96. Lo dispuesto en el decreto N.º 303/973, de 30 de abril de 1973 y sus normas reglamentarias será de aplicación a las viviendas construidas para los inscriptos en el Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia, en lo que fuera pertinente.

Art. 97. Los contribuyentes podrán deducir en las declaraciones juradas que deban realizar a efectos del pago de los impuestos a la Renta y Patrimonio, el valor de las unidades habitacionales o de los alquileres que las mismas devenguen, siempre que los arrendatarios o subarrendatarios se hayan acogido a las suspensiones dispuestas por este Capítulo y mientras la situación se mantenga.

Art. 98. Las situaciones anteriores a la vigencia de la presente ley, comprendidas en lo dispuesto en los decretos N.ºs 707/973, de 28 de agosto de 1973 y 805/973, de 25 de setiembre de 1973, continuará rigiéndose por dichas normas, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 94 de la presente ley.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 99. La cuenta de gastos comunes debidamente conformada se ejecutará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 211 Código de Procedimiento Civil, una vez que el arrendatario haya sido legalmente puesto en mora.

Art. 100. El arrendatario podrá realizar la instalación de antenas receptoras para canales de televisión en las siguientes condiciones:

- A) La instalación deberá ser de tipo profesional.
- B) Si la antena causara vibraciones, zumbidos o cualquier otro tipo de molestias, deberá completarla colocando elementos antivibratorios, filtros para señales de radio y montaje sobre goma a fin de subsanarlas.
- C) Los daños causados en la mampostería del edificio para la instalación de la antena, serán reparados de inmediato por el arrendatario. Si no lo hiciera éste, podrá hacerlo el propietario administrador, debiendo el arrendatario reintegrarle su importe, conjuntamente con el alquiler del mes inmediato siguiente, formando con éste una obligación indivisible.
- D) Si el propietario instalare en el edificio un sistema colectivo receptor de canales de televisión, los arrendatarios no podrán instalar su antena particular, debiendo retirar las que se encuentren instaladas en el momento de empezar a funcionar el sistema colectivo.

Art. 101. Los plazos legales de arrendamiento que se determinan en esta ley se reputarán establecidos en beneficio de los arrendatarios y subarrendatarios.

Art. 102. La presente ley se aplicará a las fincas cualquiera sea el lugar de su ubicación, arrendadas para casa, habitación, industria o comercio u otros destinos, excepto los rurales, comprendidos por la ley N.º 12.100, de 27 de abril de 1954 y concordantes.

Las disposiciones de la misma que establezcan beneficios para los inquilinos, sólo podrán invocarse por quienes tengan la calidad de buenos pagadores, con excepción de lo establecido en el Capítulo VIII, en lo pertinente, cuyas normas se aplicarán, igualmente, a los inquilinos malos pagadores.

Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, con excepción de las contenidas en el Capítulo VII y Sección I del Capítulo VIII, los contratos de arrendamientos celebrados con respecto a fincas construidas con posterioridad al 2 de junio de 1963, conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de la ley N.º 13.659, de 2 de junio de 1968 —con la redacción dada por el artículo 41 de la ley N.º 13.870, de 17 de julio de 1970— y artículo 2.º de la presente.

Art. 103. Cuando el propietario haya pagado dos o más mensualidades de tributos nacionales, municipales, consumos u otros servicios accesorios, cuyo pago se haya establecido en la ley o en el contrato a cargo del inquilino, la deuda se reputará indivisible con el alquiler y su falta de pago tendrá los mismos efectos que la del alquiler mismo. Los reembolsos podrán ser exigidos hasta por tres mensualidades atrasadas en cada mes.

La constancia inserta en el recibo de pago del alquiler, constituirá prueba suficiente de que los tributos o servicios accesorios han sido exigidos al arrendatario.

Art. 104. En caso de concurrir la doble finalidad de habitación y otro destino, las disposiciones de esta ley se aplicarán atendiendo lo principal.

No se considerará cambio del destino casa-habitación, sin perjuicio de lo establecido en los incisos A) y C) del artículo 9.º de la ley N.º 10.751, de 25 de junio de 1946; la instalación en la finca arrendada de una pequeña industria doméstica o artesanal, o el ejercicio de una profesión universitaria o similar, siempre que el arrendatario y su familia habiten la finca, cuando aquellas actividades no representen inconvenientes para el vecindario por emanaciones, vibraciones, ruidos molestos, ni cause deterioros a la finca, y cumpla con las disposiciones municipales respectivas.

La valoración de estos extremos quedará a juicio del Juez competente.

Art. 105. Son obligaciones de los arrendadores, subarrendadores o de los administradores, en su caso:

- A) Entregar al arrendatario o subarrendatario copia simple, libre de cargos, del respectivo contrato de arrendamiento o subarrendamiento, la cual estará exonerada de todo tributo.
- B) Presentar al arrendatario o subarrendatario, al requerir de éstos el reintegro de los pagos que, por cuenta de los mismos hubieren efectuado, los comprobantes y recibos correspondientes expedidos por las oficinas públicas y privadas pertinentes, haciendo entrega de los mismos a los interesados en el momento en que se hiciera efectivo el pago, cuando ello fuera posible. Cuando no lo fuera por tratarse de comprobantes unitarios, para deudas de varios inquilinos, u otras razones fundadas, deberá extender a cada uno de ellos, recibos por la cuota parte que le correspondiere. De no proceder así, podrá el arrendatario o subarrendatario negarse a pagar dichas obligaciones.
- C) Entregar al arrendatario o subarrendatario, en el momento en que éstos hacen efectivo el pago del alquiler, el recibo correspondiente.

Art. 106. Los aportes que deban realizarse de acuerdo a la ley N.º 13.893, de 19 de octubre de 1970, podrán ser abonados en hasta treinta cuotas mensuales y consecutivas a partir de la fecha de habilitación municipal.

No obstante, si al cumplirse el plazo de dieciocho meses, contados desde la fecha de la autorización municipal del permiso de construcción respectivo, no se hubiese verificado aún dicha habilitación a efectos de la exigibilidad de las cuotas mencionadas, el plazo se contará desde el vencimiento de dicho término de dieciocho meses.

Para quedar amparado a este beneficio la finca deberá ser destinada efectivamente a arrendamiento por un plazo no inferior a tres años, quedando exonerado, su propietario, durante ese plazo, del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto a la Renta.

El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo relativo a la aplicación de esta disposición.

Art. 107. Los contratos de arrendamientos que se celebren con posterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley estarán exonerados del 50 % (cincuenta por ciento) del impuesto a los contratos.

Art. 108. La comisión por administración a cargo del inquilino generada por la suscripción del contrato de arrendamiento no podrá exceder del 1 % (uno por ciento) sobre el monto contractual de la locación; y podrá ser abonada hasta en seis cuotas mensuales consecutivas conjuntamente con el alquiler.

Art. 109. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los contratos de arrendamiento que se celebren deberán instrumentarse por escrito e inscribirse en el Registro General de Arrendamientos y Anticresis dentro del plazo de sesenta días. El Poder Ejecutivo dispondrá que la inscripción de los contratos referidos a inmuebles situados fuera de Montevideo, se efectúe en registros departamentales correspondientes al lugar de ubicación de aquéllos.

El Poder Ejecutivo suministrará el personal y medios materiales suficientes para atender al servicio de que se trata.

La obligatoriedad de la inscripción comenzará a regir a partir del 1.º de enero de 1975, fecha desde la cual se computará el término para la inscripción de los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha y posteriormente a la vigencia de esta ley.

El incumplimiento del arrendador, no le hará perder al arrendatario su calidad de tal, a todos los efectos.

Art. 110. La inscripción devengará una tasa del 1 o/oo (uno por mil) sobre el importe total del arrendamiento a cargo de ambas partes por mitades y la omisión de este requisito de publicidad supondrá la aplicación de una multa del duplo de la tasa que debió abonarse, de cargo del arrendador, que será el responsable de la inscripción.

Art. 111. El alquiler de las viviendas y locales construidos o que construya el Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE), se registrará en lo pertinente por lo dispuesto en los Capítulos I y II de la presente ley y sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N.º 13.723, de 17 de diciembre de 1968.

Si el alquiler que resulte de la aplicación de las disposiciones del Capítulo II de esta ley fuere inferior a 2 UR (dos Unidades Reajustables) se elevará el mismo a dicho valor, cuando se tratase de viviendas y a 3 UR (tres Unidades Reajustables) cuando se tratase de locales o locales con vivienda anexa.

Art. 112. En las localidades donde no se dispusiere de Programas de Viviendas de Emergencia, para ser adjudicadas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo X de la presente ley, la Dirección Nacional de Vivienda podrá autorizar la afectación de viviendas existentes o pertenecientes a otros Programas, para ser adjudicadas por sorteo con dicha finalidad.

El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de la presente disposición.

Las familias desalojadas gozarán de las preferencias a que refiere el artículo 11 del decreto N.º 416/972, de 15 de junio de 1972.

Art. 113. El artículo 397 de la ley N.º 14.106, de 14 de marzo de 1973, no será aplicable a aquellos huéspedes de hoteles, pensiones, moteles, casas de inquilinato y afines que hubieran ingresado con anterioridad a que los mismos se hayan inscrito en el Registro de Hoteles, Pensiones y Afines que tiene a su cargo el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo.

Las personas comprendidas en el inciso anterior así como los huéspedes de hoteles, pensiones y afines que no se encontraren inscritos en el Registro mencionado, o cuya inscripción fuera cancelada, serán considerados arrendatarios a todos sus efectos.

No están comprendidos en esta disposición los hoteles de categoría Lujo, Primera y Segunda A y B, de la categorización del Poder Ejecutivo establecida en el decreto número 721/972, de 6 de noviembre de 1972.

Art. 114. No estarán comprendidos en las normas de esta ley, con excepción de las contenidas en el Capítulo VII y en la Sección I del Capítulo VIII, los arrendatarios y subarrendatarios de edificios o lugares destinados a:

- A) Bancos e instituciones de crédito sea cual sea su denominación u objeto, sus sucursales o agencias.
- B) Casas de bailes públicos, cabarets, dancings, boites, whiskerías o dedicados a las mismas actividades cualquiera fuera su designación.
- C) Casas de huéspedes o prostíbulos.
- D) Casas de despacho de bebidas servidas por camareras.
- E) Casas de sport.

Los arrendamientos a que se refiere este artículo se regularán, en cuanto al precio, por lo dispuesto en el artículo 21 de la presente ley.

Art. 115. Los arrendamientos establecidos en los apartamentos C), D), E), F) y G) del artículo 28 de la presente ley, se ajustarán en sus precios conforme al inciso final del artículo anterior y de acuerdo a los principios de los Capítulos I y II.

Art. 116. Deróganse todas las leyes que se opongan a la presente. No obstante, los procedimientos de desalojos y lanzamientos en trámite promovidos al amparo de las excepciones del Art. 7.º de la ley N.º 11.921, de 24 de marzo de 1953; artículo 15 de la ley N.º 12.492, de 9 de enero de 1958; ley N.º 13.292, de 1.º de octubre de 1964; ley N.º 13.659, de 2 de junio de 1968; artículo 432 de la ley N.º 13.892, de 19 de octubre de 1970 y concordantes, así como los aumentos de alquiler previstos por las leyes N.ºs 13.638, de 22 de diciembre de 1967 y 13.659 ya citada, y las reclamaciones de multas y demás acciones deducidas de conformidad con dichas leyes, continuarán rigiéndose por éstas hasta su completa terminación.

Art. 117. Las disposiciones de esta ley son de orden público.

Art. 118. La presente ley comenzará a regir a partir del 1.º de agosto de 1974, fecha desde la cual queda sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo N.º 285/1974, de 17 de abril de 1974, dictado como Medida Fronta de Seguridad, (artículo 168, inciso 17 de la Constitución de la República).

CAPITULO XII

Disposiciones transitorias

Artículo 119. Los aumentos de alquiler que resulten de la aplicación de la presente ley, serán abonados por los arrendatarios de fincas habitación, con una disminución del 20 o/o (veinte por ciento) para los correspondientes a 1974.

Art. 120. Los arrendatarios o subarrendatarios malos pagadores de fincas con destino a casa-habitación dispondrán de un plazo hasta el 31 de agosto de 1974 para abonar los alquileres adeudados, más el 60 o/o (sesenta por ciento) de esa suma como pago de intereses, tributos y costos, hubieren sido o no condenados a su pago.

Quienes hagan uso de esta facultad, tendrán derecho a solicitar la clausura del juicio de desalojo respectivo, lo que se hará sin más trámite. En este caso no podrán ampararse en el futuro a lo dispuesto en el artículo 52 de esta ley.

Art. 121. La Asesoría Técnica de Arrendamientos seguirá funcionando por el término de ciento veinte días a contar desde la entrada en vigencia de la presente ley, al sólo efecto de proceder a la devolución de la tasa por prestación de servicios, en los casos en que la pericia aún no se hubiere realizado.

Dicha devolución se efectuará a pedido de parte interesada, presentada dentro del término de sesenta días a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley. Las sumas no reclamadas dentro de dicho plazo deberán depositarse en la cuenta "Fondo Nacional de Vivienda" del Banco Hipotecario del Uruguay.

Art. 122. Una vez vencido el plazo de ciento veinte días establecido en el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia procederá a redistribuir los funcionarios que, a la fecha, prestan servicios en la Asesoría Técnica de Arrendamientos.

Art. 123. — Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 24 de junio de 1974.

ALBERTO DEMICHELI, Vicepresidente. — Andrés M. Mata y Manuel María de la Bandera, Secretarios.

A LOS PAGADORES DE

REPARTICIONES PUBLICAS

A fin de no desvirtuar el régimen de contralor existente para los pagos que efectúan las reparticiones del Estado (Dependencias de la Administración Central, Entes Autónomos, Gobiernos Departamentales y Servicios Descentralizados), por sus deudas con "Diario Oficial" es rigurosamente necesario que las mismas exijan nuestro recibo intervenido por la Contaduría General de la Nación, único documento autorizado para acreditar los pagos.

Ministerio del Interior.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Salud Pública.

Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Ministerio de Industria y Comercio.

Ministerio de Educación y Cultura.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo.

Montevideo, 4 de julio de 1974.

Cumplase, acúcese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. — BORDABERRY. — Coronel HUGO LINARES BRUM. — JUAN CARLOS BLANCO. — MOISES COHEN. — WALTER RAVENNA. — EDUARDO CRISPO AYALA. — JUAN BRUNO IRULEGUY. — JULIO EDUARDO AZNAREZ. — JOSE E. ETCHEVERRY STIRLING. — EDMUNDO NARANCIO. — MARCIAL BUGALLO. — FRANCISCO MARIO URBILLOS.

2

Ley N.º 14.220. — Se sustituyen disposiciones de la ley número 14.219, sobre arrendamientos de fincas urbanas y suburbanas.

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Sustitúyese el último párrafo del artículo 3.º de la ley sobre arrendamientos de fincas urbanas y suburbanas promulgada por el Poder Ejecutivo con fecha 4 de julio de 1974, por el siguiente:

"Vencidos los plazos de los arrendamientos para industria y comercio a que se refiere este inciso, el arrendador podrá solicitar el desalojo de la finca con un plazo de un año".

Art. 2.º Sustitúyese el artículo 13 de la citada ley, por el siguiente:

"Artículo 13. Los convenios con plazo pendiente se regirán en cuanto a éste por lo dispuesto en el artículo 2.º de la presente ley".

Art. 3.º Agrégase al penúltimo inciso del artículo 15 de la misma ley, el párrafo siguiente:

"Los precios de los arrendamientos que a la fecha de vigencia de la presente ley no tengan doce meses de antigüedad, se actualizarán conforme a las normas precedentes, al término del décimosegundo mes".

Art. 4.º Modifícase el inciso 3.º del artículo 18 de la misma ley, que quedará redactado así:

"La acción de rebaja no alcanza al inquilino, aunque tenga ingresos inferiores a los indicados, cuando el o el núcleo habitacional que integra, sea propietario de bienes inmuebles de cualquier clase, incluso rurales, si la suma de sus valores fiscales superare los \$ 5.000.000 (cinco millones de pesos)".

Art. 5.º Modifícase el título del Capítulo IV de la misma ley, que quedará redactado así:

"LOCALES CON DESTINO A INDUSTRIA Y COMERCIO. Normas generales para los contratos anteriores a la presente ley".

Art. 6.o Sustitúyese el artículo 21 de la citada ley por el siguiente:

"Artículo 21. Los contratos de arrendamiento de fincas destinadas a industria y comercio se actualizarán automáticamente a partir de la vigencia de esta ley sobre la base del último alquiler y de acuerdo al porcentaje de variación de la UR (Unidad Reajutable, artículos 14 y 15) desde que dicho alquiler estuvo vigente. Se exceptúan los arrendamientos con plazo contractual inferior a tres años, los cuales al cumplimiento de dicho plazo y en base al precio vigente establecido para el tercer año, se actualizarán conforme al porcentaje de variación de la UR (Unidad Reajutable, artículos 14 y 15) en el plazo de los últimos doce meses de aplicado el último alquiler"

Art. 7.o Sustitúyese el artículo 22 de la misma ley por el siguiente:

"Artículo 22. Los contratos a que se refiere el artículo anterior se prorrogarán en su plazo por cuatro años desde la vigencia de esta ley, con alquileres que se actualizarán cada doce meses según el procedimiento indicado en el artículo 3.o, hasta la desocupación de la finca, teniendo el arrendador, al vencimiento del plazo de prórroga, la facultad de desalojar con plazo de un año.

Se exceptúan, en cuanto a la prórroga del plazo, aquellos cuyo plazo contractual aún pendiente, sea superior a cuatro años, que se regirán por lo convenido por las partes".

Art. 8.o Modifícase el inciso final del artículo 26 de la ley, que quedará redactado así:

"Las excepciones establecidas en este artículo y en el numeral 4.o del artículo 24 no podrán ser deducidas mientras exista plazo contractual pendiente".

Art. 9.o La presente ley entrará en vigencia el 1.o de agosto de 1974. El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para que su publicación en el "Diario Oficial" se realice

simultáneamente a la que, sobre la misma materia, promulgó el 4 de julio de 1974.

Art. 10. Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 9 de julio de 1974.

ALBERTO DEMICHELI, Presidente. — Andrés M. Mata y Manuel María de la Bandera, Secretarios.

Ministerio del Interior.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Salud Pública.

Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Ministerio de Industria y Comercio.

Ministerio de Educación y Cultura.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo.

Montevideo, 11 de julio de 1974.

Cumplase, acútese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. — BORDABERRY. — Coronel HUGO LINARES BRUM. — JUAN CARLOS BLANCO. — MOISES COHEN. — WALTER RAVENNA. — EDUARDO CRISPO AYALA. — JUSTO M. ALONSO LEGUISAMO. — JULIO EDUARDO AZNAREZ. — JOSE E. ETCHEVERRY STIRLING. — EDUARDO MUNDO NARANCO. — MARCIAL BUGALLO. — FRANCISCO MARIO UBILLOS.

SECRETARIAS DE ESTADO

La publicación en el "Diario Oficial" equivale a la comunicación en forma oficial para las oficinas que deben cumplir y hacer cumplir las leyes, actos gubernativos y administrativos. — (Decretos 12 de agosto de 1907 y 3 de diciembre de 1917)

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Acta. — Se comisan animales en pie, intervenidos en procedimientos realizados por funcionarios de la Comisión Especial de Represión del Comercio Ilícito de la Carne.

En Montevideo, a los cuatro días del mes de julio de mil novecientos setenta y cuatro, el señor Presidente de la República, en Acuerdo celebrado con el señor Ministro de Industria y Comercio y visto los asuntos de dicha Cartera sometidos a su consideración,

RESUELVE:

1.o Comísanse animales en pie, intervenidos en procedimientos realizados por funcionarios de la Comisión Especial de Represión del Comercio Ilícito de la Carne, de conformidad con lo dispuesto en la ley N.o 12.120 de 6 de julio de 1954, modificada por la ley N.o 12.541 de 16 de octubre de 1958 y disposiciones concordantes.

Acta G N.o 18.778, del 11 de marzo de 1970, por 20 (veinte) vacunos en pie en Teniente Galeano N.o 3055 al señor Juan Angel Chiazarzo; Acta G. N.o 22.134 del 25 de setiembre de 1972, por siete (7) vacunos en pie (2.380 Kgs.) en la vía pública, al señor Eloy Dorta Marrero.

2.o Líbrese comunicación al Frigorífico Nacional a los fines de la entrega del importe de la mercadería comisada a los funcionarios actuantes.

3.o Extiéndanse las resoluciones correspondientes en los expedientes respectivos, las que serán firmadas por el Director General del Ministerio de Industria y Comercio, dejándose constancia de haber sido resueltas en la presente Acta.

4.o Comuníquese, publíquese, y archívese. — BORDABERRY. — JOSE E. ETCHEVERRY STIRLING.

Acta. — Se comisan carnes, intervenidas por funcionarios del Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios.

En Montevideo, a los 4 días del mes de julio de mil novecientos setenta y cuatro, el señor Presidente de la República, en Acuerdo celebrado con el señor Ministro de Industria y Comercio y vistos los asuntos de dicha Cartera sometidos a su consideración,

RESUELVE:

1.o Comísanse carnes, intervenidas por funcionarios del Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios y aplícanse las multas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el de-

creto N.o 436/971 del 13 de julio de 1971 y disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Acta N.o 61/202 de 5 de junio de 1973, por 94.600 Kgs. de carne vacuna en la carnicería clandestina ubicada en Bérnago N.o 3441 y multa de \$ 47.300 (cuarenta y siete mil, trescientos pesos) al señor Alfredo W. De León Olivera; Acta número 61.621 del 13 de junio de 1973, por 500 kilogramos de carne vacuna, en la carnicería habilitada ubicada en Pedro Trapani N.o 1251 y una multa de \$ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos), al señor José Benítez Alonso.

2.o Las autoridades correspondientes dispondrán lo pertinente a fin de entregar el importe de la mercadería comisada a los funcionarios actuantes.

3.o Para el cobro de las multas que se imponen, se seguirá el procedimiento indicado en el decreto del 13 de enero de 1959.

4.o Extiéndanse las resoluciones correspondientes en los expedientes respectivos, las que serán firmadas por el Director General del Ministerio de Industria y Comercio, dejándose constancias de haber sido resueltas en la presente Acta.

5.o Comuníquese, publíquese y archívese. — BORDABERRY. — JOSE E. ETCHEVERRY STIRLING.

Acta. — Se otorgan Permisos para ejercer actividades de industrialización y comercialización por mayor, de productos de la pesca.

Ministerio de Industria y Comercio.

Ministerio de Ganadería y Agricultura.

En Montevideo, a los 27 días del mes de julio de mil novecientos setenta y cuatro, el señor Presidente de la República, en Acuerdo celebrado con los señores Ministros de Industria y Comercio y de Ganadería y Agricultura y visto los asuntos sometidos a su consideración;

RESUELVE:

1.o Otórgase en favor de las firmas que a continuación se mencionan, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la ley N.º 13.833 de 29 de diciembre de 1969 y en el artículo 21 del decreto número 711/971 de 28 de octubre de 1971, los correspondientes permisos para ejercer actividades de industrialización y comercialización por mayor, de productos de la pesca:

"Algamar S. A.", con domicilio en Rincón N.º 487, Esc. 204, Montevideo.

"Pescaderías del Plata S. R. L.", con domicilio en Av. 8 de Octubre N.º 4739, Montevideo.

2.o El Ministerio de Ganadería y Agricultura deberá efectuar el contralor sanitario tal como lo determina el artículo 21 de la ley N.º 13.833 de 29 de diciembre de 1969.

3.o El Servicio Oceanográfico y de Pesca, deberá fiscalizar el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 20 y 21 del decreto N.º 711/971 de 28 de octubre de 1971.

4.o Extiéndanse las resoluciones correspondientes en los expedientes respectivos, las que serán firmadas por el señor Director General del Ministerio de Industria y Comercio, dejándose constancia de haber sido autorizadas en la presente Acta.

5.o Comuníquese, publíquese y archívese.

— BORDABERRY. — JOSE E. ETCHEVERRY. STIRLING. — JULIO EDUARDO AZNAREZ.

TRAMITES DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Montevideo, 25 de junio de 1974.

Vistas por 20 días. (Marcas de Servicio):

— N.º 1.222 "La Casa del Ceramista". — Acta N.º 1.589 "Festival Nacional de la Música Moderna".

— Vistas por 20 días. — (Marcas de fábrica): N.º 130.903 "Pregnex". — Número 131.136 "Banfisal".

— Vistas por 20 días. — (Patentes): número 8.029 David John Caughley — Número 10.004 Joseph Bancroft y Sons Co. — N.º 10.282 Alfredo Diego Bouzada. — Número 10.351 The Gillette Company. — Acta N.º 8.695 Luis Díaz. — Acta N.º 9.980 Ethyl Corporation. — Acta N.º 13.095 Societe D'Etudes Ferroviaires. — Acta número 13.751 Philip Morris Incorporated. — Acta N.º 13.799 Mario Padriñi Belloni. — Acta N.º 14.605 Celanese Corporation Of America. — Acta N.º 14.879 Monsanto Chemical Co. — Acta N.º 15.439 Corn Products Company. — Acta N.º 16.269 Standard Elektrik Lorenz Ag. — Acta número 16.605 Jesús Trobo Viera. — Acta número 16.835 Salomón Noachas y Luis Grosskopf. — Acta N.º 16.843 Tomás Amenabar

Delano y Leonardo Zuccoli. — Acta número 17.909 Federico García Roche. — Acta N.º 18.116 Purolator Inc. — Acta N.º 18.234 Conatel S. A. — Acta N.º 18.243 Francisco Parisi. — Acta N.º 18.469 Marine Protein Corporation. — Acta N.º 18.613 Dunlop Holdings Limited. — Acta número 18.774 Criba Saa. — Acta N.º 18.825 F. Hoffmann La Roche y Co. Ag. — Acta N.º 18.826 United Merchants y Manufacturers Inc. — Acta N.º 18.841 I. W. S. No. minee Limited. — Acta N.º 18.882 Alvaro Saad Chujfi. — Acta N.º 18.949 Julio Traverso Arando y Enrique Font. — Acta número 18.969 Arco Limitada. — Acta número 18.979 Tydio A. Silva Fugarelliz. Acta N.º 18.980 Tydio A. Silva Fugarelliz. — Acta N.º 18.989 Aldo Guido Di Lorenzo Salvo. — Acta N.º 19.015 Mauro Romano Greco. — Acta N.º 19.017 Haid Carlos Manuelian Araújo. — Acta N.º 19.032 Envases Fadesh S.A.C.I.F.I.A. y de Mandato. — Acta N.º 19.042 Mario Blochene y Mario Grossman. — Acta N.º 19.045 Johnson y Johnson. — Acta N.º 19.046 Johnson y Johnson. — Acta N.º 19.054 Global Wool Investments Limited. — Acta N.º 19.072 Glass Laboratories Company. — Acta número 19.073 Glass Laboratories Company. — Acta N.º 19.082 Chemetron Corporation. — Acta N.º 19.085 José Paz Formento y Hugo López Temperán. — Acta número 19.087 E.I. Du Pont de Nemours And Company. — Acta N.º 19.093 FMC Corporation. — Acta N.º 19.103 José A. Fernández Calazzo. — Acta N.º 19.116 Roberto Barrutia Scagliola. — Acta N.º 19.132 F. Hoffmann La Roche y Co. AKT. — Acta N.º 19.139 Manuel Pallares Padilla. — Acta N.º 19.141 Richter Geodon Vegyszeti Gyar R.T. — Acta N.º 19.148 Centromint Company (Establishment). — Acta número 19.154 Valentín Crosa. — Acta N.º 19.146 Merck y Co. Inc. — Acta N.º 19.158 Fabril Internacional S. A. — Acta N.º 19.184 Eddybel S. A. — Acta N.º 19.187 Pedro Giordano. — Acta N.º 19.219 F. Hoffmann La Roche y Co. Ag. — Acta N.º 19.223 Sergio Antonio Dal Din. — Acta N.º 19.237 Dilcofan S. A. — Acta N.º 19.240 Copper Process Ltd. — Acta N.º 19.242 Xavier Lipp. — Acta N.º 19.246 Rohm And Haas Company. — Acta N.º 19.250 Victor Manuel Abreu. — Acta N.º 19.253 Rohm y Haas Company. — Acta N.º 19.261 Socaspe Soc. de Casas Pré-Fabricadas S.A.R.L. — Acta N.º 19.262 Roussel Uclaf S. A. — Acta N.º 19.269 Socaspre-Soc. de Casas Pré-Fabricadas S.A.R.L. — Acta N.º 19.270 Haid Carlos Manuelian. — Acta N.º 19.285 Pedro T. Kolari. — Acta N.º 19.296 Osvaldo Alfonso Cerdeiro. — Acta N.º 19.299 Martínez y Gallí. — Acta N.º 19.304 United Merchants And Manufacturers Inc. — Acta N.º 19.311 Pedro Cabeceran Marginet. — Acta N.º 19.317 Nicolás Serassio. — Acta N.º 19.329 Jorge Sztarcsevsky. — Acta N.º 19.345 Julio Fornaro y José Vázquez Casal.

— Vistas por 20 días. — (Marcas de fábrica): — Acta N.º 103.037 "Diamond". — Acta N.º 106.867 "De Partagas y Cia". — Acta N.º 123.330 "Taillana". — Acta número 123.331 "Taillana". — Acta número 123.417 "Softfill". — Acta N.º 128.766 "(Descripta y facsimilada)". — Acta número 133.259 "Sony". — Acta N.º 134.945 "Digoxil". — Acta N.º 135.749 "La Casa de la Licuadora". — Acta N.º 141.105 "Granja Blanca". — Acta N.º 141.155 "Field". — Acta N.º 141.156 "Field". — Vistas por 20 días. (Modelos industriales): — Acta N.º 0034 "David Kopel". — Acta N.º 0071 Antonio Curcio Irigoyen. — Acta N.º 0088 Norberto Felitti y Ubaldo Camejo. — Acta N.º 0119 Luis A. Freire y Rafael Vergara Corbo. — Acta número 0124 Pedro E. Chiancone y Vital G. Britos. — Acta N.º 0125 Benzaquen S.A.I. C.I. y F. — Acta N.º 0145 Héctor Walser. — Acta N.º 0178 Isaac Curiel Segura. — Acta N.º 0183 Salomón Elisps. — Acta número 0186 Julio Rodríguez Falero. — Acta

N.º 0187 Wisili Benuic y Alfredo Durán. — Acta N.º 0190 Wasili Benuic y Alfredo Durán. — Acta N.º 0191 Wasili Benuic y Alfredo Durán. — Acta N.º 0199 Arco Ltda. — Acta N.º 0218 Joaquina Alamy de Izquierdo. — Acta N.º 0229 Juan Settin. — Acta N.º 0232 Alfredo Cotugno. — Acta N.º 0234 Francisco Ramos. — Acta N.º 0236 Felipe Rossenberger. — Acta número 0238 Felipe Rosenberger. — Acta N.º 0242 Lanca S. A. — Acta N.º 0243 Lanca S. A. — Acta N.º 0244 Lanca S. A. — Acta N.º 0245 Lanca S. A. — Acta número 0246 Lanca S. A. — Acta N.º 0247 Lanca S. A. — Acta N.º 0248 Lanca S. A. — Acta N.º 0249 Vicente Makuczki. — Acta número 0252 Bernardo Sandler. — Acta número 0253 Walmar Sociedad Comercial. — Acta N.º 0254 Virgilio Dante Tocché. — Acta N.º 0258 Walter Núñez Pioli. — Acta N.º 0277 Fernando Alfaro. — Acta N.º 0280 Righini y Oramas S. A. — Acta N.º 0283 Righini y Oramas S. A. — Acta N.º 0306 Fylsa Ltda. — Acta número 0307 Fylsa S. A. — Acta N.º 0308 Fylsa Limitada. — Acta N.º 0311 Industrias Mecánicas Zanón Hnos. — Acta número 0314 Mondragon Ltda. — Acta número 0315 Mondragon Ltda. — Acta N.º 0320 Jorge Sztarcsevsky. — Acta N.º 0321 Jorge Sztarcsevsky. — Acta N.º 0322 Jorge Sztarcsevsky. — Acta N.º 0325 Manuel García Lago. — Acta N.º 0326 Roberto A. Cabezas y otros. — Acta N.º 0339 Aduardo A. Demaria. — Acta N.º 0348 Veloz S. A. — Acta N.º 0359 Raúl Michel.

— Pago de la primera anualidad: Acta N.º 18.404 Pullman Incorporated. — Acta N.º 18.702 Power Inc. — Acta número 18.835 Manuel Carbajal. — Acta número 18.873 Wilkinson Sword Limited. — Acta N.º 19.075 Conatel S. A. — Acta N.º 19.134 Pfizer Inc. — Acta N.º 19.147 Jacobo Berger y Elbio Rafael Bergallo. — Acta N.º 19.252 Omnium de Prospective Industrielle. — Acta N.º 19.256 F. Hoffmann La Roche y Co. A. G. — Acta N.º 19.259 Bayer Aktiengesellschaft. — Acta N.º 19.274 Sandos Patents Limited. — Acta N.º 19.275 Pfizer Inc. — Acta N.º 19.276 Instituto De Angeli S. p. A. — Acta N.º 19.279 Patents International Affiliates Ltd. — Acta N.º 19.280 Pfizer Inc. — Acta N.º 19.289 Laboratoires Servier. — Acta N.º 19.298 Cassella Farbwerke Maineur Ag. — Acta N.º 18.872 Wilkinson Sword Limited. — Acta N.º 19.302 Stauffer Chemical Company. — Acta número 19.315 Societe Francaise D'Electrothermie. — Acta N.º 19.318 The Boots Company Limited. — Acta N.º 19.324 I. S. F. S. p. A. — Acta N.º 19.325 Bayer Ag. — Acta N.º 19.326 J. P. Stevens y Co. Inc. — Acta N.º 19.333 Ciba-Geigy Ag. — Acta N.º 19.365 Farbwerke Hoechst Ag. V. M. Lucius y Bruning. — Acta N.º 19.372 Arsenio Leonides Silva Silva. — Acta N.º 19.373 Luis Cassanaz. — Acta N.º 19.375 Uncle Ben's of Australia Pty Ltd. — Acta N.º 19.376 Ciba-Geigy Ag. — Acta N.º 19.381 I. S. F. S. p. A. — Acta N.º 19.382 I. S. F. S. p. A. — Acta N.º 19.389 Hermes George Cello. — Acta N.º 19.392 Antonio Rifon. — Acta N.º 19.408 Rhom And Haas Company. — Acta N.º 19.427 Baby Valentín Acosta. — Acta N.º 19.449 I. S. P. Socita Per Azioni.

— Pago de la primera anualidad. (Modelos Industriales): Acta N.º 0096 Alejandro Spitzer. — Acta N.º 0105 J. Baffico y Cia. — Acta N.º 0106 J. Baffico y Cia. — Acta N.º 0230 Juan Settin. — Acta N.º 0250 César H. Bidegaray. — Acta número 0255 Dixs S. A. — Acta N.º 0257 Amílcar H. Aquino. — Acta N.º 0278 Eduardo Márquez Fernández. — Acta N.º 0286 Jorge Gari Bottaro y otros. — Acta N.º 0287 Jorge Fernández. — Acta N.º 0293 Industrias Rurales Uruguayas S. R. L. — Acta N.º 0295 Alejandro

Gajduk. — Acta N.º 0300 N. V. Philips Gloeilampenfabrieken. — Acta N.º 0301 N. V. Philips Gloeilampenfabrieken. — Acta N.º 0309 Industrias Mecánicas Zanón Hnos. — Acta N.º 0310 Industrias Mecánicas Zanón Hnos. — Acta N.º 0324 Niboplast Uruguay S. A. C. I. — Acta N.º 0328 Luis Antonio Fatigatti. — Acta N.º 0329 Diego Nelson Lamas. — Acta N.º 0330 Francisco Valettutti. — Acta número 0333 Justo Girellea. — Acta número 0335 Industrias Mecánicas Zanón Hnos. — Acta N.º 0345 Carlos María Martínez. — Acta N.º 0347 Morena S. A. — Acta N.º 0351 Claus R. Fitermann. — Acta N.º 0355 José V. Uzal. — Acta N.º 0357 Alfredo Cotugno. — Acta N.º 0358 Alfredo Cotugno. — Acta N.º 0361 Tulio Michielli y Juan L. Guerra Gaja. — Acta N.º 0365 Fernando Alfaro. — Acta número 0366 Alfredo Cotugno. — Acta número 0367 Emballages Couronne S. A. — Acta N.º 0376 Nibo Plast Uruguay S. A. C. I. — Acta N.º 0377 Nibo Plast Uruguay S. A. C. I. — Acta N.º 0382 Alfredo Cotugno. — Acta N.º 0384 Mario Blochene. — Acta N.º 0387 Laboratorios Dispert S. A. — Acta N.º 0389 Chesebrough Pond's Inc. — Acta N.º 0390 Chesebrough Pond's Inc. — Acta N.º 0393 Dr. Gabriel Kertese. — Acta N.º 0396 Mauro Romano Greco. — Acta N.º 0400 Isidoro Kac. — Acta N.º 0402 Juan Carlos Mata. — Acta N.º 0405 Fernando Alfaro. — Acta N.º 0409 Nibo Plast Uruguay

S. A. C. I. — Acta N.º 0410 Romeo Gnazzo y Wilson Omar Gnazzo. — Acta N.º 0414 Gladys Neils Rizzo Maggi. — Acta N.º 0416 Conatel S. A. — Acta número 0417 Conatel S. A. — Acta número 0418 Conatel S. A. — Acta N.º 0419 Conatel S. A. — Acta N.º 0420 Conatel S. A. — Acta N.º 0421 Conatel S. A. — Acta N.º 0423 Remigio A. Damell y Raúl A. Draper. — Acta N.º 0425 Eternit Uruguay S. A. — Acta N.º 0426 Eternit Uruguay S. A. — Acta N.º 0427 Eternit Uruguay S. A. — Acta N.º 0430 Dell'Acqua y Cia. Limitada. — Acta N.º 0436 Olga Otero de Jarque. — Acta N.º 0443 Carlos Alberto Ramos Marini. — Acta número 0444 Aldo Fernández. — Acta número 0449 Abraham Bogdanowicz y otros.

—Se detiene el trámite (Artículo 13). — (Modelos Industriales): Acta N.º 0012 Nibo Plast Uruguay S.A.C.I. — Acta número 0021 Halson S. A. — Acta N.º 0022 Halson S. A. — Acta N.º 0023 Halson S. A. — Acta N.º 0024 Halson S. A. — Acta número 0025 Halson S. A. — Acta N.º 0026 Halson S. A. — Acta N.º 0160 Juan Enrique Tomati. — Acta N.º 0169 Walter Scaltritti Valabrega. — Acta N.º 0180 Emilio Soler Laguna. — Acta N.º 0341 Tulio Michielli y Juan L. Guerra Gaja.

—Se detiene el trámite (Artículo 13). — (Patentes): Acta N.º 17.143 Agustín Ramón Arthuz. — Acta N.º 18.802 Casa Praos

S. A. — Acta N.º 18.870 Industria Térmica Brasileira S. A. — Acta N.º 18.893 Fernando Molinaro. — Acta N.º 18.898 Hugo Melo. — Acta N.º 18.920 Jorge Ardans Irigoyen. — Acta N.º 18.931 Antonio Barboza. — Acta N.º 18.943 Mauro Romano Greco. — Acta N.º 18.960 Mauro Fratochi Cristiani. — Acta N.º 18.964 César Etcheverry y Elsa Janeiro de Sánchez. — Acta número 18.985 Antonio Barboza. — Acta número 19.002 Walter Beheran. — Acta número 19.004 Eduardo y Simón Larchs. — Acta número 19.031 Helios C. Ocho y Jorge Walter Dobal. — Acta N.º 19.035 Rubén Guida. — Acta N.º 19.036 Diego Nelson Lamas. — Acta N.º 19.049 Norberto Manuel Casal. — Acta N.º 19.052 Industrias Mecánicas Zanón Hnos. — Acta número 19.053 Industrias Mecánicas Zanón Hnos. — Acta N.º 19.071 Iden Beltrame. — Acta N.º 19.074 International Housing Limited. — Acta N.º 19.097 Roberto Felliti y Ubaldo Camejo. — Acta N.º 19.119 Ignacio Villaroja. — Acta N.º 19.157 Silverio Lavecchia Montagno. — Acta N.º 19.163 Gilberto González y Enrique Robles. — Acta N.º 19.189 Juan Carlos Mata. — Acta N.º 19.195 Atma S. A. — Acta número 19.197 Atma S. A. — Acta N.º 19.202 Arco Ltda. — Acta N.º 19.203 Arco Ltda. — Acta N.º 19.204 Arco Ltda. — Acta número 19.209 Angel Rico y otros. — Acta número 19.212 Mauricio Porraz Jiménez Labora.

La Secretaría.

SOCIEDADES ANONIMAS Y POR ACCIONES

OBLIGACION DE PUBLICAR SUS BALANCES EN EL "DIARIO OFICIAL"

Por el artículo 12 de la ley N.º 12.080, de 11 de diciembre de 1953, se modifica el artículo 74 de la ley (N.º 11.024, de 27 de marzo de 1953, referente a la obligatoriedad de publicar balances en la forma que sigue:

"Artículo 74. Las Sociedades por acciones estarán obligadas a publicar en el "Diario Oficial" el balance general, estado de pérdidas y ganancias y proyecto de distribución de utilidades, dentro de los ciento cincuenta días del cierre del Ejercicio, previa visación de la Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas". (Por el artículo 1.º del decreto N.º 230/964, de 2 de julio de 1964, reglamentario del artículo 133 de la ley N.º 13.241, esta visación pasó a la Inspección General de Hacienda).



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DEL CONSEJO DE ESTADO

39ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR CONSEJERO DOCTOR APARICIO MENDEZ

(2º VICEPRESIDENTE)

ACTUAN LOS SECRETARIOS SEÑOR ANDRES M. MATA Y DOCTOR MANUEL MARIA DE LA BANDERA

SUMARIO

	Pág.		Pág.
1—TEXTO DE LA CITACION	610	—Se reconsidera el trámite dado en su oportunidad, y se encomienda a Secretaría los estudios técnicos del caso.	
2—ASISTENCIA Y AUSENCIAS	611	—(Ver 18ª, 30ª y 35ª Sesiones)	614
3 y 5—ASUNTOS ENTRADOS	611 y 614	9 y 17—CENTRAL HIDROELECTRICA DEL PALMAR.	
4 y 6—PROYECTOS PRESENTADOS.		—Proyecto de ley relacionado con la ejecución de las obras de infraestructura.	
—La señora Consejera doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma y el señor Consejero doctor José Francisco França, presentan un proyecto de ley por el que se crea el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno de Maldonado. (Carp. 450/974).		—Se declara grave y urgente y se considerará en primer término de la orden del día.	
—El señor Consejero doctor Mario Arcos Pérez, presenta un proyecto de ley por el que se crea la Academia Nacional de Medicina. (Carp. 451 de 1974).		—Antecedentes: Repartido Nº 394 de abril de 1974. Carpeta 350 de 1974. Anexo 1 de mayo de 1974. Comisión de Obras Públicas, integrada.	
—El señor Consejero Ing. Agr. Alfredo Cardoso Arrarte, presenta un proyecto de ley por el que se declara que la Ley Nº 14.194 de 14 de mayo de 1974 sobre suspensión de lanzamientos, entrará en vigencia luego de publicada en 2 días de la capital (Ver numeral 23). (Carp. 452 de 1974)	611 y 614	—En discusión.	
7—ESCUDO NACIONAL.		—Exposición del señor Consejero Coppetti. Intervención de varios señores Consejeros.	
—Donación al Consejo de Estado por el señor Isaac Yohai Toros de un cuadro realizado por el artista Félix Corbi.		—Aprobado con las modificaciones introducidas en Sala. Se comunicará al Poder Ejecutivo.	
—Manifestaciones del señor Presidente (Dr. Méndez) y del señor Consejero Rodríguez Larreta	614	—(Ver 30ª y 38ª Sesiones)	615 y 619
8—SEÑORA DELIA MURO DE RICALDONI.		10—COLEGIO DE ABOGADOS DEL URUGUAY.	
—Ejecución de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.		—Remite nota relacionada con los alcances del artículo 534 de la Ley Nº 14.189 de 30 de abril de 1974.	
		—Palabras del señor Consejero Pons. Aclaración del señor Presidente (Dr. Méndez)	615
		11—AUTORIZACION A LOS PERIODISTAS DE DISTINTOS MEDIOS DE INFORMACION PARA OIR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ESTADO.	
		—Planteamiento del señor Consejero Praderi.	
		—(Ver 36ª y 37ª Sesiones)	615

	Pág.		Pág.
12—SEÑOR CARLOS SABAT ESCASTY. —Entrega de las obras de que es autor a la Biblioteca Nacional. —Exposición del señor Consejero Varela	616	21—FRIGORIFICO PALMARES DE CASTILLOS S. A. —Intervención. —Antecedentes: Repartido Nº 402 de abril de 1974. Carpeta Nº 363 de 1974. Anexo 1 de mayo de 1974. Comisión de Industria y Comercio. —En discusión. —Exposición del señor Consejero Viana Reyes. Intervención de varios señores Consejeros. —(Ver 30ª Sesión). —Se aprueba un proyecto de resolución, que se comunicará	640
13—COMERCIALIZACION DE LANAS, CUEROS LANARES Y CARNE. —Decretos del Poder Ejecutivo. —Exposición del señor Consejero Rubio. —Pasa la versión taquigráfica a los Ministerios de Ganadería y Agricultura. —(Ver 30ª, 32ª y 38ª Sesiones)	616	22—FRIGORIFICO SAN CARLOS S. A. —Ocupación por parte del Ministerio de Defensa Nacional. —Antecedentes: Repartido Nº 403 de abril de 1974. Carpeta Nº 364 de 1974. Anexo 1 de mayo de 1974. Comisión de Industria y Comercio. —En discusión. —Intervención del señor Consejero Labadie Abadie. —Pasa a la Comisión de Interior. —Intervención de varios señores Consejeros	645
14—VILLA "25 DE MAYO" EN EL DEPARTAMENTO DE FLORIDA. —Commemoración del Centenario de la Fundación. —Visita de la Comisión Organizadora de los festejos a realizarse con ese motivo. —Palabras del señor Presidente (Dr. Méndez). Intervención del señor Consejero Rodríguez Larreta. —Se resuelve comunicar a la Comisión Organizadora la solidaridad del Consejo de Estado ante tal circunstancia, y enviar minuta de comunicación al Poder Ejecutivo expresándole el deseo del Cuerpo de que en la próxima Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, se fije una partida para la Intendencia Municipal de Florida con destino a la realización de obras locales, particularmente de vialidad. —(Ver 30ª Sesión)	618	23—LANZAMIENTO DE OCUPANTES DE PREDIOS RURALES DESTINADOS A EXPLOTACIONES AGRARIAS. —Proyecto de ley presentado por el señor Consejero Cardoso Arrarte. —Manifestaciones del mencionado señor Consejero. —Se resuelve declararlo grave y urgente y tratarlo sobre tablas. —Antecedentes: Carpeta Nº 452. —En discusión. —Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.	647
15 y 18—SEÑOR ALFREDO J. PUIG SPANGENBERG. —Proyecto de ley por el que se establece que los gastos del sepelio serán costeados por el Tesoro Nacional. —Se resuelve declararlo grave y urgente y considerarlo en la sesión de hoy, en segundo término de la orden del día. —Antecedentes: Repartido Nº 298 de febrero de 1974. Carpeta Nº 252 de 1974. Anexo 1 de mayo de 1974. Comisión de Economía y Finanzas. —En discusión. —Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo. —(Ver 16ª, 18ª y 21ª Sesiones)	619 y 626	24—SE LEVANTA LA SESION	648
16—INTEGRACION DE COMISION. —Palabras del señor Consejero Praderi. Se integra la Comisión de Industria y Comercio con miembros de la de Ganadería y Agricultura, para el estudio del tema relacionado con importación de crudo de azúcar e industria sacarina en el Uruguay	619		
19—FRIGORIFICO SUDAMERICANO S. A. —Destino final de sus bienes. —Antecedentes: Repartido Nº 395 de abril de 1974. Carpeta Nº 351 de 1974. Anexo 1 de mayo de 1974. Comisión de Industria y Comercio. —En discusión. —Exposición del señor Consejero Labadie Abadie. —Debatē. —Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo. —(Ver 30ª Sesión)	627		
20—FRIGORIFICOS INDAGRO S. A., PALMARES DE CASTILLOS S. A. Y SAN CARLOS S. A. —Toma de posesión de explotación de sus bienes. —Antecedentes: Repartido Nº 396 de abril de 1974. Carpeta Nº 352 de 1974. Anexo 1 de mayo de 1974. Comisión de Industria y Comercio. —En discusión. —Manifestaciones del señor Consejero Praderi. —Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.	636		

1. — TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, mayo 15 de 1974.

El Consejo de Estado se reunirá, en sesión ordinaria, hoy miércoles 15 a la hora 18, para informarse de los asuntos entrados y considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º Frigorífico Sudamericano S. A. (Destino final de sus bienes). (Carp. 351/974) (Informado). (Rep. 395 y Anexo I).
- 2º Frigorífico Indagro S. A., Palmares de Castillos S. A. y San Carlos S. A. (Toma de posesión y explotación de sus bienes). (Carp. 352/974). (Informado). (Rep. 396 y Anexo I)
- 3º Frigorífico Palmares de Castillos S. A. (Intervención). (Decreto del Poder Ejecutivo de 5 de abril de 1974). (Carp. 363/974). (Informado). (Rep. 402 y Anexo I).
- 4º Frigorífico San Carlos S. A. (Ocupación por parte del Ministerio de Defensa Nacional). (Resolución del Poder Ejecutivo de 5 de abril de 1974). (Carpeta 364/974). (Informado). (Rep. 403 y Anexo I).

Andrés M. Mata
Manuel María de la Bandera
Secretarios"

2. — ASISTENCIAS Y AUSENCIAS

Asisten los señores Consejeros: Dra. Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Dr. Mario Arcos Pérez, Ing. Agr. Alfredo Cardoso Arrarte, Arq. Raúl H. Clerc, Ing. Mario Jorge Coppetti, Prof. María Coolighan Sanguinetti, Dr. Julio César Espínola, Dr. José Francisco França, Dra. Gladys Freire de Addiego, Dr. Mario Gaggero, Dr. Gastón Labadie Abadie, Dr. Alfredo Lamaison, Dr. Juan Carlos Pons, Ing. Eduardo Praderi, Dr. Hamlet Reyes, Dr. Daniel Rodríguez Larreta, Dr. Juan Rodríguez López, Sr. Jesús Rubio, Dr. Rodolfo Saccone, Dr. Emilio Siemens Amaro, Dr. Osvaldo Soriano, Ing. Agr. Jorge Spangenberg, Dr. José Antonio Varela y Dr. Enrique Viana Reyes.

Faltan: con licencia el señor Consejero, Dr. Alberto Demicheli y el señor Presidente, Consejero Dr. Martín R. Echegoyen.

3. — ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 18 y 6 minutos.)

Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

Montevideo, 15 de mayo de 1974.

DEL PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo comunica que en uso de la facultad establecida por el inciso 17 del artículo 168 de la Constitución, ha dictado los siguientes decretos y resoluciones:

Clausurando el diario "El Diario" de Montevideo, por dos ediciones. (C/446/74).

Dictando normas para la comercialización de la lana. (C/447/74).

Estableciendo normas referentes a restricciones en el uso de energía eléctrica. (C/448/74).

Implantando el sistema de horarios máximos para el funcionamiento de las distintas actividades laborales y de cierre de los respectivos locales. (C/449/74).

—A la Comisión de Interior.

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Obras Públicas, integrada, se expide en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el proyecto de inversiones relativo a las obras de infraestructura de la Central Hidroeléctrica del Palmar. (C/350/74).

La Comisión de Interior se expide acerca de los Mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo de fechas 30 de abril y 3 de mayo de 1974, donde se incluyen nóminas de las personas detenidas y liberadas bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad. (C/203/74). —Repártanse.

4. — PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Consejeros doctores Aurora Alvarez de Silva Ledesma y José Francisco França presentan un proyecto de ley por el que se crea el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno de Maldonado. (C/450/74).

—A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto de ley y exposición de motivos presentados:)

"PROYECTO DE LEY

CREACION DEL JUZGADO LETRADO DE SEGUNDO TURNO DE MALDONADO

Artículo 1º — Créase el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno de Maldonado (inciso 16 programa 16.04) con la misma jurisdicción y competencia que tiene el actual Juzgado Letrado de Maldonado.

El actual Juzgado Letrado de Maldonado, pasará a denominarse Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno.

La Suprema Corte de Justicia, reglamentará la distribución de expedientes en trámite entre ambas oficinas.

Este Juzgado entrará en funcionamiento a los sesenta días (60) de promulgada esta ley.

Art. 2º — Para desempeñar los cometidos del Juzgado que se crea en el artículo anterior; créanse los siguientes cargos: un cargo de Juez Letrado Departamental; un cargo de Actuario; un cargo de Actuario Adjunto; un cargo de Alguacil; un cargo de Jefe de Despacho; un cargo de Oficial de Secretaría; un Oficial 1º; un cargo de Oficial 2º; un cargo de Oficial 3º; un cargo de Oficial 4º; 2 cargos de Oficial 5º; 2 cargos de Oficial 6º; y un Conserje de 4ª.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

José Francisco França. Aurora Alvarez de Silva Ledesma. Consejeros.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La creación de un Juzgado Letrado de Segundo Turno, para la ciudad de Maldonado, responde a una imperiosa necesidad que vive el referido departamento en los últimos años.

Efectivamente al aumento de los problemas judiciales como consecuencia de la situación social y eco-

nómica que vive el país; la especial condición de Capital del principal balneario y otros que le siguen en categoría; el incremento de los problemas judiciales planteados en los últimos años por turistas extranjeros (responsabilidad penal y civil); la importancia de los comercios e industrias de la zona, con problemas judiciales de zafra, pero cuyos efectos se extienden durante más de un año lo que hace innecesaria toda otra argumentación.

Su instalación cuenta con sólidas razones y antecedentes, que auspician importantes instituciones sociales del medio, pues la solución a que se aspira viene a resolver adecuadamente urgentes necesidades del servicio judicial.

El ingente aumento de tareas desborda la capacidad normal de trabajo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado, actualmente en funcionamiento.

El Juzgado Letrado de Maldonado en el año 1973 dictó 15.969 providencias 232 sentencias definitivas; se libraron 9.471 oficios, y se celebraron 5.818 audiencias, archivándose 8.082 expedientes, lo que frente a los Juzgados Letrados de lo Civil de Montevideo implica casi una duplicación de tareas.

Finalmente la actividad que se desarrolla en la ciudad de Maldonado donde un enorme porcentaje de asuntos responden a problemas que se plantean con turistas extranjeros (responsabilidad penal, responsabilidad civil), llevan sin ninguna duda al convencimiento de que la necesidad referida debe ser satisfecha.

La creación del Juzgado que se propicia se haría como Juzgado de Segundo Turno, con funcionarios propios y local independiente y de acuerdo a los recursos que se proporcionarían por Rentas Generales hasta su inclusión en el próximo presupuesto de la Suprema Corte de Justicia.

Aurora Alvarez de Silva Ledesma. José Francisco Franca. Consejeros".

El señor Consejero doctor Mario Arcos Pérez presenta un proyecto de ley por el que se crea la Academia Nacional de Medicina. (C/451/74).

—A la Comisión de Educación y Cultura.

(Texto del proyecto de ley y exposición de motivos presentado:)

"PROYECTO DE LEY"

Artículo 1º — (Objetivo). Créase la Academia Nacional de Medicina como institución honoraria de exclusivo carácter científico con los fines siguientes:

- A) Congregar a las personas más representativas de las ciencias médicas con el fin de intensificar y fomentar el estudio de las mismas, difundir los resultados de sus trabajos en el país y en el extranjero para prestigio de la cultura nacional.

- B) Asesorar a las instituciones públicas o privadas en todo lo referente a la medicina o ciencias afines.

- C) Fomentar por todos los medios a su alcance, el culto de la dignidad en el ejercicio profesional y en las actividades científicas de la medicina.

Art. 2º — (Formación). La Academia Nacional de Medicina estará formada por los siguientes miembros:

- A) Titulares o de número.
- B) Eméritos.
- C) Honorarios, nacionales o extranjeros.
- D) Correspondientes nacionales o extranjeros.

Los miembros titulares no podrán ser menos de veinte ni más de cuarenta.

La Academia Nacional de Ciencias Médicas comprenderá varias secciones cuyo número y organización se determinarán por el Estatuto y Reglamento de la

Art. 3º — (Constitución inicial). El núcleo inicial de Miembros Titulares será designado por una comisión integrada por un delegado de la Universidad, que la presidirá, con voto decisorio en caso de empate, un delegado de la Facultad de Medicina, un delegado de la Asociación Médica del Uruguay y un delegado de los profesores eméritos de la Facultad de Medicina, elegido por votación entre los propios profesores eméritos.

Los Miembros Titulares o de número designados de acuerdo con el artículo anterior, elegirán por mayoría de votos las personas que integrarán la Academia, pudiendo designar hasta completar el número máximo de Miembros Titulares.

Art. 4º — (Requisitos para ser elegido miembro). Las condiciones para ser elegido Miembro Titular o de número de la Academia, son las siguientes:

- 1º) Ciudadanía natural o legal en ejercicio.
- 2º) Personalidad moral reconocida públicamente.
- 3º) Actuación descolante en las Ciencias Médicas o en el ejercicio de la docencia en las disciplinas médicas.
- 4º) Ser autor de trabajos científicos publicados o presentados en sociedades médicas, o haber contribuido al progreso de la medicina en la dirección de institutos técnicos o en establecimientos consagrados a la asistencia de enfermos.

Las mismas condiciones se requerirán para ser designado Miembro Honorario o Correspondiente, nacional o extranjero.

Las condiciones para la elección de Miembro Emérito se establecerán en el Reglamento Interno de la Academia.

Art. 5º — (Designación de miembros). Las autoridades de la Academia se designarán de acuerdo con lo que establezca su Reglamento.

Art. 6º — (Estatuto y Reglamento). Una vez integradas las personas designadas de acuerdo al artículo 3º, éstas dictarán su Estatuto, cuya aprobación requerirá dos tercios de votos del total de sus componentes y dictarán su Reglamento aprobándose éste por simple mayoría.

Art. 7º — (Presupuesto). La Academia proyectará su presupuesto en la oportunidad correspondiente y lo remitirá al Poder Ejecutivo a sus efectos.

Art. 8º — (Sede). El Ministerio de Educación y Cultura proveerá en carácter provisorio a la Academia de sede adecuada para sus fines.

Art. 9º — Comuníquese, etc.

Montevideo, 15 de mayo de 1974.

Mario Arcos Pérez
Consejero

EXPOSICION DE MOTIVOS

Presentamos a consideración del Consejo de Estado el proyecto de ley en el cual se crea la Academia Nacional de Ciencias Médicas.

Antecedentes legislativos

Esta no es la primera vez que se formula tal creación. El 15 de agosto de 1958, Carpeta Nº 2129, los doctores José Bove Arteaga, Camilo Fabini, Francisco Goyen y Juan Collazo presentaron un proyecto de ley creando la Academia Nacional de Ciencias Médicas. Sancionada en el Senado; pasó a la Cámara de Representantes a la Comisión de Legislación y Administración, en donde se manda archivar el 31 de octubre de 1963, de acuerdo al artículo Nº 142 del Reglamento de la citada Cámara.

Objeto de la creación de la Academia Nacional de Medicina

Las academias en términos generales tienen por objeto congregar a las personas más conspicuas y representativas en el cultivo de las ciencias, las letras y las artes, con el fin de intensificar el estudio o el ejercicio de las mismas, promover el progreso de sus diferentes disciplinas; estimular la plenitud de las vocaciones intelectuales y difundir el fruto de sus trabajos en el país y en el extranjero prestigiando la cultura nacional.

Su actividad se proyecta desde un nivel jerárquicamente superior, por el prestigio y valía de quienes acceden a ella y por las esencias morales y éticas que deben ser propias de cada miembro.

Mientras muchos países del mundo tienen creada su Academia de Ciencias Médicas, el Uruguay, a pesar de los nobles esfuerzos señalados y de otros que ni siquiera alcanzaron nivel parlamentario, no ha visto lograda tan noble aspiración. Motivos de otro orden ajenos a la propia ciencia, buscaron entorpecer o anular su cristalización.

A este respecto es procedente recordar que las Facultades tienen como misión fundamental orientar su actividad docente hacia la formación de profesionales, sin descuidar un limitado trabajo de seminario o si se quiere de investigación, siempre fundamental para estimular la vocación del estudiante. Razones de disciplina pedagógica y cargas económicas muy onerosas en la investigación, aconseja esta limitación a nivel de Facultad.

Las asociaciones científicas médicas o quirúrgicas y las de sus diferentes especialidades están consagradas a la exposición y discusión de trabajos realizados por sus socios a todo nivel jerárquico. Allí junto a sus maestros, hace sus primeras exposiciones el joven profesional.

Los institutos de investigación, como el de Ciencias Biológicas y los que funcionan en la órbita del Ministerio de Salud Pública, la mayoría de ellos en las Cátedras de la Facultad de Medicina y con partidas presupuestales sumamente reducidas para lo que insume hoy la investigación médica, constituyen los únicos lugares donde realizar una modesta investigación. No obstante ello, el esfuerzo personal no sólo intelectual, sino también económico, ha permitido que muchos médicos pudieran realizar un fecundo trabajo con los precarios medios a su alcance.

La Academia Nacional de Ciencias Médicas, es el organismo que falta en nuestro país para reunir a las personas más preclaras de las ciencias médicas y que han realizado o realizan su labor en los diferentes organismos señalados. Desde este sitio y a un nivel científico superior, podrán discutir entre los de su misma jerarquía, sus trabajos de investigación difundiendo a nivel nacional e internacional para prestigio de nuestra cultura.

Pero por la índole de su alta jerarquía será un lugar no sólo de actividad científica, sino también de orientación moral y ética. La medicina como ciencia en los últimos años ha avanzado en proporciones increíbles, pero como profesión, no es posible decir lo mismo en todas las circunstancias. La crisis de moral y de ética ha sido la causa de este retroceso. No cabe duda que la técnica pura no es suficiente. El rigor de la emoción con el cual el médico debe sentir su deber y que es el cimiento de su vocación, le debe impedir desatender la asistencia, realizar un aborto criminal o inyectar una dosis mortal. Se han olvidado también en muchas de estas circunstancias, las virtudes más sublimes del hombre y de la familia con la cual el enfermo forma una unidad monolítica en los momentos de sufrimiento o desesperación. La Academia Nacional de Ciencias Médicas será entonces un centro no solamente científico sino también de auténtico humanismo que se proyectará a todo nivel en lo nacional y en lo in-

ternacional prestigiando la cultura nacional, no sólo en lo científico, sino también en lo ético y en lo moral.

Montevideo, 15 de mayo de 1974.

Mario Arcos Pérez
Consejero"

5. — ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES GENERALES

El Colegio de Abogados del Uruguay remite nota relacionada con los alcances del artículo 534 de la Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974. (C/40/73).

—A la Comisión de Constitución y Legislación.

6. — PROYECTOS PRESENTADOS

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA

El señor Consejero ingeniero Alfredo Cardoso Arrarte presenta un proyecto de ley por el que se declara que la Ley Nº 14.194, de 14 de mayo de 1974, sobre suspensión de lanzamientos rurales, entrará en vigencia luego de publicada en dos diarios de la Capital. (C/452/74).

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Declárase que la Ley Nº 14.194, de 14 de mayo de 1974, entrará en vigencia luego de publicada en dos diarios de la Capital.

Art. 2º — La presente ley también entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en dos diarios de la Capital.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Alfredo Cardoso Arrarte
Consejero"

7. — ESCUDO NACIONAL

El señor Isaac Yohai Toros comunica que ha resuelto donar al Consejo de Estado un antiguo cuadro del Escudo Nacional, realizado por el artista Félix Corbi para la ciudad de Durazno en el año 1880 y obsequiado por sus habitantes a su entonces Jefe Político, Coronel Nicomedes Castro. (Carpeta 452/74).

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — La Mesa propone que se acepte, sin necesidad del pasaje a Comisión, esta generosa donación y se la faculte para convenir con el donante —hecha la comunicación de agradecimiento de estilo— las condiciones para recibir el Escudo.

(Apoyados).

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Quiero destacar la actitud plausible de este compatriota porque, según mis informaciones, él pudo conseguir esa obra en una subasta pública realizada recientemente en nuestra capital, luego de una puja muy interesada en la que según creo tuvo que llegar a cerca de los cuatro millones de pesos. Esa obra de arte, según dijo él en ese mismo momento, tendría el destino de ser donada al Consejo de Estado. Creo que ésta es una actitud que merece ser destacada.

Además, señor Presidente, estoy de acuerdo con la sugerencia de la Mesa de no pasar esto a Comisión y entrar directamente en las tratativas con el donante, a fin de ver la manera de hacer efectiva la transferencia de la obra de arte.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se trata del señor Isaac Yohai Toros. Si el Consejo lo estima conveniente, podríamos leer la nota en que ofrece por intermedio de Joyería Rossello, la donación.

Léase.

(Se lee:)

"Señor Presidente del Consejo de Estado del Uruguay, doctor Aparicio Méndez. Presente. Muy señor nuestro: nos es grato dirigimos a usted para poner en su conocimiento que en el remate organizado por Joyería Rossello y Miguel Hugo Wolf, fue subastado un antiguo cuadro del Escudo Nacional, bordado a mano con hilos dorados, plateados y perlas, realizado por el artista Félix Corbi para la ciudad de Durazno en el año 1880 y obsequiado por sus habitantes a su entonces Jefe Político, Coronel Don Nicomedes Castro. Esta reliquia histórica fue adquirida en la suma de \$ 4.000.000 (cuatro millones de pesos), por el señor Isaac Yohai Toros en pública subasta, e inmediatamente de ser aceptada su oferta manifestó que lo donaba al Honorable Consejo de Estado para que fuese colocada en el Salón de reuniones, recalando que dicha pieza era merecedora de enriquecer el patrimonio histórico nacional. Al poner en nuestro conocimiento este noble y espontáneo gesto le pedimos que ponga en conocimiento de los demás integrantes del Consejo de Estado este ofrecimiento y rogamos a usted se sirva aconsejar su aceptación. Por el donante señor Isaac Yohai Toros saludamos a usted con nuestra mayor consideración y nuestro agradecimiento. Por Joyería Rossello S. A., Osvaldo Barreiro."

8. — Sra. DELIA MURO DE RICALDONI

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En la sesión del 30 de abril próximo pasado, en el asunto relacionado con la ejecución de sentencia anulatoria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el expediente de la Sra. Doña Delia Muró de Ricaldoni, el Consejo

de Estado resolvió que Secretaría, en coordinación con la Dirección de los Servicios Administrativos, hiciera los estudios correspondientes y que luego el asunto pasara a la Comisión de Economía y Finanzas.

La Mesa propone que se reconsidere ese trámite, recomendando a Secretaría todos los estudios técnicos y, una vez que conozcamos los resultados de ese trabajo y estemos en condiciones de resolver, así lo hagamos.

Si no se observa, se votará.

(Se vota:)

—24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9. — CENTRAL HIDROELECTRICA DEL PALMAR

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se entra a la media hora previa. Tiene la palabra el señor Consejero Coppetti.

SEÑOR COPPETTI. — Señor Presidente: de acuerdo a lo manifestado en la última sesión del Consejo, reitero la importancia —que lo hace merecedor de ser incluido en la orden del día de hoy— del proyecto de ley estudiado por la Comisión de Obras Públicas integrada, sobre la Central Hidroeléctrica del Palmar.

Mi actitud obedece, fundamentalmente, al hecho de encontrarse agotada la disponibilidad de la partida que fue originariamente asignada, de acuerdo a la Ley número 14.147 de este Consejo de Estado, con el objeto de que se prosiguiera a ritmo intenso esta obra. El hecho de no contar con esa partida a la brevedad posible, provocaría una distorsión en el cronograma que tiene trazoado COMIPAL, que tiene prevista para 1978 la puesta en marcha de la primer turbina.

Estas son las razones por las cuales solicito, con carácter de urgente, que este asunto sea incluido en primer término de la orden del día de la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Es un asunto de orden y corresponde votarlo.

(Se vota:)

—23 en 24: Afirmativa.

Se considerará oportunamente.

10. — COLEGIO DE ABOGADOS DEL URUGUAY

Tiene la palabra el señor Consejero Pons.

SEÑOR PONS. — Señor Presidente: al escuchar, hace un momento, la lectura de los asuntos entrados, advertí que ha ingresado una nota del Colegio de Abogados relacionada con el alcance del artículo 534 de la Rendición de Cuentas. Ignoraba la presentación de esa nota...

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Hace apenas 15 ó 20 minutos que llegó.

SEÑOR PONS. — Gracias, señor Presidente. Me refería a que, precisamente, yo quería hacer uso de la palabra en esta media hora previa, en el lapso que me podía corresponder, a los efectos de centrar un poquito el tema.

No sé cuál será el texto de la nota, pero si sé cual es la inquietud que anima a todos los profesionales, a raíz de la interpretación del aludido artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Si el señor Consejero no tiene inconveniente, se podría postergar su muy ilustrativa exposición para el momento de considerar el informe de la Comisión porque, de lo contrario, sería entrar al problema de fondo. La referida nota ya ha sido cursada a la Comisión de Constitución y Legislación. Si el señor Consejero desea insistir en su planteamiento...

SEÑOR PONS. — Justamente, señor Presidente, en este instante yo estaba desarrollando esa exposición, porque deseaba concluir en lo que acaba de manifestar el señor Presidente. Dado que yo había solicitado el espacio que me podía corresponder para hacer uso de la palabra a fin de referirme a un tema que, en este momento, acaba de ingresar al conocimiento del Cuerpo, a través de esa nota del Colegio de Abogados, debo expresar que mi exposición la postergaré hasta el momento oportuno, luego que la nota pase a la Comisión, como ha dicho el señor Presidente.

Muchas gracias.

11. — AUTORIZACION A LOS PERIODISTAS DE DISTINTOS MEDIOS DE INFORMACION, PARA OIR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ESTADO

SEÑOR PRADERI. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — Señor Presidente: voy a hablar, nuevamente, unos pocos minutos, para referirme a un tema enojoso, —espero terminar con él— que los señores Consejeros ya conocen.

En la sesión del día 7 de este mes, hice un planteo cuestionando la pertinencia de ciertas publicaciones al que, lamentablemente, algunos integrantes del Consejo le atribuyeron un carácter personal, aunque esa no fue la intención ni el objeto de dicho planteamiento.

La circunstancia de que dichas publicaciones estuvieran directamente relacionadas con un Consejero no modificaba mi punto de vista sino que hacía enojoso mi planteo, pero lo hubiera hecho en cualquier condición, por entender que había una razón de principios.

La moción que formulé de que el tema pasara a la Comisión de Legislación fue desechada por el Consejo; pero, felizmente, aquellos que justificaron su voto negativo, se expresaron sin tocar el tema de fondo, que queda limitado a un aspecto personal, ya que ha sido la posición de los que votaron negativamente. Pero en ese mismo planteo había comprometido mi intención de solicitar la revisión del sistema por el cual el Consejo difunde sus noticias internas.

La prueba de que mi planteamiento no tenía carácter personal son las reiteradas oportunidades en que me he preocupado de este tema, incluso desde el momento en que habíamos empezado la redacción del Reglamento. Pero coherente con esa proposición mía, creo que el panorama se aclara y la intervención anterior que yo no quise transformar en polémica, intencionalmente, me abre las puertas para profundizar o insistir en el planteo original que había hecho en oportunidades anteriores.

No hay duda de que si el Consejo acepta o entiende que no puede entrar a opinar acerca de un tipo de publicación parcializada, que es posible sólo por las circunstancias particulares de determinada prensa, se está rompiendo el principio de equilibrio entre las formas mediante las cuales llegan las informaciones a los restantes medios de información. Queda probado, por lo tanto —y los meses de experiencia lo avalan— que todos los medios de información reciben en forma general las actas del Consejo o la información interna del Consejo fuera de tiempo y en mala forma, porque la reciben cuando ya han transcurrido muchos días. Y, efectivamente, sin que esto pueda interpretarse como un agravio, está confirmando que este Consejo está integrado por 25 Consejeros y un periodista. Esto no es un agravio; hay una doble calidad en uno de los Consejeros que no puede desprenderse de una de ellas, que es previa a su integración a este Cuerpo. Quizá yo opinara que sería criticable que un Consejero hiciera ese mismo proceso a posteriori en otro medio de prensa. De manera que este planteo no significa revisión del Reglamento. El Reglamento adoptado por el Consejo dice simplemente que las sesiones del Consejo serán sin barra y sin prensa, pero no determina, específicamente, el hecho de que los periodistas de los distintos medios de información no puedan tener acceso al Palacio. De manera que, concretamente, para que se discuta en esta sesión o en alguna otra posterior, yo propongo que se autorice a representantes correctamente acreditados, de los distintos medios de información, en las condiciones que determine la Mesa, para asistir, durante las sesiones del Consejo, a alguna sala, de manera tal que por medio de parlantes puedan escuchar el desarrollo de las sesiones. De esta manera, todos los medios de información estarían en igualdad de condiciones, aunque esta igualdad es relativa, porque este régimen yo no lo haría extensivo a las distintas comisiones del Consejo.

Creo que es una obligación del Cuerpo modificar el sistema para poder dar una información directa, evitando así que los periodistas tengan que estar persiguiendo a los Consejeros y extrayendo informaciones parcializadas.

Concretamente, mociono, señor Presidente, para que el Cuerpo resuelva el acceso de determinados periodistas, que la Mesa designará, para asistir a dichas sesiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Si el señor Consejero se digna presentar por escrito su moción, la Mesa la insertará en la orden del día correspondiente.

SEÑOR VARELA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

12. — SEÑOR CARLOS SABAT ERCASTY

SEÑOR VARELA. — Señor Presidente: es de pública notoriedad que en el día de mañana, en acto público, el escritor, pensador y poeta, Carlos Sabat Ercasty, entregará a la Biblioteca Nacional su valiosísima biblioteca, incluyendo sus obras personales y el archivo de su correspondencia.

La Comisión de Educación y Cultura ha visto con satisfacción —en nombre de ella hablo— el gesto del escritor Carlos Sabat Ercasty, no sólo por lo que significa entregar a una institución del Estado, a un instituto público como es la Biblioteca Nacional, un bagaje tan extraordinario como es el de referencia, sino también porque esto señala a la consideración pública el gesto del hombre que asegura su destino.

Me imagino, en este instante, la enorme alegría espiritual que tendrá Sabat Ercasty por el acto que realiza, ya que sus libros, que son fragmentos de su alma, y los ajenos, que son también fragmentos del alma de sus respectivos autores, tienen un destino prefijado, el de servir a la colectividad y estar al alcance libre del pueblo.

La Comisión de Educación y Cultura quería, por mi intermedio, dejar expresado, en el seno de este Cuerpo la trascendencia social del acto que se realizará el día de mañana y su esperanza de que eso sirva de ejemplo para sucesivas donaciones.

(Apoyados).

—Por ahora, nada más, señor Presidente.

13. — COMERCIALIZACION DE LANA, CUEROS LANARES Y CARNE

SEÑOR RUBIO. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RUBIO. — Señor Presidente: no habiéndome sido posible hacer algunas manifestaciones referentes al planteo que desarrolló en la sesión de ayer el señor Consejero Gaggero con respecto a la marcha atrás, diríamos así, que ha dado el Poder Ejecutivo en cuanto a la exportación de lana, quiero agregar algunas palabras a las expresadas por dicho señor Consejero, entendiendo que los que hicimos las primeras manifestaciones protestando contra el decreto que se había dictado prohibiendo esa exportación teníamos razón, pues nos la han dado.

Es cierto que se nos ha dado la razón, pero quiero puntualizar que es lamentable que haya transcurrido tanto tiempo, porque desde entonces a la fecha, los acontecimientos ocurridos en el mercado internacional han hecho que los valores del textil sean muy inferiores al momento en que se dictó —el 22 de diciembre— el decreto prohibiendo la exportación de lana sucia.

Con estas palabras quiero significar que a veces los que no estamos en el asunto, también tenemos razón.

Felicitemos, como muy bien ha dicho el señor Consejero Gaggero, al Poder Ejecutivo, por haber dado marcha atrás en su iniciativa, queriendo rectificarla, aunque entendemos que un poco tardíamente.

Aprovechando la circunstancia de que estoy en uso de la palabra, quiero ampliar un poco mi exposición para destacar que se omitió usar el mismo procedimiento con otro rubro que también es de mucha importancia y que debe ser tenido en cuenta, y al cual nos referimos cuando estuvo en Sala el ex-Ministro de Economía y Finanzas, Contador Pazos: los cueros que produce la República. La exportación de los mismos ha quedado también totalmente prohibida.

Reiteramos nuestro deseo de que estas expresiones pasen a quien correspondan, advirtiéndole que hay dos o tres categorías de cueros laneros que aquí no se industrializan y, por consecuencia, se están malvendiendo, lo que significa un verdadero desperdicio de materia prima.

Creo que es una cuestión de conciencia denunciar estos hechos, porque entendemos que no estamos en condiciones de desperdiciar nada.

Nos gustaría que en esa revisión de decretos se incluyera también el que tiene que ver con la materia prima citada: cueros laneros.

Ahora, debo involucrar en este asunto que tiene relación también con la producción agropecuaria, el problema que nos está ocurriendo con la carne.

Todos vemos que las misiones enviadas por el Poder Ejecutivo, están teniendo grandes dificultades para la comercialización de la carne. No sabemos en qué forma se manejan comercialmente las mismas. Recordamos épocas difíciles ya vividas, —es una historia bastante conocida por el país— en que también hemos tenido dificultades para la comercialización de este rubro. Viene a mi memoria la época de los años 60 o 62, en que se nos presentó una situación parecida a la actual. Sin embargo, todo fue pasajero y se logró a través del Gobierno de aquella época, que se designara en cada país que pudiera tener interés en nuestras carnes, un vendedor comisionista. No debemos tener temor a los vendedores comisionistas cuando nuestras autoridades no han tenido eficacia y no han logrado los resultados que se han propuesto.

Entendemos que los vendedores a comisión...

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Lamentablemente, señor Consejero, ha transcurrido su tiempo.

El Consejo decidirá si se le prorroga el término al orador.

SEÑOR VARELA. — Hago moción en ese sentido.

(Apoyados.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar.

(Se vota.)

—22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor Consejero Rubio.

SEÑOR RUBIO. — Agradezco al Consejo la deferencia que ha tenido para con mi persona.

Entiendo que comercialmente no se le debe tener ningún temor a lo que se puede llamar un comisionista destacado en cualquier país que puede ser consumidor de nuestras carnes. Al fin y al cabo nuestros precios son sumamente bajos comparados con lo que vale la materia prima en el mercado internacional. Por lo tanto, esos precios y esta materia prima dan margen suficiente como para poder otorgar comisiones a terceros. Como el volumen es importante, las comisiones son insignificantes.

De todas maneras, estamos obligados a colocar nuestra materia prima, por muchos aspectos que los señores Consejeros comprenderán muy bien.

Si bien no puedo, desde esta banca, hacer un planteamiento en ese sentido; me parece que puede resultar interesante una especie de sugerencia para que se piense que dar una comisión a un tercer vendedor destacado en los países consumidores, resultaría una vía comercial mucho más importante que estar enviando delegaciones casi permanentes, que no conocen el ambiente y las necesidades como esos comisionistas que están radicados en esos países.

Por otra parte, esto no es nuevo, se ha hecho en otras épocas y ha dado muy buenos resultados.

Para terminar con este planteamiento, a título personal quiero agregar que por las mismas razones y con el mismo espíritu que nuestros gobernantes han entendido que se debía prohibir la exportación de lana al natural, no estaría de acuerdo en que se pensara, ni siquiera por principio, ni por razones de orden material, en exportar ganado en pie. Esa sería la última medida a tomar y solamente se justificaría en un momento de desesperación. Esta medida traería implícitas otras cosas: Por ejemplo, en primer lugar, habría que hablar de nuevos valores de la hacienda, porque va todo lo que no se le paga al productor. Quiere decir que con el sistema de comercialización que tenemos, que es a rendimiento y en segunda balanza, no podemos regalar a ningún país comprador la explotación y los gastos de ella.

No sé si me explico bien pero ese es el sentido de mi pensamiento. Entiendo que para nosotros sería un

negocio ruinoso. Las mismas razones de principios que llevaron a nuestras autoridades nacionales a impedir la exportación de lana al natural, deben pesar en este caso, porque se trata de una materia prima que tampoco puede exportarse sin que deje en nuestras manos el resultado que proviene del trabajo de industrialización.

Pienso que todavía no estamos al borde del desastre, ya que tenemos conocimiento de que aún hay capacidad disponibles en nuestras cámaras frigoríficas y creo que a corto plazo vamos a tener la suerte de hacer alguna colocación.

Es lo que quería manifestar, señor Presidente, con la intención de dejar constancia de mi intervención acompañando el planteamiento formulado por el señor Consejero Gaggero.

Por último, formulo moción para que mis palabras pasen al Ministerio de Ganadería y Agricultura.

(Apoyados.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

—21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14. — VILLA "25 DE MAYO" DEL DEPARTAMENTO DE FLORIDA

Tengo que dar cuenta de la grata visita recibida en el día de ayer, luego de haber concurrido al despacho del señor Consejero Rubio, de la Comisión Organizadora de las Fiestas conmemorativas del centenario de la Villa "25 de Mayo" del Departamento de Florida.

Estos ciudadanos habían solicitado al Consejo, y el asunto pasó oportunamente a la Comisión de Constitución y Legislación, que con tan grato motivo se declare feriados los días del 16 y 17 de mayo corriente, a efectos de que las personas nacidas en esa localidad puedan concurrir a las fiestas.

Yo me creí en el deber de explicarles a esos distinguidos ciudadanos que la Comisión de Constitución y Legislación no había dispuesto de tiempo para pronunciarse al respecto porque había estado embargada por el estudio del proyecto de Rendición de Cuentas, y luego, por el del proyecto de ley de arrendamientos. Pero, agregué, a título personal, que una iniciativa de esa índole, aún cuando quedara reducida a los nacidos en la localidad, no iba a tener ambiente, atento a que nos hallábamos abocados a la tarea, no fácil, por cierto, de limitar al máximo las festividades. En momentos en que estamos estudiando este punto, decretar eso, aún a nivel local, parecía caer en una contradicción.

Comprendieron el sentido de mis palabras y patrióticamente aceptaron el temperamento, entendiendo que había razón para adoptar una posición de esa naturaleza, sacrificando así su pedido.

Además, formularon algunas peticiones respecto a asuntos que no son de competencia del Consejo de Estado. Yo entendí que personas que vienen de tan lejos en busca de recursos y ayuda para su localidad, en momentos tan gratos, no podían irse con una simple explicación y, por lo tanto, me he comprometido a hacer gestiones ante las autoridades para obtener algunos de los servicios que reclaman, como por ejemplo, el de policlínica y fondos para ciertas obras imprescindibles.

Por esas razones, me permito formular dos mociones. La primera, que se comunique a la Comisión organizadora de estos festejos, la solidaridad del sentimiento del Consejo de Estado en la fecha que conmemora esa prestigiosa y progresista Villa de 25 de Mayo. La segunda, que se dirija comunicación al Poder Ejecutivo expresándole que, si entiende justo y conveniente, será oportuno incluir en la próxima Rendición de Cuentas una partida por una sola vez, de 20 millones de pesos, para la Intendencia Municipal de Florida, con destino particular a las obras locales, particularmente de vialidad, en atención a la conmemoración de su centenario.

SEÑOR VARELA. — Apoyado.

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — ¿Qué alcance tiene esa característica de mensaje que se menciona? Entendía que se pueden pasar palabras de la Presidencia con el apoyo de todo el Cuerpo. Con respecto a la palabra mensaje, alguna vez me he opuesto, aunque no me animo a decir nada frente a la autoridad que en este momento nos preside; pero me gustaría que se aclarara el concepto, porque pienso que no conviene hacer uso de vías que no estén estrictamente establecidas en la Constitución. Un Mensaje del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, no sé cómo puede interpretarse.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En realidad, no hay definición de la palabra mensaje ni tenemos terminología rigurosa en el orden de franqueo de las relaciones entre los dos Poderes. En la práctica, el Mensaje es la comunicación de contenido más o menos trascendente. Por ejemplo, del Poder Ejecutivo al Legislativo, proyectos de ley, Rendiciones de Cuentas y, del Poder Legislativo al Ejecutivo, los proyectos de ley que se remiten aprobados por el Cuerpo.

Se expresa por Secretaría que se puede emplear la expresión: minuta de comunicación. A lo formal, no le doy mayor trascendencia, porque no tenemos limitación, pero si se entiende que hay que establecer la distinción entre los actos trascendentes y los de simple comunicación entre los dos Poderes, no me opongo a que se emplee la expresión minuta de comunicación en lugar de Mensaje.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — Parlamentariamente, lo que corresponde más es la minuta de comunicación en lugar de Mensaje.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — El Consejo decidirá. ¿Se envía un Mensaje o una minuta de comunicación?

SEÑOR ESPINOLA. — Minuta de comunicación.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar.

(Se vota:)

—23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dejo aclarado, aunque parezca innecesario, que esa minuta de comunicación expresa un deseo del Cuerpo. No es una resolución que comprometa al Poder Legislativo.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — Estoy de acuerdo en el planteamiento, pero, ¿no hay una autoridad local autónoma en 25 de Mayo, en este momento?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — No, señor Consejero, que yo sepa.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — Si existiera, me siento inclinado a que se haga directamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — No la conozco, por eso, propuse que los fondos sean asignados a la Intendencia Municipal. Por otra parte, el hecho de que hayan concurrido miembros de la Comisión de Festejos, demuestra que no hay una autoridad local.

15. — Sr. ALFREDO J. PUIG SPANGENBERG

SEÑOR VARELA. — ¿Me permite, señor Presidente, para una moción de orden?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR VARELA. — Dado el tiempo transcurrido de la remisión al Poder Legislativo y habiendo mediado aprobación de una Cámara y estando el asunto despachado por la Comisión respectiva de este Cuerpo, hago moción para que se declare grave y urgente y lo tratemos en la sesión de hoy, el proyecto por el cual el Estado costea los gastos del sepelio de quien fuera miembro del Poder Legislativo, don Alfredo Puig Spangenberg.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

—23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Tanto en este caso como en el anterior, que también votamos como grave y urgente —financiamiento del Palmar— he votado afirmativamente, porque esos dos proyectos han sido repartidos, teniéndolos en nuestras casas desde el día de ayer. Por lo tanto, conocemos su contenido, aunque no integran la orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se incluirá este asunto en segundo término de la orden del día.

16. — INTEGRACION DE COMISION

SEÑOR PRADERI. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — Solicito que se disponga la integración de la Comisión de Industria y Comercio con Canadería y Agricultura, para estudiar una iniciativa planteada en el seno de la Comisión primeramente mencionada por el señor Consejero Spangenberg, relacionada con la importación de crudo de azúcar y un análisis general sobre el problema de la industria de sacarígenos en el Uruguay.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

—23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17. — CENTRAL HIDROELECTRICA DEL PALMAR

Se pasa a considerar el primer punto de la orden del día: obras de infraestructura de la Central Hidroeléctrica del Palmar.

Léase.

(Se lee:)

(Rep. Nº 394/1974)

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Industria y Comercio

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 2 de abril de 1974.

Señor Presidente del Consejo de Estado.

Dr. Martín R. Echegoyen

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo para someter a su consideración el adjunto proyecto de ley relativo a la realización de las obras de infraestructura necesarias para la ejecución de las Obras de la Central Hidroeléctrica del Palmar.

La Comisión Mixta del Palmar, elevó oportunamente al Poder Ejecutivo el proyecto de inversiones que habrá de regular tales obras y del cual se agrega copia adjunta, el que, a precios de enero de 1974, asciende a la suma de \$ 11.000.000.000 (once mil millones de pesos). Atento que por Ley Nº 14.147, de 31 de enero de 1974, fue aprobada una partida de pesos 1.000.000.000 (un mil millones de pesos) con idénticos fines, la financiación a otorgarse sería del orden de \$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos).

Pero como de acuerdo a las previsiones del cronograma de inversiones, las obras correspondientes a este proyecto insumirán, en los ejercicios 1974-1975, a precios actuales la suma de \$ 14.000.000.000 (catorce mil millones de pesos) se entiende ajustado propiciar el crédito presupuestal por un monto de \$ 15.000.000.000 (quince mil millones de pesos), a efectos de permitir a la Comisión Mixta del Palmar el desarrollo de sus cometidos específicos sin dificultades financieras.

Señala la Comisión Mixta del Palmar la necesidad de contar con los créditos de financiamiento —sin que ello signifique disponibilidad inmediata— dado que en el correr del presente Ejercicio se habrán de iniciar y se van a licitar y adjudicar prácticamente todas las obras de infraestructura, comenzándose asimismo —una vez aprobada la Ley de Expropiaciones a estudio de ese Consejo de Estado— con la designación y pago de los predios que habrán de ser expropiados o la indemnización para los que estarán sujetos a servidumbre.

El Poder Ejecutivo comparte la posición de la Comisión Mixta del Palmar (Comipal) y avala a su vez la prioridad en el tratamiento a darse a este proyecto, toda vez que ello redunda en una concreción más inmediata de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Palmar.

Saludo a ese Alto Cuerpo, con la mayor consideración.

JUAN MARIA BORDABERRY. — José E. Etcheverry Stirling. Moisés Cohen.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Apruébase el Proyecto de Inversiones relativo a las obras de infraestructura de la Central Hidroeléctrica del Palmar.

Art. 2º — A los efectos de la realización de la totalidad de las obras de infraestructura necesarias para la iniciación de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Palmar (artículo 3º del Decreto Nº 335/73, de 15 de mayo de 1973) asignase a la Comisión Mixta del Palmar (Comipal) una partida de hasta \$ 15.000.000.000 (quince mil millones de pesos) para atender los gastos que demanden dichas obras.

Art. 3º — La erogación dispuesta precedentemente se atenderá con cargo a los recursos del Fondo Energético Nacional o en su defecto con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo.

Subsidiariamente el Ministerio de Economía y Finanzas queda facultado para conceder adelantos con cargo a la cuenta "Inversiones Estatales del Ministerio de Economía y Finanzas".

Art. 4º — Los fondos a que se refiere el artículo 1º serán administrados por Comipal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 14.147, de 31 de enero de 1974.

Art. 5 — Facúltase al Poder Ejecutivo a elevar la financiación prevista en el artículo 1º, en función a los aumentos que se produzcan en los costos de los insumos, a solicitud fundada de la Comisión Mixta del Palmar.

Art. 6º — La inversión de los fondos se realizará de conformidad a lo estipulado en el artículo 4º del Decreto Nº 335/73 y su destino específico está dado por la redacción del artículo 3º del antecitado Decreto y el artículo 1º de la presente ley.

Art. 7º — Dispónese que la Comisión Mixta del Palmar (Comipal) tenga atribuciones de ordenador primario de gastos e inversiones, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias respectivas.

Art. 8º — Comuníquese, etc.

Montevideo, 2 de abril de 1974.

JUAN MARIA BORDABERRY. — José E. Etcheverry Stirling. Moisés Cohen.

(Anexo 1)

CONSEJO DE ESTADO

Comisión de Obras Públicas, integrada

INFORME

Al Consejo de Estado:

La Comisión de Obras Públicas, integrada de acuerdo a lo resuelto en la sesión del Consejo de Estado del día 7 de los corrientes, con un Miembro de la de Constitución y Legislación y uno de la de Economía y Finanzas, ha estudiado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo referente a la realización de las obras de infraestructura de la Central Hidroeléctrica del Palmar.

Con el objeto de documentarse más ampliamente en relación con el proyecto de inversiones y considerar algunas modificaciones en la redacción del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, la Comisión recibió en su seno al Presidente de la Comisión Mixta del Palmar, General Mario O. Aguerrondo y sus asesores quienes aportaron un memorándum explicativo que incluye la descripción resumida del proyecto, estado de las obras al 15 de marzo de 1974 y cronograma de las obras y de las inversiones.

De este último aspecto mencionado merece ser señalado especialmente el cronograma del proyecto de inversiones totales en estudios y obras de infraestructura, motivo principal de este proyecto de ley, y que se transcribe a continuación:

Proyecto de inversiones totales en estudios
y obras de infraestructura

Precios: enero 1974

Concepto	Importes moneda nacional
	\$
Consultoría Revisión Proyecto PALMAR - SOFRELEX de Francia	184:500.000
Planos y cálculo de Metrajes SOFRELEX	15:000.000
Cateos, MOP y UTE	25:000.000
Sostén Red Geodésica SGM	22:000.000
Construcción Población Palmar	800:000.000
Construcción y Alhajamiento Comedor	130:000.000
Energía eléctrica y línea telefónica	51:000.000
Saneamiento y Agua Potable	800:000.000
Puentes Ruta 3	3.500:000.000
Expropiaciones, indemnizaciones y mensuras	5.000:000.000
Impresión Pliego de Condiciones	30:000.000
Estudios, asesoramientos e imprevistos	442:500.000
	11.000:000.000

De acuerdo a las previsiones del cronograma de gastos se estima que el proyecto de inversiones totales de estudios y obras de infraestructura insumirá en los Ejercicios 1974-1975 un monto de \$ 15.000:000.000, crédito presupuestal que permitirá que la Comisión Mixta del Palmar cumpla con sus cometidos específicos sin dificultades financieras.

La autorización de esta partida no implica una utilización inmediata sino solamente la dotación de recursos para financiar el importe de las obras y expropiaciones, que luego se irán haciendo efectivos a través del tiempo de realización.

Se ha previsto la financiación con recursos del Fondo Energético Nacional, ya que es de su esencia, según lo establece el artículo 9º de la Ley Nº 13.958, de 10 de mayo de 1971, o en su defecto con cargo al Fondo de Desarrollo Económico o a la Cuenta "Inversiones Estatales del Ministerio de Economía y Finanzas", siguiendo la línea definida por el artículo 2º de la Ley Nº 14.147, de 31 de enero de 1974.

El presente proyecto de ley complementa la norma anterior a los efectos de que sea definitiva. Para ello se ha tenido en cuenta que el proyecto actual de inversiones está calculado a precios de enero de 1974 y que las modificaciones sucesivas que pudieran existir por variaciones de precios, puedan ser contempladas por el Poder Ejecutivo sin necesidad de arbitrar una nueva ley, según se establece en el artículo 5º del proyecto de ley que se acompaña.

Atento al volumen de los montos de las obras a realizar se ha considerado del caso dejar establecido el carácter de ordenador primario que debe tener la Comisión Mixta del Palmar, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto Nº 104, de 6 de febrero de 1968.

Finalmente, es de destacar la urgencia existente para la aprobación del proyecto, en razón de encontrarse agotada la disponibilidad de la partida inicial de \$ 1.000:000.000 fijada por la Ley Nº 14.147, de 31 de enero de 1974, y por la imperiosa necesidad de proseguir el ritmo intenso para la ejecución de las obras.

Por los fundamentos expuestos, la Comisión aconseja al Cuerpo dé su aprobación al proyecto de ley que se acompaña.

Sala de la Comisión, 14 de mayo de 1974.

Mario Jorge Coppetti, Miembro Informante. Raúl H. Clérc. Mario Gaggero. Rodolfo Saccone. José Antonio Varela. Juan Carlos Pons. Eduardo Praderi. Consejeros.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Apruébase el proyecto de inversiones relativo a las obras de infraestructura de la Central Hidroeléctrica del Palmar.

Art. 2º — A los efectos de la realización de la totalidad de las obras de infraestructura necesarias para la iniciación de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Palmar (artículo 3º del Decreto Nº 335, de 15 de mayo de 1973) asignase a la Comisión Mixta del Palmar (COMIPAL) una partida de hasta pesos 15.000:000.000 (quince mil millones de pesos) para atender la financiación del importe que demande dichas obras.

Art. 3º — La erogación dispuesta precedentemente se atenderá con cargo a los recursos del Fondo Energético Nacional (artículo 9º de la Ley Nº 13.958, de 10 de mayo de 1971) o en su defecto, con cargo al Fondo de Desarrollo Económico.

Subsidiariamente el Ministerio de Economía y Finanzas queda facultado para conceder adelantos con cargo a la Cuenta "Inversiones Estatales del Ministerio de Economía y Finanzas".

Art. 4º — Los fondos a que se refiere el artículo 2º, serán administrados por COMIPAL, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 14.147, de 31 de enero de 1974.

Art. 5º — Facúltase al Poder Ejecutivo a elevar la financiación prevista en el artículo 2º, a solicitud fundada de COMIPAL, en función de los aumentos que se produzcan en los costos de los insumos, dando cuenta al Poder Legislativo.

Art. 6º — La inversión de los fondos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº 335/73, en la redacción dada por el Decreto Nº 580/73, de 19 de julio de 1973.

Art. 7º — Confiérese a COMIPAL atribuciones de ordenador primario de gastos e inversiones, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias respectivas (artículo 23 del Decreto Nº 104/68, de 6 de febrero de 1968).

Art. 8º — Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 14 de mayo de 1974.

Mario Jorge Coppetti, Miembro Informante. Raúl H. Clerc. Mario Gaggero. Rodolfo Saccone. José Antonio Varela. Juan Carlos Pons. Eduardo Praderi. Consejeros".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En discusión general.

SEÑOR COPPETTI. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR COPPETTI. — Señor Presidente: es solamente para informar sobre algunos detalles de este proyecto de ley. Voy a ser muy breve, porque las consideraciones y los elementos de juicio que tuvo la Comisión para aprobar este proyecto de ley, están indicadas en el informe que figura en las páginas 1, 2, 3 y 4.

En la página 2 se transcribe un proyecto de inversiones totales de estudios y obras de infraestructura por un monto de 11 mil millones de pesos, en el cual se incluyen, fundamentalmente, los rubros de expropiaciones que es del orden de los 5 mil millones de pesos; la construcción de los puentes sobre la Ruta 3, por un monto de 3.500 millones de pesos y la construcción de la población

de Palmar y saneamiento y agua potable. Estos rubros, prácticamente, componen el total de esta suma.

Advierto, que estos precios son a enero de 1974.

De acuerdo a las previsiones del programa de gastos que hemos tenido a la vista, remitido por COMIPAL a nuestra Comisión, se estima que el proyecto de inversiones totales de infraestructura insumirá, en los ejercicios 1974-1975, un monto de 15 mil millones de pesos. Esto es, solamente, para los rubros que se detallan en la página dos.

COMIPAL solicita este crédito de 15 mil millones de pesos con carácter de urgencia, por encontrarse agotadas las disponibilidades de la partida de mil millones de pesos acordada por este Consejo de Estado, de acuerdo a la Ley Nº 14.147.

Por estas razones es que la Comisión entendió que existía razón a COMIPAL en solicitar la elevación de ese monto de 11 mil a 15 mil millones de pesos, a los efectos de estudiar los precios actualizados a los ejercicios 1974-1975.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

—22 en 22: Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

—20 en 22: Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se votará.

(Se vota:)

—22 en 22: Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se votará.

(Se vota:)

—22 en 22: Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se votará.

(Se vota:)

—22 en 22: Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se votará.

(Se vota:)

—22 en 22: Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

SEÑOR REYES. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR REYES. — Señor Presidente: me voy a permitir observar el artículo 5º. Lo hago por razones de principio y no en cuanto al fondo de la ley.

Advierto a los señores Consejeros que se abre aquí una cuenta en el tiempo para un rubro de gastos que asume originalmente la cantidad de 15 mil millones de pesos.

Propongo, sustitutivamente, el siguiente artículo que me permito pasar a la Mesa, a los efectos de darle lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Léase el artículo sustitutivo propuesto.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Mata). — "Artículo 5º. Sustitutivo. — La financiación prevista en el artículo 2º, será aumentada en función de los incrementos que se produzcan en los costos de los insumos. A estos efectos, a solicitud fundada de COMIPAL, el Poder Ejecutivo solicitará del órgano legislativo las cantidades necesarias para cubrir de inmediato, el costo de los aumentos en las mencionadas obras de infraestructura. Reyes".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Si me permiten los señores Consejeros, tengo el deber de informar al Cuerpo que la Comisión me hizo el honor de consultarme con respecto al texto del artículo 5º. Ella entendió que había la posibilidad de que el mismo involucrara una delegación legislativa. Informé, verbalmente, en sentido contrario, considerando que no se trata, aquí, de una ampliación de obras que requieran nuevos recursos, sino de un aumento natural por el proceso económico de la obra, y referido, particularmente, a uno de esos aspectos: los insumos.

Desde el momento en que el Poder Ejecutivo sólo podrá considerar esos aumentos en cuanto a los insumos, nos encontramos en una situación parecida o similar a la que hemos estado encarando en distintas leyes, particu-

larmente en las de arrendamiento de inmuebles, en lo que tiene que ver a la fórmula de valores reajustables.

En esencia, lo que se hace con este artículo 5º, es reajustar un costo por la elevación de uno de los elementos que componen la obra. De modo que no se trataría de una ampliación de obra que requeriría la voluntad del Poder Legislativo, sino, sencillamente, de una reliquidación a los efectos de cumplirla, sin el entorpecimiento de un trámite de esa índole.

Hago esta aclaración sin espíritu polémico, como un antecedente, para que lo tengan en cuenta los señores Consejeros.

SEÑOR PRADERI. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — Sin entrar al problema legal, —sobre el cual, por supuesto, no tengo autoridad— lo que debemos destacar en el proyecto de ley que se está estudiando, es la urgencia tremenda que reviste esta obra para el país. Creo que salvadas las dudas legales, tenemos que imprimir en esta ley las garantías suficientes para que una obra que ya ha sufrido todo tipo de entorpecimientos, cuyas consecuencias estamos pagando, pueda desarrollarse sin la espera de los plazos legales o dificultades administrativas, por lo menos en esta etapa de infraestructura. Hay que tener en cuenta que la autorización que se está dando de 15 mil millones de pesos es, solamente, para la infraestructura de una obra cuyo valor real va a ser mucho más alto.

De modo que si ponemos posibilidades de escollos o de demoras, estamos comprometiendo el comienzo de la obra. En este momento, el país no se puede dar ese lujo por un prurito puramente legal. O sea que salvadas las dudas legales, creo que en este caso particular hay otros elementos de juicio que tienen más importancia.

Nada más.

SEÑOR REYES. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR REYES. — Con todo atrevimiento de mi parte frente a la autoridad de la Mesa, me permito mantener mi observación. Fíjese que en el primer párrafo de la redacción del proyecto sustitutivo se da la garantía a que alude el Consejero Praderi. Quiere decir que hay un concepto afirmativo.

El segundo párrafo precisamente, advierte frente a la ingente cantidad votada de 15 mil millones de pesos, que en el tiempo pueden gravitar en mucho los aumentos de insumos lo que puede determinar que el Poder Legislativo obre de otra manera a los efectos de la financiación de la obra.

No estoy en contradicción, de ninguna manera, con la tesis que se sostiene por el miembro informante pero, creo que es una garantía que debe darse, tanto a los

contratistas como a Comipal, figurando, fundamentalmente, en los propósitos del Poder Legislativo de amparar en todos los conceptos el logro de la obra.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — Voy a mantener, señor Presidente, con mi voto, la redacción originaria del artículo 5º propuesto por la Comisión por los dos argumentos siguientes.

En primer lugar, por el volumen extraordinario y el interés de la obra. El volumen está determinado por la misma autorización que se concede, en este momento, de los 15 mil millones que, necesariamente, por esa entidad, van a tener que significar una variación y, en segundo lugar, porque la redacción del artículo precisa, con toda claridad y determinación, en qué va a consistir ese aumento que se autoriza en este momento por el Consejo de Estado. Lo dice expresamente: en función de los aumentos que se produzcan en los costos de los insumos, dando cuenta al Poder Legislativo.

De manera que la autorización que se da, en este momento, es precisa y determinada.

Por eso doy mi voto para mantener la redacción original del artículo 5º propuesto por la Comisión.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Voy a adherir a la tesis del Consejero Reyes, por las mismas razones que él expuso; por razones de principio.

Pero además, deseo destacar, señor Presidente, que en la forma que está trabajando el Consejo de Estado, ya podemos estar un poco a salvo de la suspicacia de que vamos a demorar la consideración de los problemas y constituir un obstáculo para el progreso nacional. En nombre de la urgencia no podemos abandonar la legalidad como se acaba de decir.

(Apoyados)

No es la primera vez que oigo hablar de la urgencia. Mejor dicho: 3 de cada 4 veces se habla de la urgencia y en nombre de la misma hay que aprobar los proyectos. Considero que no debe ser así. La urgencia es, por supuesto, un motivo fundamental para que nos esforcemos más y aceleremos nuestra producción; pero no pueden pasarse por alto todas las cosas en nombre de la urgencia.

Se podrá estar de acuerdo o no con la tesis del señor Consejero Reyes. Yo, personalmente, por las razones de principio que él invoca, las voy a respaldar; pero lo que no puedo aceptar es que se hable otra vez de la urgencia. Si viene un aumento, la Comipal

dará cuenta al Poder Ejecutivo, fundadamente y éste enviará con urgencia el Mensaje al Consejo de Estado y no se tenga la mínima duda que este Cuerpo le dará la prioridad del caso. Pero no podemos pasar por encima de la legalidad en nombre de la urgencia.

Nada más.

SEÑOR ESPINOLA. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR ESPINOLA. — Señor Presidente: es de principio que todo gasto público debe ser autorizado por una ley; y ese principio es insuprímible.

Es de principio, también, que en nuestro sistema normativo esté prohibida la delegación de funciones y de competencias. Es competencia del órgano legislativo la autorización de todo gasto público por medio de una ley; y esa competencia no puede delegarse.

Por otra parte, el argumento de la urgencia no puede arrasar con el orden jurídico constituido. Es absolutamente necesario que se respeten las competencias, las facultades y el régimen normativo, que establece que cada uno de los Poderes del Estado tiene sus facultades dentro de los cánones que fija la norma.

Entiendo, por consiguiente, que en este caso, como en todos aquellos en que aparece la delegación de funciones —me parece muy clara la situación de ese tipo en esta hipótesis— debe requerirse una ley que autorice al Poder Ejecutivo a efectuar el gasto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86, inciso 2º de la Constitución que dice, terminantemente, que toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, etcétera, con lo cual está expresando de modo muy claro, que solamente por medio de una ley se puede autorizar un gasto que incida sobre el Tesoro Público.

SEÑOR VIANA REYES. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR VIANA REYES. — Señor Presidente: también voy a adherir a la posición sustentada por el señor Consejero Reyes por las razones que aquí se han expuesto con total claridad.

Simplemente me quiero atrever a puntualizar que en contra de la autorizada opinión del Profesor Méndez, considero que la Constitución de la República no ha previsto el fenómeno de la inflación, que es, precisamente, a lo que atiende la solución que propone la Comisión en el proyecto. El mecanismo de las unidades reajustables, afortunadamente, todavía no ha llegado a la Constitución de la República. Por eso no puede ser posible admitir que por una vía legislativa introduzcamos la posibilidad de que por cualquier índice que sea de reajuste de determinado gasto público, pueda eludirse la sanción de la disposición legal.

Es por eso que voy a apoyar a la fórmula propuesta por el señor Consejero Reyes.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Antes de proceder a votar pregunta la Mesa si la Comisión acepta la sustitución propuesta por el señor Consejero Reyes.

SEÑOR PRADERI. — Voy a formular una pregunta. De acuerdo a lo manifestado por los señores Consejeros, quisiera preguntar si la propuesta del señor Consejero Reyes no equivale a la eliminación del artículo. En otras palabras, si se elimina el artículo, ¿qué ocurre? Que está en vigencia la Constitución, o sea el trámite normal.

¿Qué es lo que agrega esta moción? Es lo que no alcanzo a entender. Esa moción reafirma un procedimiento del cual los señores Consejeros quieren apartarse. Entonces, si ese procedimiento existe, ¿por qué poner la moción?

Esa es mi pregunta.

SEÑOR REYES. — ¿Me permite?

Indiqué precisamente que el párrafo 1º era una garantía que existía para todos los organismos de que era propósito perfectamente definido del Poder Legislativo de amparar todo lo que fuera relativo a la construcción de la represa de Palmar. Ese es el primer párrafo. El 2º no tiene más sentido que el que ha expuesto el señor Consejero Espínola.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Está pendiente la consulta a la Comisión. ¿Acepta?

SEÑOR PRADERI. — No, señor Presidente.

SEÑOR PONS. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PONS. — Como miembro integrante de la Comisión que redactó este proyecto, quiero expresar algo que me parece muy importante que se diga en Sala en este momento. Me refiero, porque en cierto sentido me comprenden, como abogado, determinadas manifestaciones del señor Consejero Labadie expresadas en esta Sala, en cuanto a que pueda darse prioridad a la urgencia frente a la legalidad. Nunca, jamás, se ha pensado en tal cosa en el seno de la Comisión. Por más justificadas que fueran las razones de urgencia, si tuviéramos, en algún momento, dejar rezagadas las razones de legalidad, creo, señor Presidente, que como hombre formado en una Casa de Derecho, me tendría que retirar de este lugar. Jamás se pensó por la Comisión que esto podría ser un ataque a la legalidad o a la constitucionalidad de este proyecto.

Entiendo que las expresiones del señor Consejero Espínola son ilustrativas y son de adhesión.

No tengo, particularmente, ningún deseo de mantener una polémica sobre este punto ni de suscitar alguna duda frente a lo que aquí se ha formulado. En esta materia —en realidad, como en todas— tenemos una posición de máximo y fervoroso respeto a la legalidad.

En tal sentido y en lo que me es particular —no conozco la posición de los otros señores miembros de la Comisión— digo que si este artículo puede originar alguna inquietud, no tengo ningún reparo en votar afirmativamente el texto sustitutivo que ha sido presentado por el señor Consejero Reyes.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Señor Presidente: quiero tranquilizar el espíritu del señor Consejero en cuanto a que, en este planteamiento, no cuestioné ninguna actitud personal suya. Por norma de conducta que me es propia, nunca aludo directamente a los señores Consejeros. Voy a alterar por un momento esa norma para aclarar mis palabras —y pido disculpas por ello al señor Consejero Praderi— ya que era a su exposición a la que me refería hace un momento, ya que en función de un giro de la misma debía entenderse que estábamos haciendo caudal de un simple prurito de legalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar por su orden: primero, el proyecto de la Comisión y, eventualmente, el sustitutivo.

(Se vota:)

—10 en 23. Negativa.

Se va a votar, entonces, ahora, el proyecto sustitutivo presentado por el señor Consejero Reyes.

(Se vota:)

—16 en 23. Afirmativa.

Voy a fundar mi voto.

Siendo partidario de la fórmula original de la Comisión, que ha sido desechada, debo decir que no me merece ningún reparo la aportada por el señor Consejero Reyes, que configura una expresión impecable.

SEÑOR REYES. — Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En consideración el artículo 6º.

Se va a votar.

(Se vota:)

—21 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Se va a votar.

(Se vota:)

—22 en 23. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

Artículo 1º — Apruébase el Proyecto de Inversiones relativo a las obras de infraestructura de la Central Hidroeléctrica del Palmar.

Art. 2º — A los efectos de la realización de la totalidad de las obras de infraestructura necesarias para la iniciación de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Palmar (artículo 3º del Decreto Nº 335, de 15 de mayo de 1973), asignase a la Comisión Mixta del Palmar (Comipal) una partida de hasta \$ 15.000.000.000 (quince mil millones de pesos) para atender la financiación del importe que demande dichas obras.

Art. 3º — La erogación dispuesta precedentemente se atenderá con cargo a los recursos del Fondo Energético Nacional (artículo 9º de la Ley Nº 13.958, de 10 de mayo de 1971) o en su defecto con cargo al Fondo de Desarrollo Económico.

Subsidiariamente el Ministerio de Economía y Finanzas queda facultado para conceder adelantos con cargo a la Cuenta "Inversiones Estatales del Ministerio de Economía y Finanzas".

Art. 4º — Los fondos a que se refiere el artículo 2º serán administrados por Comipal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 14.147, de 31 de enero de 1974.

Art. 5º — La financiación prevista en el artículo 2º será aumentada en función de los incrementos que se produzcan en los costos de los insumos. A estos efectos, a solicitud fundada de Comipal, el Poder Ejecutivo solicitará del Órgano Legislativo las cantidades necesarias para cubrir, de inmediato, el costo de los aumentos en las mencionadas obras de infraestructura.

Art. 6º — La inversión de los fondos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº 335/73, en la redacción dada por el Decreto Nº 530, de 19 de julio de 1973.

Art. 7º — Confiérese a Comipal atribuciones de ordenador primario de gastos e inversiones, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias respectivas (artículo 26 del Decreto Nº 104, de 6 de febrero de 1968).

Art. 8º — Comuníquese, etc.

18. — Sr. ALFREDO J. PUIG SPANGENBERG

Se pasa a considerar el segundo asunto declarado urgente: Gastos de sepelio de don Alfredo J. Puig Spangenberg.

(Antecedentes:)

Repartido 298 de 1974.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 18 de enero de 1973.

Señor Presidente de la Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, para cumplir con el penoso deber de informarle el fallecimiento de don Alfredo Jacobo Puig Spangenberg, ocurrido en el día de la fecha y a la vez proponerle —por el adjunto proyecto de ley— se tributen los honores de Ministro de Estado, a sus restos; honras estas a las que se hizo acreedor por los distinguidos servicios que prestó al país desde los diversos cargos que le cupo desempeñar como estadista, así como por los elevados méritos de su persona.

A los 18 años —en 1915— atraído por una definida inquietud por el campo, se radicó en el departamento de Flores y así se inició en una actividad a la que dedicó positivos afanes y que nunca abandonó.

Ingresó a la política en el año 1928 en calidad de integrante de la Comisión Seccional Departamental Herreñista. El Partido Nacional lo contó desde entonces en sus filas como una de sus más calificadas figuras. Fue siempre activo dirigente, orador de relieve y en cada instancia puso en evidencia sus acendradas condiciones democráticas.

Electo Concejal en Flores, el 1º de enero de 1932 ocupó ese cargo hasta 1933 en que fue designado Presidente de la Junta Deliberante de aquel departamento.

En 1934 fue electo Intendente de Flores y posteriormente reelecto ocupó tal cargo hasta 1942.

Finalizado este último período fue electo para integrar la Cámara de Representantes hasta 1946 y reelecto luego por dos períodos consecutivos, hasta 1954.

En 1958 ocupó la Presidencia del Concejo Departamental de Flores, departamento este cuya ciudadanía siempre le hizo presente el reconocimiento a sus dotes de avezado administrador y honesto hombre público.

Finalmente el 4 de agosto de 1964, fue convocado para ocupar un cargo de Consejero Nacional en su carácter de suplente de don Daniel Fernández Crespo.

En todos los cargos que desempeñó puso con clara evidencia de manifiesto, las relevantes condiciones inherentes a su personalidad, siendo así merecedor de los honores póstumos que hoy se propician.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

JUAN MARIA BORDABERRY. José María Robaina Ansó. Armando R. Malet. Moisés Cohen.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Tribútese a los restos de don Alfredo Jacobo Puig Spangenberg los honores previstos en el Código Militar para los Ministros de Estado.

Art. 2º — Los gastos del sepelio serán costeados por el Tesoro Nacional.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Montevideo, 18 de enero de 1973.

JUAN MARIA BORDABERRY. José María Robaina Ansó. Armando R. Malet. Moisés Cohen.

Anexo 1

CONSEJO DE ESTADO

Comisión de Economía y Finanzas

INFORME

Al Consejo de Estado:

Vuestra Comisión de Economía y Finanzas ha considerado el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo el 18 de enero de 1973, que se encontraba a estudio de la ex-Cámara de Senadores, por el que proponía honores de Ministro de Estado a los restos de Don Alfredo Jacobo Puig Spangenberg, homenaje al que se hizo acreedor por las relevantes condiciones de su personalidad.

El señor Puig Spangenberg consagró su vida a la causa pública con profunda vocación y firmeza de ideales, ocupando elevadas posiciones de gobierno desde las que sirvió al país con convicción y clara inteligencia.

Por estas razones se eleva a consideración del Consejo de Estado el adjunto proyecto de ley, sustitutivo del remitido oportunamente por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 14 de mayo de 1974.

Juan Rodríguez López, (Miembro Informante).
Eduardo Praderi. Daniel Rodríguez Larreta. Jesús Rubio. Osvaldo Soriano. Consejeros.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Los gastos del sepelio del señor Alfredo Jacobo Puig Spangenberg serán costeados por el Tesoro Nacional.

Art. 2º — Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 14 de mayo de 1974.

Juan Rodríguez López, (Miembro Informante).
Eduardo Praderi. Daniel Rodríguez Larreta. Jesús Rubio. Osvaldo Soriano. Consejeros.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En discusión general.

—Se va a votar.

(Se vota:)

—22 en 23. Afirmativa.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee.)

—Se va a votar.

(Se vota:)

—22 en 23. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el proyecto de ley aprobado, por ser igual al presentado.)

19. — FRIGORIFICO SUDAMERICANO S. A.

—Se pasa a considerar el asunto que figuraba, primitivamente, como primero en la orden del día: Proyecto de ley relativo al Frigorífico Sudamericano S. A. Destino final de sus bienes.

Léase.

SEÑOR ESPINOLA. — ¿Me permite, señor Presidente?

Formulo moción para que se suprima la lectura.

(Apoyados.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar la moción del señor Consejero.

(Se vota:)

—19 en 23. Afirmativa.

(Antecedentes:)

Repartido Nº 395 de 1974.

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Industria y Comercio

Montevideo, 4 de abril de 1974.

Señor Presidente del Consejo de Estado,
Dóctor Martín R. Echegoyen.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, haciendo uso de la facultad de iniciativa, auspicando el adjunto proyecto de ley.

El mismo, en lo sustancial, persigue una modificación del artículo 4º de la Ley Nº 14.038 que imponía al Poder Ejecutivo una determinada solución respecto al destino final de los bienes que integran el activo del

Frigorífico Sudamericano S.A. que se encuentran en trámite de expropiación y, por otra parte, suspende temporalmente las ejecuciones pendientes, o a promoverse, contra la empresa expropiada a efectos de impedir que se puedan ver frustrados los objetivos buscados por el Legislador.

En tanto el segundo de tales propósitos no necesita una mayor explicación, es necesario aclarar los motivos que llevan al Poder Ejecutivo a proponer una modificación del referido artículo 4º de la Ley Nº 14.038.

La citada disposición legal dispone que una vez concretada la expropiación, se harán funcionar los bienes de la empresa Frigorífico Sudamericano S.A. mediante la constitución de una sociedad compuesta por los productores agropecuarios acreedores y por los trabajadores de la empresa.

La Comisión Interventora designada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 14.038, abonó el 50 % de los créditos de los productores agropecuarios y éstos asumieron el compromiso de integrar, con el otro 50 %, la sociedad a crearse.

No obstante haberse efectuado el referido pago, el Poder Ejecutivo estima que debe modificarse el citado artículo 4º. En efecto, éste no ofrece otra alternativa que la de constituir la sociedad de productores acreedores y trabajadores, pero la experiencia vivida durante los años 1972 y 1973 obliga a ser sumamente escéptico en cuanto a la posibilidad de un buen funcionamiento de dicha sociedad.

Tanto es así, que ambos grupos han planteado su aspiración al Ministerio de Industria y Comercio, a través de la actual Comisión Interventora, de constituir una sociedad anónima mixta.

A efectos de comprender claramente el alcance de la modificación que se proyecta, deberán tenerse presente las siguientes circunstancias: a) Las serias discrepancias surgidas entre la delegación de productores agropecuarios y la de los trabajadores en el seno de la primera Comisión Interventora, que llevaron al Poder Ejecutivo a modificar la composición de la misma integrándola sólo con sus representantes;

b) Que el único vínculo que une a dichos productores agropecuarios entre sí es el de ser acreedores del Frigorífico Sudamericano S.A. pero que en su mayoría no sólo no se conocen sino que, por otra parte, existen quienes, en dos años de funcionamiento jamás han remitido sus haciendas al hoy Frigorífico Melilla;

c) Que, por otra parte, existe otro grupo de productores, que no eran acreedores del Frigorífico Sudamericano S.A., que han apoyado permanentemente la labor de la Comisión Interventora y que seguramente tendrían interés de integrar una sociedad de productores agropecuarios si ésta se constituye en la propietaria de la empresa;

d) Finalmente, que la deuda que el Frigorífico Sudamericano S.A. (en liquidación) mantiene con produc-

tores agropecuarios y trabajadores, no alcanza a los \$ 250.000.000 mientras que el valor actual de los bienes a expropiarse deben estimarse en el orden de los \$2.000.000.000, lo que demuestra una enorme desproporción entre el "capital aportado" y los bienes que integran el patrimonio expropiado por el Estado.

Todas estas consideraciones han llevado al Poder Ejecutivo a elaborar el presente proyecto de ley a efectos de que se le otorgue una mayor latitud para decidir la futura situación jurídica de la empresa. En ese sentido, podrá optar sea por la constitución de una sociedad de economía mixta, como por constituir una sociedad de productores agropecuarios con o sin la participación de los trabajadores así como por arrendar o vender la planta industrial a capitales privados. Es decir, que sólo se pretende adecuar el destino final de la empresa a la solución que se estime más conveniente. Así lo hizo la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, que declaró de utilidad pública la expropiación de los bienes de las empresas Indagro S.A., Palmares de Castillo S.A. y San Carlos S.A. y se estima que resulta aconsejable adoptar una fórmula similar.

Resulta obvio, asimismo, que la constitución del Directorio de la empresa a formarse estará íntimamente vinculada a la forma social que se adopte por lo cual se elimina toda referencia a la misma.

Las restantes disposiciones que se proyectan tienen relación con la modificación sustancial aludida y con la situación actual en lo referente a la dirección de la empresa.

Sin otro particular saludamos a los señores Miembros del Consejo de Estado con nuestra consideración más distinguida.

JUAN MARIA BORDABERRY. — José E. Etcheverry Stirling.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 14.038 de 19 de octubre de 1971 por el siguiente:

"Artículo 4º — El Poder Ejecutivo hará funcionar, en la forma que estime más conveniente, los bienes de la empresa expropiada. Dicha facultad comprende la de arrendar o vender suscribiendo los documentos necesarios al efecto. El arrendamiento o la venta podrá realizarse a empresas privadas o bien a cooperativas de producción que se constituyan por parte de los trabajadores de la empresa o de productores agropecuarios, sea conjunta o separadamente. El Poder Ejecutivo también podrá proyectar la explotación de la nueva empresa mediante las normas que establece el artículo 188 de la Constitución de la República. A los efectos de este artículo no regirán las disposiciones legales vigentes en materia de licitación pública".

Art. 2º — El artículo 5º de la Ley Nº 14.038, de 19 de octubre de 1971 sólo mantendrá su vigencia, en lo pertinente, si el Poder Ejecutivo, en uso de la facultad

acordada por el artículo anterior, opta por la formación de una sociedad de productores agropecuarios y trabajadores para regir los destinos de la empresa.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 14.038 por el siguiente:

“Artículo 7º — A los fines de mantener la continuidad de la explotación comercial e industrial y hasta tanto no se decida la transferencia de los bienes expropiados a la nueva sociedad a formarse, el Poder Ejecutivo cometerá la administración de dichos bienes a una Comisión integrada por el o los representantes que designe. La Comisión Administradora gozará de personería jurídica para actuar administrativa y judicialmente en los asuntos relacionados a su gestión y tendrá, entre otros, los siguientes cometidos y facultades:

a) Adoptar todas las medidas conducentes a la conservación de los bienes de la empresa expropiada y el normal funcionamiento del giro industrial y comercial de la planta frigorífica, pudiendo contratar los servicios y suministros necesarios al efecto;

b) Contratar préstamos en el Banco de la República incluso con afectación de los bienes de la empresa;

c) Informar trimestralmente al Poder Ejecutivo sobre las gestiones cumplidas en el ejercicio de sus cometidos”.

Art. 4º — Suspéndese por el término de dos años, a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, todos los trámites de ejecución contra los bienes del Frigorífico Sudamericano S. A., cualquiera sea la naturaleza de los créditos o la calidad de los acreedores.

Art. 5º — Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1975 el plazo de un año establecido en la parte final del artículo 20 de la Ley Nº 14.038, de 19 de octubre de 1971.

Art. 6º — Comuníquese, etc.

Montevideo, 4 de abril de 1974.

JUAN MARIA BORDABERRY. — José E. Etcheverry Stirling.

Anexo 1.

CONSEJO DE ESTADO

Comisión de Industria y Comercio

INFORME

Al Consejo de Estado:

La Comisión de Industria y Comercio ha estudiado el proyecto que determina el destino final de los bienes que integran el activo del Frigorífico Sudamericano S. A. y, por otra parte, suspende temporalmente las ejecuciones pendientes, o a promoverse, contra la empresa expropiada.

Acompaña a tal iniciativa del Poder Ejecutivo, fundamentándola, el Mensaje correspondiente, en el que se exponen las razones que justifican plenamente la aprobación de este proyecto de ley. Esta Comisión comparte los fundamentos mencionados y hace suyo el contenido de dicho Mensaje, considerando innecesario repetir en este Informe los conceptos que lo integran.

Por lo expuesto, este Cuerpo se permite aconsejar al Consejo de Estado la sanción del proyecto adjunto.

Sala de la Comisión, 8 de mayo de 1974.

Eduardo Praderi, (Miembro Informante). Mario Jorge Coppetti. Alfredo Lamaison. Jesús Rubio. Jorge Spangenberg. Consejeros”.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En discusión general.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Señor Presidente: me voy a permitir mocionar para que este proyecto de ley vuelva a Comisión, a fin de ser re-examinado.

He estudiado los antecedentes que se han repartido y conversado privadamente con algunos de los señores Consejeros integrantes de la Comisión, en función de ciertas informaciones que obran en mi poder y que me han creado inquietudes sobre el alcance y la justicia misma de la solución que esta iniciativa consagra.

Con motivo de la quiebra —por así decirlo— del Frigorífico Sudamericano S. A., quedó pendiente un importante crédito de productores remitentes y de obreros trabajadores de la empresa, cuya situación procuró contemplar la ley que ahora este proyecto modifica, mediante la creación de una nueva sociedad cuya naturaleza no se definía con precisión pero que, en términos generales, podía ser calificada como una sociedad de economía mixta según los conceptos vertidos en las normas correspondientes. Así, el artículo 4º de la ley que en este proyecto se busca modificar, señalaba que el Poder Ejecutivo haría funcionar los bienes de la empresa expropiada mediante la constitución de una sociedad integrada por productores y obreros acreedores. Y en uno de los incisos de las disposiciones finales, —en lo que tiene que ver con la forma en que se dirigiría esta nueva empresa— se establecía que los estatutos de la misma dispondrían la integración de las autoridades del caso con representantes del Poder Ejecutivo y del Banco de la República Oriental del Uruguay, que cesarían en sus cargos una vez que hubieren sido satisfechas las deudas mantenidas con el Estado y con el citado organismo bancario.

En función de esa disposición —que data de 1971— se provocó una muy legítima expectativa en cuanto al funcionamiento de la nueva empresa que se creaba, con participación de productores y obreros acreedores; pero la verdad es que por algunos hechos que son no-

torios —y por otros que se mencionan en el propio Mensaje del Poder Ejecutivo— la empresa funcionó —perdónese la expresión— a los tumbos.

Ahora se ha entendido que es necesario, conveniente y útil desde todo punto de vista encarar una solución actual al problema; pero, con la modificación que propicia el Poder Ejecutivo, se altera sustancialmente este artículo 4º, y aquella expectativa, muy legítima de quienes eran titulares de créditos perfectamente justificados puede verse frustrada.

Hay de por medio, naturalmente, una cuestión de índole evidentemente social, que no puede ser desconocida, la de los obreros. Pero hay también una situación de injusticia con los productores remitentes. A ambos se les posterga y se les coloca en una lista de espera para el cobro de sus créditos.

El proyecto que estamos considerando establece, en realidad, un régimen de moratoria de, por lo menos, dos años. La situación se planteó en 1971 y se pretendió solucionarla, por la vía legal, constituyendo una empresa que llamaríamos de economía mixta. Hasta hoy han transcurrido ya tres años; si a ellos agregamos dos más de moratoria, tendremos un lapso de cinco años en total.

A los productores se les ha abonado el cincuenta por ciento de sus créditos, que eran del orden de los trescientos y pico de millones; creo que a los obreros y empleados —no tengo información en tal sentido— nada se les ha pagado. De manera que si es necesario que esperen dos años más para cobrar —no voy a hacer caudal de lo que significará la suma que reciban tras tanto tiempo de generado el crédito— la solución puede no ser cuando menos, la más justa.

Pero, además, en mi concepto la solución proyectada encierra un incumplimiento de una promesa porque a estos productores y obreros o empleados, no se les da una solución a sus problemas. Si las necesidades del país y de la industria reclaman que se abandone aquella programación un tanto ilusa o equivocada, por lo menos hay que buscarle una solución subsidiaria a esta gente que tiene una legítima expectativa nacida del texto legal de integrar esa empresa, pero que además tiene el legítimo derecho de no necesitar una ley especial que la respalde para cobrar sus créditos.

En mi concepto, señor Presidente, estaríamos consagrando, en definitiva, una forma de expropiación sin compensación.

No quiero ser definitivo en estas conclusiones, porque, insisto, son informaciones un tanto laterales que han llegado a mi conocimiento.

Conversando con algún integrante de la Comisión, solicité información sobre si se había oído por lo menos a alguna de las opiniones interesadas. Se me informó que no.

Leyendo el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley, observo que, en alguna parte se señalan las dificultades de la nueva empresa para po-

der funcionar y algunas otras cosas más. Se dice por ejemplo que los productores prácticamente no se conocen entre sí y que actúan en forma inconexa. No sé si todos los acreedores y productores se conocen entre sí; pero importantes sectores de productores, según mis informes, incluso tienen un representante único que ha actuado activamente en este problema.

Si el proyecto tendiera a dar facultades al Poder Ejecutivo para modificar las soluciones otorgadas por la Ley del 71, pienso que tal vez podría ser otra mi disposición espiritual. Pero el proyecto encara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incluso enajene la empresa a particulares, con lo cual no sólo quedarían a un lado las expectativas de los acreedores, sino que quedarían burladas en beneficio del particular adquirente. Me consta, además, que ha habido muchos particulares moviéndose en torno a este problema, ya que han realizado gestiones no sólo ante los acreedores sino también ante los obreros y empleados. Pero no se ha llegado a un acuerdo.

En consecuencia, y con todo respeto a la actuación de la Comisión, solicitaría que este asunto volviera a estudio de la misma —y si se considera útil, me ofrezco, con mucho gusto, a estudiarlo conjuntamente con la Comisión— con el fin de reunir algunos antecedentes que me parece que son de significación, incluso, procurar obtener información por parte de los acreedores que están legítimamente interesados en el destino final de la empresa.

Formulo moción concreta, en ese sentido.

SEÑOR PRADERI. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Es una moción de orden, señor Consejero. Como no tiene discusión, corresponde votarla.

Se va a votar si el asunto pasa nuevamente a Comisión.

(Se vota:)

—12 en 23. Afirmativa.

SEÑOR GAGGERO. — Pido la palabra, para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR GAGGERO. — Señor Presidente: he votado por la negativa porque considero que es injusto que un miembro informante no pueda hacer uso de la palabra, cuando así lo desea, por el hecho de que se haya presentado una moción de orden. Me parece que correspondería modificar el Reglamento.

SEÑOR PRADERI. — Como lo dice el señor Consejero Gaggero, como miembro informante, no tuve oportunidad de hablar sobre esto que debería ser previo a la discusión general.

SEÑOR GAGGERO. — Es de interés del Consejo estar informado.

SEÑOR PRADERI. — Pediría una reconsideración de la votación para que se me dé la oportunidad de explicar por qué la Comisión envió este proyecto.

(Apoyados.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — El pedido es procedente. Por lo tanto, la Mesa tiene la obligación de cumplir con el Reglamento.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — No sé si es procedente, señor Presidente, pero declaro que no fue mi ánimo impedir que hablara el señor Consejero. Honradamente, creí que podía oponerse y referirse a la moción. Por lo tanto, si en algo ayuda, no tengo inconveniente en posponer mi planteo hasta después que hable el miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Lo que se ha votado es reglamentario. Además, no depende del arbitrio del señor Consejero ni de la Mesa.

Hay un pedido de reconsideración del asunto por parte del señor Consejero Praderi como miembro informante respecto de la resolución que acaba de votarse.

Se va a votar.

(Se vota.)

—22 en 23. Afirmativa.

SEÑOR PRADERI. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — Señor Presidente: en principio, nunca me opongo a que un tema vuelva a Comisión cuando lo propone algún señor Consejero. Ese va a ser mi ánimo y apoyaré la moción. Sin embargo, me parece oportuno que queden en la versión taquigráfica algunos puntos y los fundamentos que tuvo la Comisión al haber enviado el proyecto.

En este asunto del Frigorífico Sudamericano hay una serie de problemas, así como muchas experiencias, algunas de ellas tristes e ineficaces. Se refiere a una de las industrias capitales del país que está pasando por un momento difícil y que tiene una gran relación con lo que manifestó el señor Consejero Rubio en la media hora previa.

El industrial no se genera por decreto; el vendedor no se genera por decreto. Es decir, que los funcionarios públicos, por el solo hecho de ocupar un frigorífico, de tener una intervención o de llenar un cargo administrativo, están en las condiciones del juego industrial o comercial más adecuados.

Efectivamente, la intención del legislador en la Ley 14.038, que dispuso la intervención del Frigorífico Sudamericano, en su artículo 4º, cometía al Poder Ejecutivo una solución de gran inocencia. Por el solo hecho de que fuera acreedor de un frigorífico fundido, esa única calidad los reunía en una sociedad mixta y heterogénea que no tenía ninguna garantía de poder fun-

cionar. Ahí se perdía el hecho o la motivación fundamental de un industrial, que es tener el riesgo en lo que está. El riesgo aquí ya lo habían corrido. Los tres años transcurridos están demostrando que esa solución no era eficaz. La ley vigente está imponiendo una única alternativa: que a un grupo heterogéneo, por el solo hecho de ser acreedor de un frigorífico fundido se les reúne en una sociedad a la cual solamente están vinculados en un 50 % de su crédito. Quiere decir que la Comisión Interventora, hasta la fecha, ha abonado el 50 % como fijaba la ley. El 50 % restante quedaría, de acuerdo a la ley, como se dice en el artículo 5º, inciso 2: la nueva empresa abonará a los productores el 50 % de sus créditos condicionando a que acepten integrar la sociedad a crearse con el restante 50 % de los citados créditos. Quiere decir que la ley fijaba una condición compulsiva y obligaba a cobrar el 50 %. El restante 50 % iba a integrar su participación en una empresa, tarde mal o nunca. Eso sí era efectivamente perdido.

Precisamente, el carácter de este artículo y de la ley, produjo, con el correr del tiempo, el desánimo de ese grupo heterogéneo que, de ninguna manera, pudo estar habilitado para hacer funcionar una empresa.

Ese proceso está influyendo en el país. Lo vamos a ver en los siguientes puntos de la orden del día. Está la experiencia de cómo se van deshaciendo los frigoríficos en manos de las Comisiones Interventoras, en manos de pretendidas cooperativas de empleados o funcionarios, que a esta fecha están totalmente dispersos. Eso es lo que está conspirando contra una industria que debería ser primaria en nuestro país.

De modo que si bien en principio —no pretendo imponerme ni acallar las observaciones muy fundadas del señor Consejero Labadie Abadie— esto es importante, (entiendo que el tema es muy superior a ciertas dudas o suspicacias), considero que tal vez esto sea una nueva carta en blanco al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como tal, no puede hacer funcionar un frigorífico. Sobre todo, hemos tenido una experiencia. Sabemos que es así, sabemos que se trata de una industria muy compleja.

Y aquí estamos modificando el artículo 4º y diciendo solamente que hará funcionar en la forma que estime más conveniente los bienes de la empresa expropiada, dándole cualquier alternativa para que ese activo, en una industria que el país necesita, genere efectivamente producción porque haya alguien detrás a quien le duela el bolsillo.

Quería efectuar estas manifestaciones, puesto que este proyecto de ley solamente sustituye el artículo 4º y lo que es correspondiente con él, para permitir que este frigorífico se transforme, pasando de una Comisión Interventora totalmente anónima e indiferente con el funcionamiento de un frigorífico, a ser efectivamente una industria.

Por otra parte, ese argumento de que estamos dando una moratoria de dos años no es cierto, porque la ley actual está dando una moratoria de toda la vida, con ese 50 % que es integración obligatoria de los acreedores a una empresa que no tiene ninguna perspectiva, cosa que como legisladores podemos afirmar.

SEÑOR ESPINOLA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR ESPINOLA. — Señor Presidente: voté negativamente la proposición de vuelta del proyecto a Comisión porque entiendo que el artículo 1º, al sustituir al artículo 4º de la Ley Nº 14.038, da una solución correcta al problema planteado por este tipo de industrias paralizadas.

Como dijo muy bien el señor Consejero Praderi, la solución de crear una sociedad de tipo virtualmente forzado es totalmente inaceptable. Desde el punto de vista industrial y comercial, eso no funciona, no marcha, no camina, no tiene éxito ni puede tenerlo.

El Poder Ejecutivo, que ya hizo la experiencia, se ha propuesto impedir el cierre de una fuente de trabajo y con esa finalidad sugiere ahora una solución que sí es viable, como es la de arrendar la planta tal como está, como unidad técnica capaz de funcionar y de producir el objeto a que está destinada, a cualquier tipo de empresario que tenga interés en trabajar con una planta arrendada. Esta es una cosa perfectamente posible y que no tiene ninguno de los inconvenientes de ese tipo de sociedad o de intervención, que ha dado resultados desastrosos en la práctica, cosa que se advierte en la cadena de frigoríficos paralizados —algunos de los cuales están presentes en la orden del día de hoy— integrada por Indagro, Palmares de Castillo y San Carlos, que están en la misma situación.

Por esos motivos entiendo que se podría votar esta ley, que significa una evidente mejora en el mecanismo que ha imaginado el Poder Ejecutivo para hacer funcionar la planta e impedir los resultados nocivos de las intervenciones y de ese tipo de asociación forzada que, repito, no ha dado buenos frutos en la práctica. Con el sistema de arrendamiento es posible que la planta vuelva a funcionar y a convertirse en fuentes de trabajo, ya que el Estado no se vería privado del necesario utilaje para producir en esa materia.

SEÑOR REYES. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR REYES. — Yo voté la moción formulada por el señor Consejero Labadie Abadie, como voto siempre cualquier moción de un compañero para que vuelva un asunto a Comisión a fin de recibir un mejor estudio.

No obstante, las palabras pronunciadas por los señores Consejeros Praderi y Espínola me han convencido —porque son más explícitas que el informe— de la razón que asiste al proyecto.

Era lo que quería manifestar, como fundamento de voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — No quiero señalar rumbos a la Mesa, pero se pidió el pase del asunto nuevamente a Comisión. Se reconsideró, pero no se ha votado si se hace efectivo o no dicho pase.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se había votado primero que pasara a Comisión; luego se pidió que se reconsiderara y estamos en la discusión general, por lo que se reabrió el debate.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — ¿Tengo que formular nuevamente la moción de pase a Comisión?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Sí, señor Consejero.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Entonces, pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Por las razones que expuse anteriormente reitero mi moción, con el agregado de que no discrepo ni en un milímetro de las manifestaciones formuladas por los señores Consejeros Praderi y Espínola respecto a las deficiencias de la solución que dio la ley que ahora se intenta modificar.

Simplemente, me resisto a lo que considero, en principio, un verdadero despojo de los derechos legítimos de los productores, acreedores, obreros y empleados. Incluso, cuando se entre a la discusión particular, si no prospera mi pedido de un re-examen —al fin y al cabo, no creo que el problema tenga una urgencia tan grande como para que no pueda ser vuelto a considerar— voy a solicitar que se suprima; por lo menos, lo de la venta a empresas privadas, que está prevista en el artículo 4º. Adhiero a las manifestaciones formuladas por el señor Consejero Espínola en relación a las ventajas que podría suponer un arrendamiento, pero no veo razón para perjudicar los legítimos intereses de los particulares en beneficio de otros particulares adquirentes, que comprarían con una facilidad de pago muy conveniente.

Concretamente, formulo moción para que este asunto pase nuevamente a Comisión.

SEÑOR RUBIO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RUBIO. — Me parece que se está confundiendo un poco la situación de este frigorífico. El hecho de que aquí se manifieste que el Poder Ejecutivo, a través del artículo 4º, puede arrendar, vender o explotar en comandita, no significa de ninguna manera que

el Estado pretenda eludir la responsabilidad que tiene esta planta industrial frente a los productores y a las oficinas impositivas, sino que es una facultad que se le da al Estado para que busque soluciones.

Creo que el señor Consejero Labadie Abadie tendría que pensar que, al igual que en otros casos —frigoríficos de Castillos, San Carlos, Libertad, de los cuales también el Estado se ha hecho cargo— es de orden ilegítimo que el Estado no pueda dar ese mal paso de burlar a los acreedores particulares que están representados en este pasivo de doscientos cincuenta millones de pesos. Ahí están comprendidos los créditos de los hacendados y de los jornaleros del frigorífico.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Por la muy especial deferencia que me merece el señor Consejero, no quise interrumpirlo en la creencia de que su exposición iba a tomar otro camino. Pero como se trata de una moción de orden, me permito señalarle que no se puede interrumpir y que se debe proceder de inmediato a la votación.

SEÑOR RUBIO. — Muchas gracias.

Ahora, para continuar exponiendo mi pensamiento, diré que yo no me opondría a que se modificara en algo el artículo enviado por el Plenario a la Comisión, a fin de que dijera más explícitamente que el Estado —a través de este artículo 4º o el que se proponga a continuación— se haría cargo, como es lógico, de todas las erogaciones que tenga pendientes el frigorífico Melilla. En ese sentido, tengo absoluta confianza en que el Estado es el primer interesado en dejar las cosas claras y no va a asumir una responsabilidad que merezca ningún tipo de reparos.

Es lo que quería agregar, para aclarar un poco más el panorama.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra, el señor Consejero.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — A título constructivo, observo que en dos oportunidades la Mesa ha utilizado el término "moción de orden", eliminando totalmente la posibilidad de un cambio de ideas y expresión de fundamento de voto.

Me permito preguntar —lo he estado buscando en el Reglamento— quién es que califica esa moción. ¿Basta que un Consejero diga que es una moción de orden para que no se pueda debatir el punto ni fundamentar el voto?

Digo esto con toda tranquilidad, pero me resisto a aceptar que se pueda limitar las fundamentaciones de voto.

Me resisto a esta solución, porque me choca y, en principio no le encuentro fundamentación —pediría a la Mesa que me ilustrara en ese sentido— al hecho de que si se presenta en Sala una moción sustitutiva se pueda oír a la Comisión sobre esa sustitución, pero, si se pre-

senta una moción para que un asunto vuelva a Comisión, se considere que se trata de una moción de orden y no se discuta.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — El Reglamento es terminante en ese sentido. El artículo 40, inciso 3º, dice: Son cuestiones de orden el pase de un asunto a Comisión.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — ¿El simple pedido de que pase un asunto a Comisión es una moción de orden sin fundamentación?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — La fundamentación tiene que hacerla el que propone la moción y para ello hay un término, y en este caso lo usó.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — ¿Y no se oye a la Comisión?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — No, porque se tiene que votar sin discusión.

Si discutiéramos, en este caso, no terminaría nunca el debate. El problema de fondo se va a discutir cuando venga el asunto de la Comisión.

Corresponde, pues, votar la moción de orden, sin deliberación, hecha por el señor Consejero Labadie Abadie.

SEÑOR GAGGERO. — ¿Cuál es la moción, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Que el asunto vuelva a Comisión.

—Se va a votar.

(Se vota:)

—10 en 23. Negativa.

Continúa la discusión general.

SEÑOR RUBIO. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RUBIO. — Señor Presidente: yo estaba, si se quiere, confundido y trataba de que algunos aspectos de detalle, para mi bastante conocidos, quedaran completamente aclarados. No fue mi intención contradecir las palabras ni el espíritu de los señores Consejeros que pretendían que este asunto volviera a Comisión. Sencillamente, deseaba contribuir, como lo dije, para que este asunto quedara perfectamente clarificado para tranquilidad de conciencia de los señores Consejeros.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general.

(Se vota:)

—19 en 23. Afirmativa.

Se pasa a la discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

Léase.

(Se lee.)

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — Acabo de entregar a Secretaría, señor Presidente, el texto de un artículo sustitutivo del que estamos considerando. Pido excusas a la Mesa si no está redactado en forma totalmente correcta, debido al escaso tiempo de que dispuse.

Deseo fundamentar dicho artículo para que comprenda debidamente el Cuerpo cuál es su motivación.

Me preocupa exclusivamente, con relación a este punto, la facultad de vender que está prevista tanto para cooperativas integradas por trabajadores y productores agropecuarios sea conjunta o separadamente, como para empresas privadas. El artículo que he redactado, tiende a eliminar esa facultad de enajenación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Léase el artículo propuesto por el señor Consejero.

(Se lee.)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Matà). — Texto sustitutivo del parágrafo 3º del artículo 4º propuesto: "El arrendamiento podrá realizarse a empresas privadas o bien a cooperativas de producción que se constituyan por parte de trabajadores de la empresa o de productores agropecuarios, sea conjunta o separadamente. La venta sólo podrá hacerse a estas cooperativas".

SEÑOR PRADERI. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — No comprendo, señor Presidente, el objeto de esta modificación. Parecería que hay cierta suspicacia o desconfianza en el Poder Ejecutivo porque lo que más me atrae del artículo 4º es la venta, precisamente, eso es lo más atractivo. Si podemos encontrar a alguien que pueda comprar y aportar capital, eso sería más atractivo que el arrendamiento. Es lo más difícil pero negar la posibilidad de que efectivamente el frigorífico se instituya en una industria en condiciones normales como lo necesita el país, coartar esa posibilidad es limitarle al proyecto lo más importante para una industria. De cualquier manera la ley original estaba vendiendo las empresas a un grupo heterogéneo de personas, de manera que no estamos confiscando ni apropiándonos de ellas.

Si existe alguien que quiera aportar capital y comprar las empresas, bienvenido. Repito que eso es lo más

difícil, porque es fácil manejarse con una pequeña planta sabiendo que se va a tener el apoyo oficial para toda la vida.

Por estas razones insisto en que debe votarse el artículo que viene de la Comisión.

SEÑOR ESPINOLA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR ESPINOLA. — Adhiero a las manifestaciones propuestas por el Consejero Labadie Abadie. Entiendo que en este momento nadie puede comprar el Frigorífico Sudamericano, por lo menos nadie que esté en su sano juicio porque el adquirente del activo tiene que comprar también el pasivo y este es aterrador. La deuda con el Fisco y con los institutos de previsión social, con los recargos del 48 % anuales, es ya incommensurable. No hay nadie en este país que pueda comprar el Frigorífico Sudamericano y hacerse cargo de este pasivo. No es un negocio; sería una locura. Por eso, lo único que puede hacerse con esta planta es arrendarla o venderla a una cooperativa que no pague impuestos. Eso sería posible porque, si no, se cargaría con el pasivo, que en un 90 % son deudas por impuestos.

Por eso me inclino por la tesis del Consejero Labadie Abadie, porque entiendo que el arrendamiento es la única solución factible para mantener la planta abierta y abiertas también las fuentes de trabajo. Con el producido del arrendamiento se puede cubrir la deuda con el fisco y la deuda con los institutos de previsión social.

SEÑOR GAGGERO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR GAGGERO. — Señor Presidente: en el país existe experiencia de sobra al respecto, sobre muchos de los frigoríficos. Realmente, hemos visto que en todos aquellos casos en que se ha terminado una de estas industrias, ante el pase de los gravámenes, de las deudas, ha sido imposible reconstruir esa misma industria desde el punto de vista financiero. Lo que va a ocurrir en este caso, si una cooperativa toma a su cargo la marcha del frigorífico es que va a tener que recurrir a una financiación externa porque los capitales que se necesitan para poner en marcha una industria de este tipo son enormes y desbordan las posibilidades de cualquier empresa constituida por obreros y por empleados o con algunos acreedores privados, sean o no ganaderos.

Desde luego que en esas condiciones el Estado puede olvidarse de recuperar un centésimo tanto en lo que respecta a los institutos de previsión social como a la Dirección General Impositiva.

Tengo la seguridad de que habrá que sancionar alguna ley para condonar todas estas deudas. Precisamente, la única oportunidad que podría tener el Estado de resarcirse de las deudas es que alguna empresa privada se haga cargo de la marcha del frigorífico, pero si la situación es tan grave y se puede descartar en los hechos

que nadie tenga interés en su adquisición, no veo por qué oponernos a la única posibilidad que existe para que el Estado pueda resarcirse de todo lo adeudado, a lo que tiene derecho.

Adelanto, señor Presidente, que voy a votar, decididamente, la fórmula propuesta por la Comisión porque entiendo que en otras condiciones instauraríamos una nueva industria anémica que tendrá que recurrir al Consejo de Estado pidiendo leyes para condonar deudas.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR SIEMENS AMARO. — Voy a votar, señor Presidente, la fórmula propuesta por la Comisión tal como está proyectada; pero, me permito significar que el artículo 4º, cuya aprobación se propone, establece que el Poder Ejecutivo hará funcionar, en la forma que estime más conveniente, los bienes de la empresa expropiada. Esto significa que esta empresa ya está en dominio del Estado. En consecuencia, no entiendo cómo es posible que se hable de deudas con los Institutos tales y cuales. En mi concepto, esta empresa es propiedad del Estado ya en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Entiende la Mesa, por las expresiones del señor miembro informante, que la Comisión no acepta el artículo sustitutivo propuesto por el señor Consejero Labadie Abadie.

Por lo tanto, corresponde que se voten por su orden. Primero se votaría el artículo de la Comisión, tal como ésta lo presentó y, eventualmente, el sustitutivo.

Se va a votar en el orden establecido, el artículo 1º de la Comisión.

(Se vota:)

—15 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Léase.

(Se lee.)

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—15 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Léase.

(Se lee.)

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—17 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Léase.

(Se lee.)

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—13 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Léase.

(Se lee.)

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—16 en 22. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 14.038, de 19 de octubre de 1971, por el siguiente:

“Artículo 4º — El Poder Ejecutivo hará funcionar, en la forma que estime más conveniente, los bienes de la empresa expropiada. Dicha facultad comprende la de arrendar o vender suscribiendo los documentos necesarios al efecto. El arrendamiento o la venta podrá realizarse a empresas privadas o bien a cooperativas de producción que se constituyan por parte de los trabajadores de la empresa o de productores agropecuarios, sea conjunta o separadamente. El Poder Ejecutivo también podrá proyectar la explotación de la nueva empresa mediante las normas que establece el artículo 188 de la Constitución de la República. A los efectos de este artículo no regirán las disposiciones legales vigentes en materia de licitación pública”.

Art. 2º — El artículo 5º de la Ley Nº 14.038, de 19 de octubre de 1971, sólo mantendrá su vigencia, en lo pertinente, si el Poder Ejecutivo, en uso de la facultad acordada por el artículo anterior, opta por la formación de una sociedad de productores agropecuarios y trabajadores para regir los destinos de la empresa.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 14.038 por el siguiente:

“Artículo 7º — A los fines de mantener la continuidad de la explotación comercial e industrial y hasta tanto no se decida la transferencia de los bienes expropiados a la nueva sociedad a formarse, el Poder Ejecutivo cometerá la administración de dichos bienes a una Comisión integrada por el o los re-

presentantes que designe. La Comisión Administradora gozará de personería jurídica para actuar administrativa y judicialmente en los asuntos relacionados con su gestión y tendrá, entre otros, los siguientes cometidos y facultades:

- a) Adoptar todas las medidas conducentes a la conservación de los bienes de la empresa expropiada y al normal funcionamiento del giro industrial y comercial de la planta frigorífica, pudiendo contratar los servicios y suministros necesarios al efecto.
- b) Contratar préstamos en el Banco de la República incluso con afectación de los bienes de la empresa.
- c) Informar trimestralmente al Poder Ejecutivo sobre las gestiones cumplidas en el ejercicio de sus cometidos.

Art. 4º — Suspéndense por el término de dos años, a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, todos los trámites de ejecución contra los bienes del Frigorífico Sudamericano S. A., cualquiera sea la naturaleza de los créditos o la calidad de los acreedores.

Art. 5º — Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1975 el plazo de un año establecido en la parte final del artículo 20 de la Ley Nº 14.038, de 19 de octubre de 1971.

Art. 6º — Comuníquese, etc.

20. — FRIGORIFICO INDAGRO S. A., PALMARES DE CASTILLO S. A. y SAN CARLOS S. A.

Se pasa a considerar el 2º punto de la orden del día: "Frigorífico Indagro S. A.; Palmares de Castillos S. A. y San Carlos S. A. Toma de posesión y explotación de sus bienes".

Léase.

SEÑOR RODRIGUEZ LOPEZ. — Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RODRIGUEZ LOPEZ. — Este asunto ha sido largamente estudiado y ya se hizo el repartido. Por esa razón, formulo moción para que se suprima la lectura.

(Apoyados.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

—16 en 21. Afirmativa.

(Antecedentes:)

Repartido 396 de 1974.

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Industria y Comercio

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 4 de abril de 1974.

Señor Presidente del Consejo de Estado.
Doctor Martín R. Echegoyen.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, haciendo uso de la facultad de iniciativa, propiciando el adjunto proyecto de ley.

El mismo tiende a facilitar la toma urgente de posesión de los bienes de las empresas Indagro S. A., Palmares de Castillos S. A. y San Carlos S. A. y a darle a los mismos el destino más apropiado de acuerdo a su estado actual de conservación.

A efectos de obtener el primero de los objetivos, se propone una modificación al artículo 3º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968. Dicha modificación consiste, sustancialmente, en que los créditos por el Estado y demás personas públicas mantengan con las referidas empresas se computarán, a los únicos efectos de la toma urgente de posesión, por los montos que las referidas reparticiones públicas establezcan mediante liquidación debidamente certificada de sus respectivos créditos.

En cuanto a la nueva redacción que se le da al artículo 4º de la Ley Nº 13.709, la misma persigue adecuar el destino final de los bienes que se expropien a su estado actual de funcionamiento y conservación pudiendo inclusive ser afectados en otras actividades distintas a la frigorífica.

Las restantes disposiciones se refieren a una aspiración presentada por el Banco de Previsión Social que se consideró atendible y a una suspensión de las ejecuciones contra las empresas expropiadas a efectos de evitar que, en los hechos, éstas puedan frustrar los propósitos perseguidos por la ley.

Sin otro particular, saludamos al señor Presidente del Consejo de Estado con nuestra mayor consideración.

JUAN MARIA BORDABERRY. — José E. Etcheverry Stirling. Moisés Cohen.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 3º — La integración del depósito previo para la toma de posesión de los bienes de las empresas Indagro S. A., Palmares de Castillos S. A. y San Carlos S. A. podrá realizarse en la siguiente forma:

- A) Computando los importes de las deudas de las respectivas empresas por obligaciones con el Estado por distintos conceptos, así como las que mantengan con Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas públicas no estatales administradoras de fondos de previsión social.

Estos créditos se computarán, en los procedimientos judiciales de ocupación urgente, por los importes que las reparticiones públicas e instituciones acreedoras establezcan, mediante liquidación debidamente certificada de sus respectivos créditos.

La forma de pago prevista por los incisos anteriores no importa novación, en forma alguna de los respectivos créditos; los que conservarán hasta su extinción, sus garantías, privilegios, grado y prelación frente a las empresas expropiadas.

- B) Con el valor nominal representativo de títulos o bonos nacionales de deudas públicas que el Poder Ejecutivo podrá consignar al respecto, de conformidad a la resolución del Juzgado.
- C) El Poder Ejecutivo podrá igualmente utilizar la facultad que le acuerda el artículo 29 de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1953, a los efectos de complementar, si fuera necesario, el mencionado depósito previo”.

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, por el siguiente:

“Artículo 4º — Facúltase al Poder Ejecutivo para hacer funcionar, en la forma que crea más conveniente, los bienes de las empresas expropiadas que se mencionan en el artículo 1º.

Dicha facultad comprende la de darle a dichos bienes el destino que mejor se adecúe con su estado actual de conservación y la de arrendar o vender, sea los bienes de cada empresa por separado o globalmente los del conjunto económico, suscribiendo los documentos necesarios al efecto.

En los casos en que se decida continuar con la explotación de los bienes dentro de la industria frigorífica, el arrendamiento o venta podrá realizarse a empresas privadas o a cooperativas de producción que se constituyan con intervención de trabajadores y/o productores agropecuarios. El Poder Ejecutivo podrá asimismo proyectar la referida explotación por el Estado en forma directa o mediante las normas establecidas en el artículo 188 de la Constitución de la República.

A los efectos de este artículo no regirán las disposiciones legales vigentes en materia de licitación pública”.

Art. 3º — Derógase el artículo 6º de la Ley Nº 13.709, de fecha 27 de noviembre de 1968.

Art. 4º — Cualquiera sea la forma en que se organice la explotación de las empresas expropiadas, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 4º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, en la nueva redacción dada al mismo por la presente ley, ella sólo podrá ejecutarse si la empresa promitente compradora o arrendataria, cancela previamente el crédito del Banco de Previsión Social computado por integración del depósito previo e integrado con los aportes sobre salarios e impuestos a las transacciones agropecuarias impagos más los intereses devengados, o suscribe convenio de facilidades de pago que el Banco de Previsión Social podrá autorizar a los efectos de la amortización de dicho crédito, exigiendo las garantías que considere convenientes, sin perjuicio de mantener su privilegio y prelación de conformidad con las leyes aplicables.

Art. 5º — Suspéndese por el término de dos años a partir de la vigencia de esta ley, la ejecución de los juicios en trámite o que se inicien, promovidos por los acreedores de las empresas mencionadas en el artículo 1º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, incluyendo a aquellos que se sigan por acreedores con derechos reales en relación a los bienes sujetos a expropiación.

Los acreedores concurrirán en el grado y prelación que corresponda sólo contra los fondos depositados en el Banco de la República Oriental del Uruguay, procedentes de la indemnización expropiatoria de conformidad a lo previsto por la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo dará cuenta al Órgano Legislativo respecto a todo lo actuado en la materia reglamentada por la presente ley, en un plazo no mayor de doscientos cuarenta días contados a partir de la fecha de la promulgación de la misma.

Art. 7º — Comuníquese, etc.

Montevideo, 4 de abril de 1974.

JUAN MARIA BORDABERRY. — José E. Etcheverry Stirling. Moisés Cohen.

Anexo I.

CONSEJO DE ESTADO

Comisión de Industria y Comercio

INFORME

Al Consejo de Estado:

La Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto que se relaciona con la toma urgente de posesión de los bienes de las empresas Indagro S.A., Palmares de Castillos S.A. y San Carlos S.A. y destino que corresponde a sus actuales estados de conservación.

Luego de un detenido estudio de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, se ha inclinado a aprobarla en los mismos términos propuestos, con la sola excepción del plazo que se acuerda a ese Poder, para dar cuenta al Órgano Legislativo, respecto a lo actuado en esta materia (artículo 6º).

Por lo tanto aconsejamos su ratificación, en la seguridad de que de esta forma se contribuye a la rápida solución del problema planteado, sin perjuicio de las explicaciones o ampliación de información, que si fuere necesario brindaremos en oportunidad de su tratamiento por el Plenario.

Sala de la Comisión, 8 de mayo de 1974.

Eduardo Praderi, (Miembro Informante). Mario Jorge Coppetti. Alfredo Lamaison. Jesús Rubio. Jorge Spangenberg. Consejeros.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 3º — La integración del depósito previo para la toma de posesión de los bienes de las empresas Indagro S.A., Palmares de Castillos S.A. y San Carlos S.A. podrá realizarse en la siguiente forma:

- A) Computando los importes de las deudas de las respectivas empresas por obligaciones con el Estado por distintos conceptos, así como las que mantengan con Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas públicas no estatales administradoras de fondos de previsión social.

Estos créditos se computarán, en los procedimientos judiciales de ocupación urgente, por los importes que las reparticiones públicas e instituciones acreedoras establezcan, mediante liquidación debidamente certificada de sus respectivos créditos.

La forma de pago prevista por los incisos anteriores no importa novación, en forma alguna de los respectivos créditos, los que conservarán hasta su extinción, sus garantías, privilegios, grado y prelación frente a las empresas expropiadas.

- B) Con el valor nominal representativo de títulos o bonos nacionales de deudas públicas que el Poder Ejecutivo podrá consignar al respecto, de conformidad a la resolución del Juzgado.

- C) El Poder Ejecutivo podrá igualmente utilizar la facultad que le acuerda el artículo 29 de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1953, a los efectos de complementar, si fuera necesario, el mencionado depósito previo.”

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, por el siguiente:

“Artículo 4º — Facúltase al Poder Ejecutivo para hacer funcionar, en la forma que crea más conveniente, los bienes de las empresas expropiadas que se mencionan en el artículo 1º.

Dicha facultad comprende la de darle a dichos bienes el destino que mejor se adecúe con su estado actual de conservación y la de arrendar o vender; sea lo bienes de cada empresa por separado o globalmente los del conjunto económico, suscribiendo los documentos necesarios al efecto.

En los casos en que se decida continuar con la explotación de los bienes dentro de la industria frigorífica, el arrendamiento o venta podrá realizarse a empresas privadas o a cooperativas de producción que se constituyan con intervención de trabajadores y/o productores agropecuarios. El Poder Ejecutivo podrá asimismo proyectar la referida explotación por el Estado en forma directa o mediante las normas establecidas en el artículo 188 de la Constitución de la República.

A los efectos de este artículo no regirán las disposiciones legales vigentes en materia de licitación pública”.

Art. 3º — Derógase el artículo 6º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968.

Art. 4º — Cualquiera sea la forma en que se organice la explotación de las empresas expropiadas, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 2º de la presente ley, ella sólo podrá ejecutarse si la empresa promitente compradora o arrendataria, cancela previamente el crédito del Banco de Previsión Social computado por integración del depósito previo e integrado con los aportes sobre salarios e impuestos a las transacciones agropecuarias impagos más los intereses devengados, o suscribe convenio de facilidades de pago que el Banco de Previsión Social podrá autorizar a los efectos de la amortización de dicho crédito, exigiendo las garantías que considere convenientes, sin perjuicio de mantener su privilegio y prelación de conformidad con las leyes aplicables.

Art. 5º — Suspéndese por el término de dos años a partir de la vigencia de esta ley, la ejecución de los juicios en trámite o que se inicien, promovidos por los acreedores de las empresas mencionadas en el artículo 1º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, incluyendo a aquellos que se sigan por acreedores con derechos reales en relación a los bienes sujetos a expropiación.

Los acreedores concurrirán en el grado y prelación que corresponda sólo contra los fondos depositados en el Banco de la República Oriental del Uruguay, procedentes de la indemnización expropiatoria de conformidad a lo previsto por la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo dará cuenta al Organismo Legislativo respecto a todo lo actuado en la materia reglamentada por la presente ley, en un plazo no mayor de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de la promulgación de la misma.

Art. 7º — Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 8 de mayo de 1974.

Eduardo Praderi, (Miembro Informante). Mario Jorge Coppetti. Alfredo Lamaison. Jesús Rubio. Jorge Spangenberg. Consejeros".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En discusión general.

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—20 en 21. Afirmativa.

Se pasa a la discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—18 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR PRADERI. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — No he querido informar este proyecto, señor Presidente, porque entiendo que los fundamentos que se exponen en el repartido son lo suficientemente claros.

Agrego, solamente, un pequeño detalle. Estos tres frigoríficos, que tenían originalmente un mismo dueño, están en condiciones totalmente distintas uno de otro. De manera que el tratamiento particular de cada uno de ellos, o sea, la posibilidad de hacerlos funcionar en la forma que se crea más conveniente, cuando dice "dicha facultad comprende la de darle a dichos bienes el destino que mejor se adecúe al estado actual de conservación", merece una aclaración. Algunos de estos locales han sido totalmente desmantelados; en consecuencia, en la actualidad los tres no son exactamente frigoríficos.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Si no hay otras observaciones, se va a votar.

(Se vota:)

—21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—16 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

—Si no se observa, se va a votar.

(Se vota:)

—17 en 22. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

Artículo 1º — Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 3º — La integración del depósito previo para la toma de posesión de los bienes de las empresas Indagro S. A., Palmares de Castillos S. A. y San Carlos S. A., podrá realizarse en la siguiente forma:

A) Computando los importes de las deudas de las respectivas empresas por obligaciones con el Estado por distintos conceptos, así como las que mantengan con Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas públicas no estatales administradoras de fondos de previsión social.

Estos créditos se computarán, en los procedimientos judiciales de ocupación urgente, por los importes que las reparticiones públicas e instituciones acreedoras establezcan, mediante liquidación debidamente certificada de sus respectivos créditos.

La forma de pago prevista por los incisos anteriores no importa novación, en forma alguna de los respectivos créditos, los que conservarán hasta su extinción, sus garantías, privilegios, grado y prelación frente a las empresas expropiadas.

- B) Con el valor nominal representativo de títulos o bonos nacionales de deudas públicas que el Poder Ejecutivo podrá consignar al respecto, de conformidad a la resolución del Juzgado.
- C) El Poder Ejecutivo podrá igualmente utilizar la facultad que le acuerda el artículo 29 de la Ley Nº 11.925, de 27 de marzo de 1959, a los efectos de complementar, si fuera necesario, el mencionado depósito previo".

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 4º de la Ley número 18.709, de 27 de noviembre de 1968, por el siguiente:

"Artículo 4º — Facúltase al Poder Ejecutivo para hacer funcionar, en la forma que crea más conveniente, los bienes de las empresas expropiadas que se mencionan en el artículo 1º.

Dicha facultad comprende la de darle a dichos bienes el destino que mejor se adecúe con su estado actual de conservación y la de arrendar o vender, sea los bienes de cada empresa por separado o globalmente los del conjunto económico, suscribiendo los documentos necesarios al efecto.

En los casos en que se decida continuar con la explotación de los bienes dentro de la industria frigorífica, el arrendamiento o venta podrá realizarse a empresas privadas o a cooperativas de producción que se constituyan con intervención de trabajadores y/o productores agropecuarios. El Poder Ejecutivo podrá asimismo proyectar la referida explotación por el Estado en forma directa o mediante las normas establecidas en el artículo 188 de la Constitución de la República.

A los efectos de este artículo no regirán las disposiciones legales vigentes en materia de licitación pública".

Art. 3º — Derógase el artículo 6º de la Ley número 13.709, de 27 de noviembre de 1968.

Art. 4º — Cualquiera sea la forma en que se organice la explotación de las empresas expropiadas, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 2º de la presente ley, ella sólo podrá ejecutarse si la empresa promitente compradora o arrendataria, cancela previamente el crédito del Banco de Previsión Social computado por integración del depósito previo e integrado con los aportes sobre salarios e impuestos a las transacciones agropecuarias impagos más los intereses devengados, o suscribe convenio de facilidades de pago que el Banco de Previsión Social podrá autorizar a los efectos de la amortización de dicho crédito, exigiendo las garantías que considere convenientes, sin perjuicio de mantener su privilegio y prelación de conformidad con las leyes aplicables.

Art. 5º — Suspéndese por el término de dos años a partir de la vigencia de esta ley, la ejecución de los juicios en trámite o que se inicien, promovidos por los acreedores de las empresas mencionadas en el artículo 1º de la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968,

incluyendo a aquellos que se sigan por acreedores con derechos reales en relación a los bienes sujetos a expropiación.

Los acreedores concurrirán en el grado y prelación que corresponda sólo contra los fondos depositados en el Banco de la República Oriental del Uruguay, procedentes de la indemnización expropiatoria de conformidad a lo previsto por la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo dará cuenta al Organismo Legislativo respecto a todo lo actuado en la materia reglamentada por la presente ley, en un plazo no mayor de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de la promulgación de la misma.

Art. 7º — Comuníquese, etc.

21. — FRIGORIFICO PALMARES DE CASTILLO S. A.

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en tercer término de la orden del día: Frigorífico Palmares de Castillo S. A. (Intervención). (Decreto del Poder Ejecutivo de 5 de abril de 1974). (Carp. 363/974). (Informado). (Rep. 402 y Anexo I).

SEÑOR PRADERI. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — Propongo que no se haga la lectura de los artículos. Luego, como miembro informante, haré algunos comentarios.

(Apoyados.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — La Secretaría expresa que la Comisión no formuló proyecto. ¿Se entiende que está de acuerdo con el del Poder Ejecutivo?

SEÑOR PRADERI. — Exactamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar la moción en el sentido de que se suprima la lectura.

(Se vota.)

—19 en 22. Afirmativa.

(Antecedentes.)

Repartido Nº 402 de 1974.

"PODER EJECUTIVO.

Ministerio de Industria y Comercio

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Ganadería y Agricultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de abril de 1974.

Al Consejo de Estado:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, a fin de poner en su conocimiento que en el día de la fecha ha dictado un decreto por el cual el Instituto Nacional de Carnes intervendrá la planta industrial del Frigorífico Palmares de Castillos S. A.

Las razones que ha tenido en cuenta el Poder Ejecutivo para tomar tal decisión son las enunciadas en la parte expositiva del referido decreto, cuya copia se acompaña.

Saludo a ese Alto Cuerpo con mi mayor consideración.

JUAN MARIA BORDABERRY. José E. Etcheverry Stirling. Hugo Linares Brum. Walter Ravenna. Benito Medero. Moisés Cohen.

Montevideo, 5 de abril de 1974.

Visto: la especial situación del mercado de carnes vacunas y la carencia de cámaras de frío;

Resultando: I) la Ley Nº 13.709, de fecha 27 de noviembre de 1968 declaró de utilidad pública la expropiación de los bienes que integran el activo de las empresas Indagro S. A., Palmares de Castillos S. A. y San Carlos S. A. y encomendó al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Industria y Comercio gestione la misma así como su toma urgente de posesión;

II) en cumplimiento de tal mandato, dicha Secretaría de Estado promovió, ante el Juzgado Letrado Nacional de Hacienda y de lo Contencioso-Administrativo de Primer Turno, los procedimientos de ocupación urgente los cuales se encuentran próximos a culminar;

III), el Poder Ejecutivo, en esta misma fecha, remitió al Consejo de Estado un proyecto de ley tendiente a facilitar la citada toma de posesión;

Considerando: I) que es necesario disponer de inmediato de la totalidad de las cámaras de frío existentes en el país a efectos de arbitrar todas las medidas conducentes a una óptima comercialización de nuestras carnes vacunas;

II) que la intervención de la planta industrial del Frigorífico Palmares de Castillos S. A., para utilizar sus cámaras refrigeradoras no sólo está indicada por el interés nacional de acuerdo a las consideraciones antedichas sino que, por otra parte, sólo significa adoptar una medida transitoria que será reemplazada por la toma de posesión en vía judicial inmediatamente que sea sancionado el proyecto de ley referido;

Atento: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 168 numeral 17 de la Constitución de la República y por las normas de la Ley Nº 10.940, de 19 de setiembre de 1947; el Presidente de la República,

DECRETA:

Artículo 1º — El Instituto Nacional de Carnes intervendrá la planta industrial del Frigorífico Palmares de Castillos S. A. situada en la ciudad de Castillos 4ª Sección Judicial del departamento de Rocha, a fin de ponerlos a disposición del Interventor que se designa en el artículo siguiente.

La toma de posesión y la entrega de los bienes se harán bajo inventario.

Art. 2º — Designase Interventor al señor Raúl Agapito Zeballos Bonilla.

Art. 3º — El Interventor tomará inmediata posesión de los bienes intervenidos y organizará su explotación, con carácter provisional, con los siguientes cometidos:

- a) Acondicionar, a la mayor brevedad posible, las cámaras de frío existentes en la referida planta industrial a efectos de recepcionar, en las mismas de acuerdo con las directivas y distribución que indique el Instituto Nacional de Carnes, los envíos de carne congelada por parte de los frigoríficos exportadores.
- b) Proyectar las obras necesarias para construir nuevos depósitos de frío, solicitando los presupuestos pertinentes.
- c) Informar trimestralmente al Instituto Nacional de Carnes sobre la gestión cumplida.
- d) Percibir las sumas correspondientes a los arrendamientos que de las cámaras se efectúe a los frigoríficos exportadores.

Art. 4º — El Interventor dirigirá y administrará la planta industrial para cuyos efectos podrá contratar todo el personal indispensable y podrá otorgar todo género de actos y contratos así como cumplir operaciones bancarias relacionadas con la explotación del establecimiento intervenido.

Art. 5º — El personal se contratará con carácter precario y eventual y se pagará con cargo al producido de la empresa.

Art. 6º — Los gastos urgentes que demande la reparación y puesta en funcionamiento de las cámaras de frío se imputarán con cargo a la cuenta "Fondo de Inversiones de la Industria Frigorífica" del Banco de la República Oriental del Uruguay, por un monto máximo de \$ 80.000.000 (ochenta millones de pesos).

Art. 7º — Dentro de los sesenta días inmediatos a haber asumido el cargo, el Interventor propondrá al Instituto Nacional de Carnes la suma que deberá abonarse por retribución del uso de los bienes intervenidos.

Art. 8º — El Ministerio de Industria y Comercio adoptará las medidas complementarias requeridas para el buen éxito de la gestión del señor Interventor y fijará la retribución que deberá abonársele a éste.

Art. 9º — Comuníquese, etc.

JUAN MARIA BORDABERRY. José E. Etcheverry Stirling. Hugo Linares Brum. Walter Ravenna. Benito Medero. Moisés Cohen.

Anexo 1.

CONSEJO DE ESTADO

Comisión de Industria y Comercio

INFORME —

Al Consejo de Estado:

La Comisión de Industria y Comercio ha tomado conocimiento del Decreto del Poder Ejecutivo de 5 de abril de 1974, por el cual, en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad, se establece que el Instituto Nacional de Carnes intervendrá la planta industrial del Frigorífico Palmares de Castillos S. A., situada en la ciudad de Castillos, 4ª Sección Judicial del departamento de Rocha.

Cumplido el envío conforme a lo establecido en el inciso 17, del artículo 168, de la Constitución de la República, esta Comisión, atendiendo a las motivaciones contenidas en la parte expositiva del referido decreto, ha considerado oportuno prestarle su aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de mayo de 1974.

Eduardo Praderi, Miembro Informante. Mario Jorge Coppetti. Alfredo Lamaison. Jesús Rubio. Jorge Spangenberg. Consejeros”.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En discusión general.

SEÑOR VIANA REYES. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR VIANA REYES. — Señor Presidente: voy a hacer algunas reflexiones que, en realidad, no se refieren al fondo mismo de la cuestión. Me parece oportuno distraer unos minutos la atención del Consejo para meditar sobre ellas.

Se trata, señor Presidente, de prestar aprobación —o desaprobar— a un decreto del Poder Ejecutivo dictado en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad previstas por el artículo 168, numeral 17 de la Constitución de la República. Es un Decreto dictado el 5 de abril de 1974, es decir, luego de la existencia del Cuerpo Legislativo que integramos en el presente momento.

Me doy cuenta de que las reflexiones que voy a formular, en verdad, pueden obedecer a un desajuste entre

la realidad económico-social que vive el país y el texto de la Constitución. Me hago cargo de ello perfectamente y es precisamente en mérito a ese razonamiento que entiendo que estas situaciones deberán ser tenidas en cuenta muy particularmente en el momento en que el Consejo de Estado se aboque a considerar la reforma del texto constitucional.

Es posible que estos ejemplos nos sirvan para que revisemos un poco el mecanismo de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y para que contemplemos algún caso dado por el Derecho Comparado moderno, contemporáneo, en cuanto otorgan al órgano ejecutivo una mayor discrecionalidad en su actuación, sin perjuicio de la existencia de aquél, representativo de la voluntad popular. Eso es para una futura oportunidad, señor Presidente. Aquí, nos estamos manejando con un determinado texto constitucional que hemos entendido que sigue vigente, luego de los sucesos ocurridos el 27 de junio de 1973, sin perjuicio, desde luego, de las modificaciones que el decreto principal de esa fecha introdujo al ordenamiento institucional.

Con ese planteo, señor Presidente, me permito observar que nuevamente se vuelve a hacer uso aquí del mecanismo formal de las Medidas Prontas de Seguridad para solucionar una determinada situación. Me atreví a decir que el artículo 168, numeral 17 de la Constitución, debe ser la disposición normativa más citada y menos leída en los últimos años, en la República. Digo la disposición normativa más citada, porque son innumerables las Medidas Prontas de Seguridad que han sido dictadas durante este ejercicio constitucional y el anterior, y la menos leída, porque cualquier persona que en su sano juicio se encuentre, con sólo leerla —no precisa tener otros conocimientos que los de cualquier hombre medio— se puede dar cuenta que con este rótulo se han tratado las cuestiones más diversas y más alejadas de la realidad, previstas por el texto constitucional.

Por eso, señor Presidente, con los respetos debidos, me voy a permitir leer la parte fundamental de este artículo: “tomar Medidas Prontas de Seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta dentro de las 24 horas, ...” etc.

Pregunto, señor Presidente, —con toda la amplitud que se quiera dar a este pasaje de la Constitución— refiriéndonos al caso concreto que nos ocupa, ¿dónde está el caso grave e imprevisto de ataque exterior o conmoción interior que motiva este pedido? Si se me convence de que realmente existe algunas de esas situaciones, desde luego, formalmente, me voy a sentir habilitado para votar la aprobación de estas Medidas Prontas de Seguridad.

Quiero destacar que no voy a hacer cuestión en cuanto al fondo de este problema, pero me he permitido distraer la atención del Consejo por algunos minutos a fin de reflexionar un momento sobre cuál es el papel que formalmente desempeña, en este momento, en la realidad político-institucional del país.

Con una expresión un tanto vulgar y a pesar de las críticas que se nos puedan hacer, creo que el Consejo

de Estado ha pagado ya "derecho de piso" en el país, con las múltiples iniciativas —que no califico— que ha aprobado. Estimo que este Cuerpo ha prestado la prioridad necesaria a las situaciones urgentes; que ha dado un ejemplo a la nación de un gobierno en colaboración con el Poder Ejecutivo.

En este estado de ánimo, señor Presidente —lo digo con pesar, con dolor, pero con absoluto convencimiento— creo que la secuela de este procedimiento empleado, quizás con la mejor buena voluntad (lo que no pongo en discusión) supone una desconsideración institucional para con este Cuerpo.

Parecería, señor Presidente, que hay determinados proyectos de ley que son urgentes, pero que, sin embargo, pueden venir al Consejo de Estado y encontrar eco, como el que hemos aprobado en la tarde de hoy, referente a la represa del Palmar. En cambio, da la impresión de que hay otras situaciones que también reclaman la sanción de una ley y, sin embargo, a pesar de ser urgentes no pueden venir a conocimiento del Consejo de Estado. Si es así, permítaseme que refleje mi inquietud, o más aún, mi dolor ante el convencimiento de que la función que cumple este Cuerpo no ha sido bien entendida por todos los órganos públicos de este país. Repito que no voy a abrir opinión sobre el fondo de la cuestión, pero me ha parecido oportuno hacer esta reflexión en voz alta para que mis compañeros de Cuerpo conozcan cuál es mi estado de ánimo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — La Mesa cree conveniente ilustrar al Consejo respecto de la naturaleza de este asunto y del trámite seguido.

Es un acto tomado en Medidas Prontas de Seguridad, como acaba de exponer el señor Consejero Viana Reyes, y que pasó a estudio de la Comisión de Industria y Comercio, que conoce el fondo del asunto. De acuerdo con nuestro Reglamento, como Medida Pronta de Seguridad, parecería que debe tener conocimiento, previamente, la Comisión de Interior.

El Consejo decidirá si se pasa el tema a la Comisión de Interior o se aprueban las medidas con el informe de la Comisión de Industria y Comercio, que no es la que reglamentariamente está capacitada para decidir por sí sola.

SEÑOR PRADERI. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — Sin entrar a medir las condiciones a las cuales se ha referido el señor Consejero Viana Reyes, expreso que se repite aquí el problema de fondo que mencionamos en los temas tratados anteriormente.

El hecho real es que a la fecha de este decreto, o del envío del mismo al Consejo de Estado, o sea el 5 de abril de 1974, el país sufría una grave crisis debido a la falta de cámaras y por el mercado de carnes. De las tres plantas que pertenecieron al señor Sayous, a la única que le ha quedado algo, ya que las otras han sido

desmanteladas mientras se seguía el trámite de expropiación, es a esta de Palmares de Castillos la cual posee instalaciones y equipos que, relativamente con pequeños gastos, pueden transformarse en cámaras útiles, no digo en frigoríficos, pero sí en cámaras donde se podría hacer almacenaje de carnes.

Este es el sentido del decreto. Si bien anteriormente votamos un régimen por el cual mediante un depósito previo se podría ocupar la planta de inmediato por éste, si bien, hacemos lo mismo en cambio, va a ser con carácter transitorio.

SEÑOR LABADIE ABADIE. — No dudo de la veracidad de las palabras del señor Consejero Praderi, pero veo que en los fundamentos del decreto se dice que el Ministerio de Defensa Nacional necesita construir en forma urgente un cuartel.

SEÑOR PRADERI. — El señor Consejero Labadie Abadie se está refiriendo al numeral cuarto de la orden del día; ahora estamos tratando lo relativo al frigorífico de Palmares de Castillo. Del frigorífico de San Carlos, precisamente, se llevaron todas las máquinas y solamente dejaron el galpón. Pero, en el frigorífico Palmares de Castillo todavía hay equipos, compresores y cámaras que pueden ser reacondicionados y utilizados. Por lo tanto, mientras se concluya un trámite que llevará, aproximadamente, seis años de expropiación, lo que se solicita por medio de esta ley es que se permita la ocupación inmediata por Inac, con carácter transitorio, y dándole los mismos cometidos que tuvo la Comisión Interventora, y que no pudo llevar a cabo.

En consecuencia, el espíritu de esta ley está fundado en una razón de urgencia que es dramática, ya que el Uruguay ha tenido que alquilar cámaras a la Argentina para almacenar carnes, mientras aquí esperamos un trámite legal que durará aproximadamente seis años.

SEÑORA ALVAREZ DE SILVA LEDESMA. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra la señora Consejera.

SEÑORA ALVAREZ DE SILVA LEDESMA. — Señor Presidente: quiero decir que conozco personalmente este frigorífico de Palmares de Castillo y, por lo tanto, comparto lo expresado por el señor Consejero Praderi. Existe una razón de urgencia que obliga a aprobar en el día de hoy esta medida.

Este frigorífico posee cámaras muy amplias; se encuentra completamente instalado; se halla inactivo desde hace varios años —creo que desde 1965— no obstante lo cual las máquinas actualmente funcionan con toda normalidad. Repito, que posee amplias cámaras que podrían ser ocupadas con cantidad de productos. Precisamente, en el pueblo de Castillos existió gran malestar cuando nuestro país apareció arrendando cámaras en el extranjero mientras que la de Castillos permanecía inactiva. Por otra parte, el frigorífico Palmares de Castillos era la única fuente de trabajo que existía en el pueblo. Cuando el frigorífico trabajaba, el pueblo de Castillos había cambiado su fisonomía; se habían reabierto frigo-

ríficos; los carpinteros y la construcción trabajaban con toda normalidad; la gente andaba en bicicleta o en moto; se compraban terrenos en cuotas, a la vez que se hicieron gran cantidad de fraccionamientos. Cerrado el frigorífico toda esta situación fue decayendo paulatinamente. La población de Castillos vino a Montevideo, recorría las distintas oficinas de Montevideo pidiendo ayuda, para que su única fuente de trabajo se reabriera. Sin embargo, no fueron escuchados, o chocaban con la indiferencia que existe en Montevideo por los problemas del interior del país.

Por todas estas razones, señor Presidente, entiendo que no debe dilatarse la aprobación de esta medida. Si bien comparto los fundamentos expresados por el señor Consejero Viana Reyes en cuanto a que no puede hacerse un uso abusivo de las Medidas Prontas de Seguridad, en este caso pienso que fueron bien utilizadas porque la urgencia con que se necesita reabrir este frigorífico no puede esperar a la dilucidación de todo un trámite que, seguramente, llevaría muchos años.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR REYES. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR REYES. — Señor Presidente: en términos generales comparto las inquietudes del señor Consejero Viana Reyes con respecto a la aplicación extensiva de la norma del numeral 17 del artículo 168 de la Constitución de la República. Sin embargo, me permito señalar que en los casos de conmoción interior que allí se señalan, y que serían los únicos aplicables al caso, su calificación es, en cierto sentido, subjetiva y privativa del Poder Ejecutivo. El órgano legislativo, lo que puede hacer, es aprobarla, modificarla, o negarla y disponer su levantamiento. En este sentido, tenemos completa libertad de análisis.

Los argumentos que acaba de exponer la señora Consejera Alvarez de Silva Ledesma me inclinan a darle el voto a este proyecto de ley. Hay que advertir que una vez levantadas las Medidas Prontas de Seguridad, ésta caerá por sí sola.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — El Cuerpo tendría que considerar si se aprueba esta Medida de Seguridad, tal como está en el informe, o se pide uno nuevo de la Comisión de Interior.

SEÑOR VIANA REYES. — ¿Me permite, señor Presidente, para contestar una alusión?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR VIANA REYES. — Creo, en primer lugar, que es competencia del Consejo, subjetiva si se quiere, calificar también si al caso se da o no el concepto de conmoción interior.

SEÑOR REYES. — Apoyado.

SEÑOR VIANA REYES. — Pienso que no puede confundirse, ni natural ni jurídicamente, la urgencia con la conmoción. Son dos conceptos absolutamente diferentes y existen instrumentos para encarar uno y el otro.

En segundo lugar, y siempre vinculado a este mismo problema, entiendo que toda esta situación de que se habla con respecto a lo vivido en Castillos y, particularmente, con relación a los frigoríficos, se prolonga en el tiempo desde hace mucho, de modo tal que de ninguna manera puede invocarse el carácter de imprevisto que prevé la norma constitucional. Por lo tanto, ni por conmoción interior, ni por imprevisto, esto puede funcionar como Medida Pronta de Seguridad.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En consideración el planteamiento de la Mesa. El asunto, ¿se aprueba sin informe de la Comisión de Interior?

SEÑOR ESPINOLA. — Solicitaría al señor Presidente que dividiera la moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Se va a votar si este asunto pasa a la Comisión de Interior.

(Se vota:)

—9 en 20. Negativa.

Corresponde, entonces, aprobar el asunto como Medida Pronta de Seguridad. Como no hay proyecto de resolución, la Secretaría propone el siguiente texto.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Mata). — "Proyecto de resolución. Artículo 1º — Apruébase el Decreto dictado por el Poder Ejecutivo de 5 de abril de 1974, en calidad de Medidas Prontas de Seguridad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 168, numeral 17 de la Constitución de la República, por el que se dispone la intervención de la planta industrial del Frigorífico Palmares de Castillos S. A., por parte del Instituto Nacional de Carnes. — Artículo 2º — Comuníquese, etc."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — En consideración.

Si no se hace uso de la palabra se votará.

(Se vota:)

—16 en 20. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR CARDOSO ARRARTE. — ¿Me permite, señor Presidente, para fundamentar el voto?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR CARDOSO ARRARTE. — Señor Presidente: sin desmerecer en nada las razones expuestas en Sala por los distintos Consejeros que han intervenido en el asunto, con respecto al aspecto formal, expreso que he votado afirmativamente el proyecto anterior, fundamentalmente, por las razones de urgencia que tiene el país para definir el problema de carnes.

Por ende, las cámaras del Frigorífico Palmares de Castillo, entiendo que sería una buena colaboración a esa urgencia, que no entro a calificar si cabe o no dentro de los preceptos constitucionales.

Nada más.

(No se publica el proyecto de resolución aprobado, por ser igual al presentado.)

22. — FRIGORIFICO SAN CARLOS S. A.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — A consideración el último punto de la orden del día: Frigorífico San Carlos S. A. (Ocupación por parte del Ministerio de Defensa Nacional) (Resolución del Poder Ejecutivo de 5 de abril de 1974) (Carp. 364/974) (Informado). (Rep. 403 y Anexo I).

(Antecedentes:)

Repartido Nº 403 de 1974.

“PODER EJECUTIVO

Ministerio de Industria y Comercio

Ministerio de Ganadería y Agricultura

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de abril de 1974.

Al Consejo de Estado:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, a fin de poner en su conocimiento que en el día de la fecha ha dictado una resolución por la que se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a ocupar la planta industrial del Frigorífico San Carlos S. A.

Las razones que ha tenido en cuenta el Poder Ejecutivo para tomar tal decisión son las enunciadas en la parte expositiva de la referida resolución, cuya copia se acompaña.

Saludo a ese Alto Cuerpo con mi mayor consideración.

JUAN MARIA BORDABERRY. José E. Etcheverry Stirling. Benito Medero. Hugo Linares Brum. Walter Ravenna. Moisés Cohen.

Montevideo, 5 de abril de 1974.

Visto: lo dispuesto por la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968;

Resultando: I) que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Comercio, ha promovido los procedimientos de ocupación urgente de los bienes, entre otros, que integran el activo de la empresa San Carlos S. A. los cuales se encuentran próximos a culminar;

II) que, en esta misma fecha, se remite al Consejo de Estado un proyecto de ley que tiende a facilitar la citada toma de posesión y que permite al Poder Ejecutivo darle a cada planta industrial el destino que mejor se adecúe a su estado actual de funcionamiento y conservación;

III) que la planta del frigorífico San Carlos S. A. se encuentra totalmente desmantelada en lo que se refiere a maquinaria y que sólo se conserva su estructura exterior;

IV) que el Ministerio de Defensa Nacional necesita construir, en forma urgente, un cuartel en las proximidades de la ciudad de San Carlos a efectos de asegurar el mantenimiento del orden público y preservar la seguridad nacional;

Considerando: que es aconsejable reequipar la planta de San Carlos S. A. para volver a funcionar como frigorífico exportador pero la misma puede servir perfectamente a los fines requeridos por el Ministerio de Defensa Nacional;

Atento: a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 168 numeral 17 de la Constitución de la República, el Presidente de la República,

RESUELVE:

Artículo 1º — Autorízase al Ministerio de Defensa Nacional a ocupar la planta industrial del frigorífico San Carlos S. A. situada en la proximidad de la ciudad de San Carlos 6ª Sección Judicial del departamento de Maldonado, a adecuar su infraestructura a efectos de cumplir los fines referidos en la parte enunciativa de la presente resolución, y darle el destino que mejor se avena a su actual estado de conservación y funcionamiento.

Art. 2º — Comuníquese, etc.

JUAN MARIA BORDABERRY. José E. Etcheverry Stirling. Benito Medero. Hugo Linares Brum. Walter Ravenna. Moisés Cohen.

Anexo 1.

CONSEJO DE ESTADO

Comisión de Industria y Comercio

INFORME

Al Consejo de Estado:

La Comisión de Industria y Comercio ha tomado conocimiento de la Resolución del Poder Ejecutivo de 5

de abril de 1974, por la cual, en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad, se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a ocupar la planta industrial del Frigorífico San Carlos S. A., situada en la proximidad de la ciudad de San Carlos, 6ª Sección Judicial del departamento de Maldonado.

Cumplido el envío conforme a lo establecido en el inciso 17 del artículo 168 de la Constitución de la República, esta Comisión, atendiendo a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la referida Resolución, ha considerado oportuno prestarle su aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de mayo de 1974.

Eduardo Praderi, Miembro Informante. Mario Jorge Coppetti. Alfredo Lamaison. Jesús Rubio. Jorge Spangenberg. Consejeros".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Como en el caso anterior, no hay proyecto de resolución. La Mesa somete a consideración del Consejo el proyecto respectivo que es de práctica.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Mata). — "Proyecto de resolución.

Artículo 1º — Apruébase la Resolución dictada por el Poder Ejecutivo, de 5 de abril de 1974, en calidad de Medidas Prontas de Seguridad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 168, numeral 17 de la Constitución de la República, por la que se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a ocupar la planta industrial del Frigorífico San Carlos S. A.

Art. 2º — Comuníquese, etc."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — A consideración.

SEÑOR LABADIE. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR LABADIE. — Señor Presidente: voy a hacer enteramente mías las inquietudes que ha evidenciado el señor Consejero Viana Reyes, además quiero aclarar que en oportunidad de votar la moción propuesta por la Mesa, que creo que no hacía otra cosa que pretender que el procedimiento se rigiera por las normas reglamentarias, lo hice afirmativamente porque no sólo era lo reglamentario, repito, sino que además se daba una oportunidad muy afortunada para que se estudiara el fondo del problema planteado por el Consejero Viana Reyes en la Comisión respectiva que debe estudiarlo, sin perjuicio de que después se pueda deliberar sobre el tema en el Plenario.

En este caso voy a hacer mía la moción de la Mesa y sugerir que este asunto pase a la Comisión del Inte-

rior, porque presumo que aquí ni siquiera las razones de extrema urgencia, que se invocaban en el caso anterior, pueden ser alegadas.

Finalmente, quiero señalar que este decreto dictado al amparo de Medidas Prontas de Seguridad y que se somete a consideración del Consejo es en sí mismo contradictorio, tanto en uno de sus considerandos, como con una ley anterior que se había votado. De ahí la razón del por qué sufrí el trabucamiento de hace un momento con los dos frigoríficos.

En el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se sometió a consideración del Consejo el proyecto que se aprobó recientemente, se dice, en uno de sus párrafos: "el mismo tiende a facilitar la toma urgente de posesión de los bienes de las empresas, —etcétera,— y a darles a los mismos el destino más apropiado, de acuerdo al actual estado de conservación".

En el último considerando del decreto que ahora estamos analizando se dice que "es aconsejable reequipar la planta de San Carlos, para volver a funcionar como frigorífico exportador, pero la misma puede servir, etc."

Quiere decir que de acuerdo al problema más general y tan grave de la industria frigorífica, se entiende que es aconsejable reequiparla, pero acto seguido se le destina a cuartel en la proximidad de la ciudad de San Carlos.

Entiendo que tanto el aspecto formal —al llamarlo formal tal vez lo sub-valoramos, porque parece que es muy de fondo, muy primordial y de principios; es formal en cuanto es adjetivo, en cuanto a procedimiento— que señalaba el Consejero Viana Reyes como el fundamento mismo de este decreto, deben ser considerados detenidamente por la Comisión del Interior, como lo sugirió la Mesa.

Hago mía esa moción y la someto a consideración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Es moción de orden, no admite debate.

(Se vota:)

—16 en 20. Afirmativa.

Pasa a la Comisión del Interior.

SEÑOR VIANA REYES. — ¿Me permite, para fundar el voto?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR VIANA REYES. — El planteamiento hecho por el Consejero Labadie Abadie, reglamentariamente, impidió que yo formulara las mismas observaciones que tuve con respecto al asunto anterior, en relación a éste. Hago mías las expresiones que él ha formulado, a vía de fundamento de mi voto.

Efectúo esta puntualización porque en estas cuestiones, y en este momento que vive el país, ciertos silencios pueden ser considerados inconvenientes.

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RODRIGUEZ LARRETA. — Quiero fundar mi voto, dejando constancia expresa de que tanto en este caso, como en el anterior, mi postura fue favorable a que pasara el asunto previamente a la Comisión del Interior. Creo que la exposición que ha hecho el Consejero Viana Reyes merece reflexión de este Consejo y el ámbito apropiado podría haber sido la Comisión del Interior. Lamento que en el caso anterior, muy similar a este, no haya, sin embargo, tenido acogida. Yo me mantuve, en los dos casos, en la misma posición.

SEÑOR RUBIO. — ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR RUBIO. — Quiero fundar mi voto conociendo sobre el terreno lo que se está considerando en este Consejo de Estado. Con respecto al Frigorífico Palmares de Castillos, he votado afirmativamente, tal como vino el proyecto de la Comisión. En cambio, teniendo muy en cuenta las manifestaciones formuladas por el señor Consejero Viana Reyes, he votado negativamente lo que se refiere a una planta denominada Frigorífico San Carlos. Como conozco las dos plantas personalmente, puedo establecer las diferencias de criterio por las cuales procedí de distinta manera. Frigorífico San Carlos es simplemente un galpón vacío. No tenemos un destino inmediato para darle. De manera que ahí se puede proceder como se ha hecho. En cambio, en el Frigorífico de Castillos existe urgencia y si esto se prolongara, no conduciría a nada porque esto va a producir más pérdidas. Por lo tanto entendimos que el Frigorífico de Castillos debía ser puesto en funcionamiento porque el país lo está necesitando como depósito de carne por las cámaras que tiene instaladas.

SEÑOR PRADERI. — Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR PRADERI. — Todo esto se ha debido a que no pude hablar como miembro informante. Si lo hubiera podido hacer, le hubiera explicado que lo de cuartel es para que el Ejército lo emplee como matadero, en San Carlos. Pero como se apuraron con la moción, no tuve oportunidad de decirlo. Por eso voté negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — La Mesa declara nuevamente que formulada una moción de orden debe votarse.

SEÑOR PRADERI. — De acuerdo.

23. — LANZAMIENTO DE OCUPANTES DE PREDIOS RURALES DESTINADOS A EXPLOTACIONES AGRARIAS

SEÑOR CARDOSO ARRARTE. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Tiene la palabra el señor Consejero.

SEÑOR CARDOSO ARRARTE. — En el día de ayer el Consejo de Estado, atendiendo a razones fundadas y a la importancia muy grande del tema; sancionó una ley prorrogando los lanzamientos rurales. Lamentablemente el articulado de la ley no cubrió todos los aspectos que la intención de la misma llevaba y que deberían haberse tenido en cuenta.

La citada ley careció de un artículo 2º en el cual se estableciera su vigencia inmediata luego de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo y de su publicación en dos diarios de la ciudad. Como es coincidente con la intención del Consejo al sancionar esta ley el apremio que existía para la misma, propongo que siguiendo un procedimiento que no es nuevo porque ya se aplicó en una situación similar, se trate en forma inmediata un proyecto de ley que obra en poder de la Mesa, por lo que solicito se le de lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Mata). — "Proyecto de ley.

Artículo 1º — Declárase que la Ley Nº 14.194, de 14 de mayo de 1974, entrará en vigencia luego de publicada en dos diarios de la capital.

Art. 2º — La presente ley también entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en dos diarios de la capital.

Art. 3º — Comuníquese, etc."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Méndez). — A consideración si se trata como grave y urgente.

(Se vota:)

—13 en 19. Afirmativa.

En discusión general.

Se va a votar.

(Se vota:)

—16 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee.)

—En consideración.

Se va a votar.

(Se vota:)

—18 en 19. Afirmativa.

En discusión el artículo 2º.

Léase.

(Se lee.)

—Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

—16 en 19. Afirmativa.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el proyecto de ley aprobado, por ser igual al presentado.)

24. — SE LEVANTA LA SESION

No habiendo más asuntos en la orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 25 minutos.)

Dr. APARICIO MENDEZ
Segundo Vicepresidente

Dn. Andrés M. Mata
Dr. Manuel María de la Bandera
Secretarios

Dn. Hugo Graceras Scaltritti
Director General del Cuerpo de Taquígrafos

DIARIO OFICIAL

SECCION AVISOS

TOMO 276

Montevideo, Lunes 22 de Julio de 1974

Núm. 19316

TARIFAS

AVISOS

(Resolución 1313/974 - 2 de julio de 1974)

Edictos judiciales y avisos oficiales:

Por cada publicación, el centímetro (20 palabras) \$ 400.00

Avisos particulares:

Por cada publicación, el centímetro (20 palabras) " 1.000.00

Balance por cada línea de columna chica o su equivalente " 800.00

Matrimonios de ciudad (perciéndolo directamente "Diario Oficial") " 1.800.00

Matrimonios del interior " 800.00

SUSCRIPCIONES

(Resolución 1313/974 - 2 de julio de 1974)

Retirando los ejemplares en la Oficina:

Por semestre \$ 13.200.00

Por año " 26.400.00

Ciudad, interior y exterior por Correo:

Por semestre \$ 16.800.00

Por año " 33.600.00

Reparto a domicilio

(Resolución del 26 de marzo de 1974)

La distribución de ejemplares está a cargo de una empresa particular que debe percibir directamente del suscriptor \$ 39.70 por ejemplar y por día. (El pago puede hacerse mensual, trimestral o semestral).

De acuerdo al Decreto de 2 de octubre de 1953 los avisadores de la Capital disponen hasta de quince días y los del interior hasta de treinta días para retirar previa presentación del recibo, el diario de la primera y última publicación que les corresponda, vencido el cual los diarios son cobrados según tarifa.

ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS

Con un capital hasta \$ 50.000.000	\$ 240.000	la página
De \$ 50.000.001 a " 100.000.000	" 410.000	" "
" " 100.000.001 " " 200.000.000	" 790.000	" "
" " 200.000.001 " " 300.000.000	" 1.090.000	" "
" " 300.000.001 " " 400.000.000	" 1.430.000	" "
" " 400.000.001 " " 500.000.000	" 1.770.000	" "

Se incrementará en \$ 350.000 el valor de la página por cada \$ 100.000.000 más de capital o fracción. Para las Cooperativas Rurales se dará el precio a mitad de tarifa.

El cálculo se realizará sobre la equivalencia del centímetro, esto es: contando doce palabras.

EJEMPLARES

(Resolución 1313/974 - 2 de julio de 1974)

Del día \$ 150.00

Atrasados " 300.00

De más de 15 días " 600.00

De más de 1 año " 900.00

De más de 3 años " 1.800.00

De más de 5 años " 2.400.00

Fotocopias de ejemplares agotados

la página

Hasta un año \$ 1.000.00

De más de un año " 1.400.00

De más de tres años " 1.800.00

De más de cinco años " 2.600.00

De más de diez años " 3.600.00

"DIARIO OFICIAL"

Florida 1178 — Teléf. 8 33 71

" 91 59 25

" 91 65 83

— ★ —

Creado por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 8 de mayo de 1905, el primer número apareció el 13 de setiembre del mismo año.

— ★ —

El Registro Nacional de Leyes y Decretos fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 12 de agosto de 1907, apareciendo el primer tomo en el año 1908.

Los suscriptores deben reclamar los ejemplares que no se le entreguen dentro de las 24 horas de efectuado el reparto, al teléfono 91-34-58.

Orden de publicación

- 1—Aperturas de Sucesiones
- 2—Caducidades de Promesas de Compras y Ventas
- 3—Convocatorias Comerciales
- 4—Dirección de Necrópolis
- 5—Disoluciones y Liquidaciones de Sociedades Conyugales
- 6—Disoluciones de Sociedades
- 7—Divorcios
- 8—Emplazamientos
- 9—Expropiaciones
- 10—Incapacidades
- 11—Informaciones de Vida y Costumbres
- 12—Licitaciones Públicas
- 13—Llamados a Acreedores
- 14—Matrimonios de Montevideo
- 15—Pagos de Dividendos
- 16—Prescripciones
- 17—Propiedad Literaria y Artística
- 18—Quiebras
- 19—Rectificaciones de Partidas
- 20—Remates
- 21—Segundas Copias
- 22—Sociedades de Responsabilidad Limitada
- 23—Trámites de Marcas
- 24—Trámites de Patentes de Invención y Privilegios Industriales
- 25—Ventas de Comercios
- 26—Violación a la ley de Subsistencias
- 27—Varios
- 27—Varios (Competitivo-Nacional)
- 28—Estatutos y Balances de Sociedades Anónimas

NOTA: La primera publicación de cualquier texto aparece en "AVISOS DEL DIA" que se encuentran en las últimas páginas del diario.

Los avisadores de la Capital, deben observar como aparecen sus textos correspondiendo que en el plazo de 24 horas indiquen los errores a subsanar. Para avisos del interior el plazo se amplía de acuerdo con la forma de realizarse el servicio de Correos. La demora en ordenar correcciones hace perder el derecho de reinsertión.

treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, junio 20 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario.
1) \$ 3.000 10pub. 11656 Jn.25-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno se hace saber la apertura de la sucesión de JOAQUIN ALFARO VALVERDE (S.170/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, junio 20 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario.
1) \$ 3.000 10pub. 11658 Jn.25-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MANUEL GARCIA VILLAVARDE (S.122/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, junio 13 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario.
1) \$ 3.000 10pub. 11660 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MANUELA ULLOA o ULLOA DOCAMPO de CAPPANO (S.246/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 13 de junio de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario.
1) \$ 3.000 10pub. 11657 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno se hace saber la apertura de la sucesión de la sucesión de MANUEL BALCARCEL VILAR MODESTO BALCARCEL YENDE o YENDE o GENDE y JESUSA GENDE o JENDE de BALCARCEL (S.260/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, junio 6 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario.
1) \$ 3.000 10pub. 11618 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA EUSEBIA DORNELL de ROSANO (S.238/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, junio 13 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario.
1) \$ 3.000 10pub. 11620 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto Turno se hace saber la apertura de la sucesión de ROBERTO PABLO SOSA IZQUIERDO (S.226/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, junio 14 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario.
1) \$ 3.000 10pub. 11628 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MANUEL SANTOS ANUNCIACION MACHADO CEJAS o SEJA (F.A. 232/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 16 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11618 Jn.25-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de AIBE RAUL MARTINEZ GARCIA (F.A. 122/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 30 de abril de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11662 Jn.25-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA LAURA VIANA de GREENWOOD (F.A. 296/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 13 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11622 Jn.21-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.23.

que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 13 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11722 Jn.21-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.26.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de ADAM METZINGER KELLER o ADAM METZINGER (F.A. 264/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 7 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11651 Jn.21-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.26.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de HUGO SCLAVO REGUEIRA (F.A. 260/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 7 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11676 Jn.21-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.26.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de JOSE ANTONIO SANTA ROSA BARBITTA (F.A. 272/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 7 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11699 Jn.21-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.26.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de PABLO SAVICHENKO ORINENKO (F.A. 270/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 13 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11715 Jn.21-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.26.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de ANA MINVILLE de CRISTIANI (F.A. 256/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 7 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11746 Jn.21-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.26.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de DOLORES PREGO GRELA de COMESANA (F.A. 220/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 22 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11721 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de BENITO ROSENDO BRANDI REGO (F.A. 306/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 13 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11581 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA FERREIRO de BUÑO (F.A. 280/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 18 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11623 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de ESTEBAN BERTALAN o BERTOLARI HOLANGI o HOLANY (F.A. 128/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 13 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11623 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

terceros, para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 16 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11684 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de CARMEN o MARIA del CARMEN PALLADINO de ALBERTI (F.A. 236/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 7 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11663 Jn.20-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de VELIA GONZALEZ CANEPA (F.A. 230/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 21 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11655 Jn.18-v.jn.22.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de JUAN EUGENIO VIERA (F.A. 226/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 22 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11424 Jn.18-v.jn.22.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de PAULA FREUND de NEUBERMAN (F.A. 226/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 13 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11423 Jn.18-v.jn.22.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de CARLOS MARIA POSE SOCCHES (F.A. 218/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 21 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11422 Jn.18-v.jn.22.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA ABILES o AVILES RAMOS de MONTEMUÑO (F.A. 212/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 21 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11422 Jn.18-v.jn.22.
Jl.22-v.jl.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA ROSENTHAL POMER de LANDAU (Ficha A. 181/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 21 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11238 Jn.17-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.27.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno se hace saber la apertura de la sucesión de FELIPE FRANCISCO LLAVAYOL GALLO (Ficha A. 164/74) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 14 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalia, Actuaría Adjunta.
1) \$ 3.000 10pub. 11373 Jn.17-v.jn.28.
Jl.22-v.jl.27.

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE OCTAVO TURNO

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Octavo Turno

Decimoquinto Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MARCELINO CANDELARIO o CANDELARIO MOREIRA o MOREIRA SARDENA (S-571973), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, junio 14 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11627 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de LIBERTAD MARTINEZ o MARTINEZ MOSTEIRO de VARGAS (S-85-974), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, junio 6 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11160 J1.18-v.j1.23. J1 22-v.j1.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoquinto Turno se hace saber la apertura de la sucesión de ANTONIO DERDERIAN (S-237574), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de noventa días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, mayo 24 de 1974. — José Tomás Pereira, Actuario. 1) \$ 18.000 30/pub. 10389 Jn.5-v.jn.23. J1 22-v.ag.7.

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE DECIMOSEXTO TURNO

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de JOSE SANJURJO MATA o MATTIA (F. A. 1871974) citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, abril 3 de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalla, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11809 Jn.25-v.jn.23. J1 22-v.j1.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MARTIN BAPTISTA SAREDO (F. A. 329174), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 7 de junio de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalla, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11713 Jn.21-v.jn.23. J1 22-v.j1.25.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de CONSUELO REGUEIRO de ROMERO (F. A. 287174), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 22 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalla, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11568 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA ANTONIA ACOSTA de MENDEZ, (F. A. 275174), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 16 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalla, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11622 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de EUGENIO SEGREDO, (F. A. 293174), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 22 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalla, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11447 Jn.18-v.jn.23. J1 22-v.j1.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA del ROSARIO MEDINA PALCON de DE LA NIEZ, (F. A. 377174), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir

en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 22 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalla, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11446 Jn.18-v.jn.23. J1 22-v.j1.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de MARIA ROSA LAPORTA CALCAGNC. (F. A. 283174), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 13 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalla, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11507 Jn.18-v.jn.23. J1 22-v.j1.23.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de RAMON ADEMAR FERNANDEZ (A13151970), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 29 de octubre de 1970. — Horacio Callabert, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11322 Jn.17-v.jn.23. J1 22-v.j1.22.

EDICTO. — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimosextos Turno, se hace saber la apertura de la sucesión de PAULA ELENA GONZALEZ (F. A. 3211974), citándose a los herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro del término de treinta días a deducir en forma sus derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 30 de mayo de 1974. — Esc. Ada Nosal de Fonsalla, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11334 Jn.17-v.jn.23. J1 22-v.j1.22.

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE DECIMOSEPTIMO TURNO

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoseptimo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de ANDRES ANDRES G. o ANDRES GILBERTO HERRERA (F. 325174), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, 4 de junio de 1974. — Zólima L. Martino Uthurburu, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11562 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoseptimo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de SEVERINO GONZALEZ o SEVERINO GONZALEZ GONZALEZ (F. 341170), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, 24 de febrero de 1971. — Alberto Martínez Irigoyen, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11594 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoseptimo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de ELSA ANGELICA CABRERA (F. 289174), citándose a herederos acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, 24 de mayo de 1974. — Zólima L. Martino Uthurburu, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11582 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoseptimo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de EMILIANO GERONIMO PEREZ GARCIA (F. 643172), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, 20 de mayo de 1974. — Zólima L. Martino Uthurburu, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11624 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoseptimo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de BRUNO o BRONIS SABRINSKAS CRASANKAS o PRASAUSKAS o PRASAUKAS (F. 331174), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, 7 de junio de 1974. — Zólima L. Martino Uthurburu, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11626 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoseptimo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de GERMAN BERIC MELLI, (F. 301174), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta

días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, 21 de mayo de 1974. — Zólima L. Martino Uthurburu, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11471 Jn.18-v.jn.23. J1 22-v.j1.23.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoseptimo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de JOSE RAMA (F. 241174), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, 22 de abril de 1974. — Zólima L. Martino Uthurburu, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11657 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE DECIMOCTAVO TURNO

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de SAVERIO ALESSIA, (A. 171174), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, abril 15 de 1974. — Raúl A. Avondet, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11853 Jn.24-v.jn.23. J1 22-v.j1.26.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de JOSE VILARRUBI AMANDOLA (A. 295173), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, agosto 28 de 1973. — César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11593 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de MATILDE GUERRA de ALFONSO o ALFONZO (A. 3251970), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, setiembre 10 de 1970. — César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11580 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de MARIA SEGUNDINA SUAREZ (A. 629173), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, diciembre 6 de 1972. — César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11591 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de AMERICO GENTINI LABORDE (A. 469174), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, marzo 18 de 1974. — César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11589 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de MARIA CARBONE de POMBO, (A. 259173), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, junio 7 de 1974. — María Emilia Gleiss, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11588 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de ALBA CABRERA de COLLESEI, (A. 251174), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, junio 3 de 1974. — María Emilia Gleiss, Actuario. 1) \$ 6.000 10/pub. 11587 Jn.20-v.jn.23. J1 22-v.j1.24.

EDICTO. — El señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimoctavo Turno, dispuso la apertura de la sucesión de ESTHER MERCHANT de MAYO, (A. 149171), citándose a herederos, acreedores y demás interesados para que comparezcan dentro de treinta días a deducir en forma sus derechos. — Montevideo, abril 3 de 1974. — César Lanata Sanguinetti, Actuario Adjunto. 1) \$ 6.000 10/pub. 11437 Jn.18-v.jn.23. J1 22-v.j1.23.

**DISTRIBUIDORA GALIEN
BOCAGE Y CAPRA S. EN C.**

(Inscripción N° 52.820)

Arroyo Grande 2832

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1963

A C T I V O

Disponible:

Caja y Bancos	\$	8.003.27	
---------------------	----	----------	--

Exigible:

Boletos a cobrar	\$	215.729.83	
Varios deudores	"	119.042.90	
Laboratorios Galien S. A.	"	524.801.72	859.574.45

Realizable:

Mercaderías	"	99.800.00	
-------------------	---	-----------	--

Fijo:

Depósitos en garantía por licitación	"	28.408.70	
--------------------------------------------	---	-----------	--

Transitorio:

Gastos anticipados	"	208.230.25	
--------------------------	---	------------	--

Eventual:

Acciones a emitir	"	9.000.00	
-------------------------	---	----------	--

\$ 1:211.016.67

P A S I V O

Exigible:

Importaciones a pagar	\$	620.030.25	
Acreedores especiales	"	387.450.00	\$ 1:007.480.25

Transitorio:

Gastos a pagar	"	58.433.70	
----------------------	---	-----------	--

No exigible:

Capital colectivo	\$	1.000.00	
Capital en comandita	"	9.000.00	
Resultado del ejercicio	"	135.102.72	145.102.72

\$ 1:211.016.67

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1963

P E R D I D A S

Gastos generales de administración y comercialización	\$	128.448.64
Utilidad del ejercicio	"	135.102.72
	\$	<u>263.551.36</u>

G A N A N C I A S

Intereses	\$	545.54
Mercaderías	"	263.005.82
	\$	<u>263.551.36</u>

Utilidades pasan a cuenta nueva.

Aún no se realizó asamblea.

Inspección General de Hacienda. — División Societa des Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan copiados de Fs. 2 a 4 del libro Copiador de Cartas, certificado por el Registro Público y General de Comercio el 28 de marzo de 1963 y anotado con el N° 2028 al folio 312 del libro N° 12.

\$ 55.200.00. — 1 pub. — 5210.

DISTRIBUIDORA GALIEN
BOCAGE Y CAPRA S. EN C.
(Inscripción N° 52.820)
Arroyo Grande 2832

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1964

A C T I V O

Disponible:

Caja y Bancos	\$	1:186.570.51
---------------------	----	--------------

Exigible:

Boletos crédito y contado a cobrar	\$	1:998.051.00	
Laboratorios Gallen	"	1:675.302.26	
Varios deudores	"	443.531.00	
Valores en cuenta	"	8.500.00	4:125.384.26

Realizable:

Mercaderías	"		951.258.90
-------------------	---	--	------------

Fijo:

Máquinas	\$	4.110.00	
Utiles	"	6.884.86	
Vehículos	"	1:079.231.96	
Depósito garantía licitaciones	"	30.006.65	1:120.233.47

Diferido:

Gastos anticipados	"		98.332.68
			\$ 7:481.779.82

P A S I V O

Exigible:

Documentos a pagar	\$	667.899.08	
Importaciones a pagar	"	4:295.650.45	
Acreedores especiales	"	1:765.379.97	
Oficinas fiscales	"	70.112.08	\$ 6:799.041.58

No exigible:

Capital colectivo	\$	1.000.00	
Capital accionario integrado	"	9.000.00	
Resultado ejercicio anterior	"	135.102.72	
Utilidad del ejercicio	"	537.635.52	682.738.24
			\$ 7:481.779.82

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1964

P E R D I D A S

Gastos de comercialización y administración	\$	2:118.553.94	
Utilidad del ejercicio	"	537.635.52	
			\$ 2:656.189.46

GANANCIAS

Mercaderías	\$ 2:656.189.46
	<u>\$ 2:656.189.46</u>

Utilidades pasan a cuenta nueva.

Aún no se realizó asamblea.

Inspección General de Hacienda. — División Societas Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan copiados de Fs. 12 a 14 del libro Copiador de Cartas, certificado por el Registro Público y General de Comercio el 28 de marzo de 1963 y anotado con el N° 2028 al folio 312 del libro N° 12.

\$ 52.800.00. — 1/pub. — 5211.

DISTRIBUIDORA GALIEN

BOCAGE Y CAPRA S. EN C.

(Inscripción N° 52.820)

Arroyo Grande 2832

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1965

ACTIVO

Disponible:

Caja y Bancos	\$ 631.677.02
---------------------	---------------

Exigible:

Boletos a cobrar	\$ 752.641.60	
Laboratorios Galien	" 4:730.066.12	
Varios deudores	" 585.949.14	" 6:068.656.86

Realizable:

Mercaderías	" 562.476.56
-------------------	--------------

Fijo:

Máquinas	\$ 6.810.00	
Utiles	" 16.331.95	
Material rodante	" 981.035.96	
Depósitos en garantía por licitaciones	" 46.811.17	
Coberturas importación	" 258.179.20	" 1:309.168.28

Diferido:

Gastos anticipados	" 92.226.91
	<u>\$ 8:664.205.63</u>

PASIVO

Exigible:

Documentos a pagar	\$ 886.686.50	
Importaciones a pagar	" 62.023.23	
Valores en cuenta	" 12.000.00	
Acreedores especiales	" 4:923.055.60	
Oficinas fiscales	" 727.294.89	\$ 6:611.060.22

No exigible:

Capital colectivo	\$ 1.000.00	
Capital en comandita	" 9.000.00	
Utilidad ejercicios anteriores	" 672.738.24	
Utilidad del ejercicio	" 1:370.407.17	" 2:053.145.41
		<u>\$ 8:664.205.63</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1965

P E R D I D A S

Gastos de comercialización y administración	\$ 5:430.150.28
Amortizaciones	" 109.004.00
Utilidad del ejercicio	" 1:370.407.17
	<u>\$ 6:909.561.45</u>

G A N A N C I A S

Mercaderías	\$ 6:909.561.45
	<u>\$ 6:909.561.45</u>

Utilidades pasan a cuenta nueva.

Aún no se realizó asamblea.

Inspección General de Hacienda. — División Sociedades Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan copiados de Fs. 30 a 32 del libro Copiador de Cartas, certificado por el Registro Público y General de Comercio el 28 de marzo de 1963 y anotado con el N° 2028 al folio 312 del libro N° 12.

\$ 60.000.00. — 1|pub. — 5212.

ARMCO URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA

(Inscripción N° 2.669)

Cerrito 618

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1973

A C T I V O

Disponible:

Caja	13:477.339.00
Bancos	72:879.176.00

Exigible:

Cuentas corrientes	125:105.378.00
Efectos a cobrar	8:124.480.00
	<u>133:229.858.00</u>
Menos Res. p/Cuentas incobrables	55:784.330.00
	<u>77:445.528.00</u>

Varias cuentas deudoras	199:123.916.00
-------------------------------	----------------

Realizable:

Existencias	1.076:970.120.00
Mercaderías en tránsito	123:883.664.00
Depósito por compras de mercaderías	41:534.552.00

Diferido:

Adelantos para ejercicios futuros	23:098.866.00
-----------------------------------------	---------------

Inmovilizado:

Terreno	17:115.354.00
Edificio	162:788.784.00
Instalaciones	33:323.403.00
Maquinarias y equipos	252:745.947.00
Muebles y útiles	32:601.782.00
Automóviles	37:720.811.00
	<u>536:296.081.00</u>

Menos: lo amortizado	352:277.330.00
	<u>184:018.751.00</u>

Obras en ejecución	11:951.025.00
--------------------------	---------------

1.824:382.937.00

Cuentas de orden	807:375.151.00
------------------------	----------------

PASIVO

Exigible:

Cuentas a pagar	520:060.289.00
Cuentas a pagar exterior	399:922.125.00
Documentos a pagar	152:981.236.00
Previsión para impuestos	125:414.156.00

Capital y reservas:

Capital integrado	500:000.000.00
Reserva indemnización por despido	51:582.024.00

Ganancias y pérdidas:

Ganancias de ejercicios anteriores	15:269.214.00	
Ganancia del ejercicio	222:590.687.00	
	<u>237:859.901.00</u>	
Menos: transferido a capital	163:436.794.00	74:423.107.00
		<u>1.824:382.937.00</u>

Cuentas de orden	807:375.151.00
------------------------	----------------

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE OCTUBRE DE 1973

DEBE

Descuentos	40:378.027.00
Acarreos y fletes	1:356.242.00
Gastos de administración	166:924.152.00
Gastos de venta y propaganda	128:238.519.00
Amortizaciones	38:427.494.00
Impuestos	217:430.378.00
Cuentas incobrables	40:000.000.00
Intereses	120:990.579.00
Ajuste de cambio	10:993.451.00
Gastos bancarios	2:813.232.00
Ganancia del ejercicio	222:590.687.00
	<u>990:142.761.00</u>

HABER

Mercaderías	972:457.075.00
Bonificaciones	17:309.807.00
Varios	375.879.00
	<u>990:142.761.00</u>

Las utilidades resultantes de este ejercicio pasan al nuevo ejercicio según resolución de la asamblea general ordinaria de fecha 14 de marzo de 1974.

Aprobado por la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 14 de marzo de 1974.

Inspección General de Hacienda. — División Sociedades Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan transcritos en el libro Copiador Nº 1 folios 68 y 69, certificado por el Registro Público y General de Comercio con el Nº 753 al folio 307 del libro respectivo; marzo 5 de 1951.

CAMPOMAR, ALONSO Y CIA.

(Inscripción Nº 52.676)

Avenida Rondeau 1430

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 1972

ACTIVO

Muebles y útiles	\$ 1.00
Caja	" 6.665.62
Mercaderías generales	" 4:925.862.42
Adelantos al exterior	" 36.463.00
Cuentas corrientes	" 13:878.396.69
Bancos	" 2:175.966.00
Depósitos administrativos	" 5.855.70
Caja de Jubilaciones	" 170.714.80
Dirección General Impositiva (Decreto Nº 89/968)	" 99.767.00
	<u>\$ 21:299.692.23</u>

PASIVO

Capital realizado	\$ 5:000.000.00
Fondo de reserva	" 2:000.000.00
Aguinaldos y extraordinarios	" 3:858.826.83
Cuenta Directores	" 2:530.669.00
Varios acreedores	" 3:568.070.00
Bancos	" 455.417.00

Ganancias a distribuir:

Del ejercicio 1970-1971	\$ 1:177.902.16	
Del ejercicio 1971-1972	" 2:708.807.24	" 3:886.709.40
		<u>\$ 21:299.692.23</u>

CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 1971-72

GANANCIAS

Mercaderías generales	\$ 22:225.238.01
	<u>\$ 22:225.238.01</u>

PERDIDAS

Intereses y descuentos	\$ 710.065.80
Gastos generales	" 18:117.504.97
Seguros	" 177.710.00
Dirección General Impositiva	" 511.150.00
Ganancias del ejercicio	" 2:708.807.24
	<u>\$ 22:225.238.01</u>

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Ganancias del ejercicio	\$ 2:708.807.24
Del ejercicio 1970-1971	" 1:177.902.16
	<u>\$ 3:886.709.40</u>

Distribución:

A fondo de reserva	\$ 1:000.000.00
A cuenta nueva	" 2:886.709.40
	<u>\$ 3:886.709.40</u>

Aprobados por la asamblea general ordinaria el 22 de diciembre de 1972.

Inspección General de Hacienda. — División Sociedades Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan copiados en el libro Copiador de Cartas a folio 928, certificado en el Registro Público de Comercio el 21 de julio de 1971, con el Nº 2528 a folio 388 del libro Nº 20.

\$ 60.000.00. — 1/pub. — 5274.

LA MANADA SOCIEDAD ANONIMA

(Inscripción N° 235.994)

Avda. Dr. Luis A. de Herrera 3440

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1972

ACTIVO

Caja	\$ 998.00
Inmuebles	" 181.500.00
Gastos de constitución	" 25.600.00
Arrendamientos devengados	" 68.333.00
Pérdidas y ganancias	" 78.480.00
	<u>\$ 354.911.00</u>

PASIVO

Cuentas a pagar	\$ 24.900.00
Leyes sociales a pagar	" 20.011.00
Capital integrado	" 310.000.00
	<u>\$ 354.911.00</u>

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE MAYO DE 1972

GANANCIAS —

Arrendamientos	\$ 170.000.00
Ingresos varios	" 37.000.00
	<u>\$ 207.000.00</u>

PERDIDAS —

Impuestos	\$ 155.651.00
Leyes sociales	" 22.601.00
Gastos generales	" 85.092.00
	<u>" 263.344.00</u>
Pérdida del ejercicio	\$ 56.344.00
Pérdidas de ejercicios anteriores	" 22.136.00
	<u>\$ 78.480.00</u>
Saldo en la cuenta	\$ 78.480.00

Aprobados por la asamblea general ordinaria de accionistas reunida el 27 de diciembre de 1972.

Inspección General de Hacienda. — División Sociada des Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan copiados a folio 6 del libro Copiador de Cartas y Balances, certificado el 15 de diciembre de 1968 con el N° 6181 al folio 259 del libro 19.

S 38.400.00. — 1/pub. — 5195.

SOCIEDADES ANONIMAS Y POR ACCIONES

OBLIGACION DE PUBLICAR SUS BALANCES EN EL "DIARIO OFICIAL"

Por el artículo 12 de la Ley N° 12.080, de 11 de diciembre de 1953, se modificó el artículo 74 de la Ley N° 11.924, de 27 de marzo de 1953, referente a la obligatoriedad de publicar balances en la forma que sigue:

"Artículo 74. Las Sociedades por acciones estarán obligadas a publicar en el "Diario Oficial" el balance general, estado de pérdidas y ganancias y proyecto de distribución de utilidades, dentro de los ciento cincuenta días del cierre del Ejercicio, previa visación de la Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas". (Por el artículo 1° del Decreto N° 230/964, de 2 de julio de 1964, reglamentario del artículo 133 de la Ley N° 13.241, esta visación pasó a la Inspección General de Hacienda).

Por el artículo 73 de la Ley N° 13.349 puede ser sancionada, con una multa de hasta \$ 10.000.00 la omisión en publicar los balances en el "Diario Oficial".

DAMSA SOCIEDAD ANONIMA

(Inscripción N° 52.384)

Carmelo

ESTADO AL 31 DE AGOSTO DE 1972

A C T I V O

Instalaciones	\$ 756.00
Máquinas Oficina	" 825.00
Muebles y útiles negocio	" 27.278.80
Muebles y útiles de Oficina	" 6.872.50
Revaluación instalaciones	" 5.443.20
Revaluación Máq. de Oficina	" 3.802.00
Revaluación muebles y útiles negocio	" 18.378.60
Revaluación muebles y útiles Oficina	" 422.80
Revaluación rodados	" 1.046.88
Rodados	" 145.40
Existencia mercaderías	" 8.093.240.00
Clientes	" 1.551.048.19
Cuentas corrientes	" 672.581.84
Caja	" 2.495.59
Bancos	" 93.438.35
Adelanto sueldos	" 322.200.00
Angel M. Bidart	" 400.000.00
Juana B. de Barrios	" 400.000.00
Angel Zabala	" 600.000.00
Orieta Barrios	" 800.000.00
Enri B. De León	" 400.000.00
Acciones emitidas	" 500.000.00
Acciones suscritas	" 1.800.000.00
	\$ 15.699.973.15

P A S I V O

Proveedores	\$ 2.457.184.12
Gastos a pagar	" 771.000.00
Honorarios a pagar	" 600.000.00
Caja de Compensación	" 12.358.55
Caja de Jubilaciones	" 118.602.66
Vital H. Barrios	" 960.000.00
Fundador C. Particular	" 186.413.71
Impuesto Ventas y Servicios	" 416.427.14
	\$ 5.521.986.18

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

A integrar futuros aumentos	\$ 450.000.00
Capital integrado	" 500.000.00
Capital autorizado	" 500.000.00
Capital suscrito	" 1.800.000.00
Fondo amortización rodados	" 853.80
Fondo Amortiz. muebles y U. de Oficina	" 2.918.12
Fondo Amortiz. muebles y U. de negocios	" 14.262.16
Fondo amortización Máq. de Oficina	" 1.850.80
Fondo amortización instalaciones	" 2.479.68
Reserva capital circulante	" 563.268.65
Fondo de despido	" 69.029.55
Fondo reserva especial	" 33.610.20
Fondo reserva legal	" 77.242.89
Resultado del ejercicio	" 3.325.693.96
Utilidad a distribuir	" 1.650.047.72
Utilidad del ejercicio	" 1.186.729.44
	\$ 10.177.986.97

CUADRO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE AGOSTO DE 1972

Existencia al 31 de agosto de 1971	\$ 4:559.265.00
Más compras	" 15:842.420.11
	<hr/>
	\$ 20:401.685.11
Menos existencia al 31 de agosto de 1972	" 8:093.240.00
	<hr/>
Costo de mercaderías vendidas	\$ 12:308.445.11
	<hr/>
Ventas	\$ 18:502.979.54
Costo mercaderías vendidas	" 12:308.445.11
	<hr/>
	\$ 6:194.534.43
Gastos de funcionamiento	" 5:716.952.83
	<hr/>
	\$ 477.581.60
Descuentos ganados	" 709.147.84
	<hr/>
Ganancia líquida	\$ 1:186.729.44

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AL 31 DE AGOSTO DE 1972

Utilidades anteriores	\$ 746.24
Utilidad del ejercicio	" 1:186.729.44
	<hr/>
	\$ 1:187.475.68
	<hr/>
5 % fondo reserva legal s/\$ 1:187.475.68	\$ 59.373.78
10 % fondo reserva especial s/\$ 1:187.475.68	" 118.747.57
10 % fondo reserva especial s/\$ 1:187.475.68	" 118.747.57
10 % fondo Conserv. M. y Máq. de Oficina s/\$ 1:187.475.68	" 118.747.57
1/12 fondo despido personal s/\$ 1:444.048.00	" 120.337.33
Para distribuir en acciones Aum. capital	" 651.000.00
A cuenta nueva	" 521.86
	<hr/>
	\$ 1:187.475.68

Aprobado por la asamblea general ordinaria realizada el 28 de noviembre de 1973 a las 19 horas.

Inspección General de Hacienda. — División Sociadaes Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan insertos a fojas 72/74 del libro Inventario rubricado el 15 de marzo de 1962 con el N° 2136 a folio 690

\$ 70.000.00. — 1/pub. — 5038.

DAMSA SOCIEDAD ANONIMA

(Inscripción N° 52.384)

Carmelo

ESTADO AL 31 DE AGOSTO DE 1973

A C T I V O

Instalaciones	\$ 756.00
Máquinas Oficina	" 825.00
Muebles y útiles negocio	" 27.278.80
Muebles y útiles de Oficina	" 6.872.50
Revaluación instalaciones	" 5.443.20
Revaluación Máq. de Oficina	" 3.802.00
Revaluación muebles y útiles negocio	" 18.376.60
Revaluación muebles y útiles Oficina	" 422.80
Revaluación rodados	" 1.046.88
Rodados	" 145.40
Existencia mercaderías	" 15:283.825.00
Clientes	" 2:084.065.37
Cuentas corrientes	" 916.632.24
Caja	" 13.618.51
Banco Caja Obrera	" 65.222.00
Caja Asignación	" 32.981.45
Acciones emitidas	" 500.000.00
Acciones suscritas	" 1:800.000.00
	<hr/>
	\$ 20:761.313.75

PASIVO

Proveedores	\$ 3:378.008.54
Gastos de funcionamiento a pagar	" 771.000.00
Honorarios a pagar	" 600.000.00
Caja de Jubilaciones	" 153.442.66
H. Vital Barrios	" 960.000.00
Socio Fundador Cta. Particular	" 186.413.71
Angel Bidart	" 500.000.00
Juana B. de Barrios	" 500.000.00
Angel Zabala	" 300.000.00
Orieta Barrios	" 100.000.00
Enri B. de De León	" 500.000.00
Adelanto sueldos	" 189.800.00
Impuesto Ventas y Servicios	" 291.264.28
Banco Caja Obrera Suc. Cerdón	" 12.647.65
	<u>\$ 8:442.576.84</u>

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

A integrar futuros aumentos	\$ 450.000.00
Capital integrado	" 500.000.00
Capital autorizado	" 500.000.00
Capital suscrito	" 1:800.000.00
Fondo amortización rodados	" 853.80
Fondo Amortiz. muebles y Ut. de Oficina	" 2.918.12
Fondo Amortiz. muebles y Ut. de Negocio	" 14.262.16
Fondo amortización Máq. de Oficina	" 1.850.80
Fondo amortización instalaciones	" 2.479.68
Reserva capital circulante	" 563.268.65
Fondo de despido	" 69.029.55
Fondo reserva especial	" 33.610.20
Fondo reserva legal	" 77.242.89
Resultado de ejercicios	" 4:512.423.40
Utilidad a distribuir	" 1:650.047.72
Utilidad del ejercicio	" 2:140.749.94
	<u>\$ 12:318.736.91</u>

CUADRO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE AGOSTO DE 1973

Existencia principio ejercicio	\$ 8:093.240.00
Compras	" 30:235.297.37
	<u>\$ 38:328.537.37</u>
Existencia final ejercicio	" 15:283.825.00
	<u>\$ 23:044.712.37</u>
Costo mercaderías vendidas	
	<u>\$ 32:003.244.51</u>
Ventas	" 23:044.712.37
Costo de mercaderías vendidas	
	<u>\$ 8:958.532.14</u>
Gastos de funcionamiento	\$ 8:096.629.00
Gastos financieros	" 81.310.00
	<u>" 8:177.939.00</u>
Descuentos ganados	\$ 780.593.14
	" 1:360.156.80
	<u>\$ 2:140.749.94</u>
Utilidad del ejercicio	

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AL 31 DE AGOSTO DE 1973

Utilidad del ejercicio	\$ 2:140.749.84
	<u>\$ 2:140.749.84</u>
5 % Fondo reserva legal s/\$ 2:140.749.94	\$ 107.037.50
10 % Fondo reserva especial s/\$ 2:140.749.94	" 214.074.99
10 % Fondo reserva especial s/\$ 2:140.749.94	" 214.074.99
10 % Fondo Conserv. M. y U. Of. s/\$ 2:140.749.94	" 214.074.99
1/12 Fondo despido personal s/\$ 3:893.734.00	" 324.478.00
A cuenta nueva	" 1:067.009.47
	<u>\$ 2:140.749.84</u>

Aprobado por la asamblea general ordinaria realizada el 28 de noviembre de 1973 a las 19 horas.

Inspección General de Hacienda. — División Societas Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan insertos a fojas 75/77 del libro Inventario rubricado el 15 de marzo de 1962, con el N° 2136 al folio 690.

\$ 62.400.00. — 1/pub. — 5039.

SAIDAT

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA DE AUTOMOVILES Y TRACTORES

(Inscripción N° 2984)

Avenida Gral. Rondeau 1950

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973

A C T I V O

Disponible:

Caja y Bancos	\$ 104.575.624.00	
Bancos valores al cobro	" 1.493.633.00	
Bancos moneda extranjera	" 7.194.520.00	\$ 113.263.777.00

Exigible:

Documentos a cobrar	\$ 53.422.449.00	
Cuentas corrientes plaza e interior	" 225.761.550.00	" 279.183.999.00

Realizable:

Banco República — Garantías de importación	\$ 53.380.00	
Bancos, retenciones y reliquidaciones de importación	" 471.943.638.00	
Cuentas corrientes exterior	" 5.610.018.00	
Repuestos y accesorios	" 147.231.177.00	
Implementos agrícolas	" 47.749.00	
Tractores Ford	" 8.728.272.00	
Camiones	" 30.544.482.00	
Consignaciones	" 8.026.624.00	" 672.185.340.00

Fijo:

Muebles y útiles, instalaciones, equipo de taller, herramientas, material rodante	\$ 20.964.215.77	
Menos amortización	" 20.964.210.77	\$ 5

Inmuebles:

Edificio Rondeau	\$ 1.497.756.25	
Menos amortización	" 1.497.751.25	" 5 " 10
		<u>\$ 1.064.633.126.00</u>

P A S I V O

Patrimonio neto:

Capital integrado	\$ 25.000.000.00	
Reserva estatutaria	\$ 1.037.849.00	
Reserva facultativa	" 90.664.760.00	
Reserva equipo productivo	" 81.717.00	
Reserva mantenimiento capital circulante	" 8.283.338.00	
Fondo Est. de dividendos	" 875.569.00	" 100.943.233.00
		\$ 125.943.233.00

Exigible a corto plazo:

Cuentas corrientes plaza e interior	\$	30:707.993.00	
Cuentas corrientes exterior	"	116:966.585.00	
Acreedores Imp. del ejercicio	"	2:557.404.00	" 150:231.982.00

Exigible a largo plazo:

Documentos a pagar:

Exterior	\$	583:189.606.00	
Plaza	"	28:394.234.00	" 611:583.840.00

Transitorio:

Dividendos Nos. 24, 25, 26 y 27			" 27.835.00
	\$		887:786.890.00

Utilidades:

Impuestos a pagar y Síndico	\$	55:625.355.00	
Utilidades a distribuir	"	121:220.881.00	" 176:846.236.00
	\$		1:064:633.126.00

DEMOSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973

D E B E

Gastos de venta y administración	\$	228:129.544.00	
Gastos de taller y servicio	"	24:285.276.00	
Aportes jubilatorios y asignaciones familiares	"	19:100.568.00	

Amortizaciones:

Material rodante	\$	13:753.230.00	
Equipo de taller	"	3:000.000.00	" 16:753.230.00
	\$		288:268.618.00
Impuestos a pagar y Síndico	\$	55:625.355.00	
Utilidades a distribuir	"	121:220.881.00	" 176:846.236.00
	\$		465:114.854.00

H A B E R

Utilidad bruta por ventas	\$	465:114.854.00	
	\$		465:114.854.00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Utilidad líquida a distribuir	\$	176:846.236.00	
	\$		176:846.236.00
Impuestos a pagar y Síndico	\$	55:625.355.00	
Reserva facultativa	"	112:184.737.00	
5 % Reserva estatutaria	\$	451.807.00	
12 % Directorio	"	1:084.337.00	
83 % Dividendo	"	7:500.000.00	" 9:036.144.00
	\$		176:846.236.00

Aprobado por la asamblea general ordinaria de accionistas, realizada el 29 de marzo de 1974.

Inspección General de Hacienda. — División Sociedades Anónimas. — Deja constancia que los presentes estados se hallan copiados del folio 610 al folio 612 del libro Copiador de Inventarios N° 8, certificado por el Registro Público y General de Comercio el 10 de setiembre de 1969, anotado con el N° 3924, al folio 381 del libro N° 19.

\$ 110.400.00. — 1|pub. — 5686.

